



**ALIANZA
PROGRESISTA**

Configurar nuestro futuro

Por una transformación socioecológica global

**INFORME PARA
LA ALIANZA PROGRESISTA
DE**

Luiz Dulci
Sigmar Gabriel
Risa Hontiveros
Pascal Lamy
Benjamin Mkapa
Sergei Stanishev

*Con un prólogo de
Martin Schulz*



Jochen Steinhilber
Konstantin Woinoff

Configurar nuestro futuro

Por una transformación socioecológica global

Configurar nuestro futuro

Por una transformación socioecológica global

INFORME PARA
LA ALIANZA PROGRESISTA
DE
Luiz Dulci
Sigmar Gabriel
Risa Hontiveros
Pascal Lamy
Benjamin Mkapa
Sergei Stanishev

*Con un prólogo de
Martin Schulz*



Con el valioso apoyo del
Partido de los Socialistas Europeos (PSE)

Esta publicación ha recibido apoyo financiero
del Parlamento Europeo. La plena responsabi-
lidad del texto recae en el autor. El Parlamento
Europeo no será responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en
este texto.

Elaboración: Jochen Steinhilber
Coordinación: Konstantin Woinoff

Pie de imprenta

© Copyright: 2017 Alianza Progresista
Primera edición

Editor: Alianza Progresista
www.progressive-alliance.info

Diseño: Tibor Bogun, Berlin
www.tibor-bogun.de

Traducción: Stefan Gabriel, Potsdam
www.translant.de

Corrección: Klaus Sticker, Bonn
www.uebersetzungen-sticker.de
Lektorat Unker, Osnabrück
www.lektorat-unker.de

Todas las fotografías:
Maurice Weiss/Ostkreuz
www.ostkreuz.de/fotografen/maurice-weiss

Impresión: Druckteam Berlin
Gustav-Holzmann-Straße 6, 10317 Berlin
<http://www.druckteam-berlin.de>

Impreso en Alemania

Reservados los derechos de autor de esta obra, incluidas sus partes. Está prohibido reutilizarla sin autorización del editor y del autor. En particular, está prohibido reproducirla electrónicamente o por otros medios, traducirla, difundirla y ponerla a disposición del público.

La Biblioteca Nacional de Alemania ha registrado esta publicación en la Bibliografía Nacional de Alemania. La información bibliográfica detallada está disponible en la siguiente dirección de Internet:

Índice

Resumen	11
Prólogo <i>De Martin Schulz</i>	17
1 ¿Una nueva esperanza de último momento ... ?	21
1.1 Un nuevo humanismo político	24
1.2 Con actitud cooperativa e internacional	26
1.3 Respuestas realistas y visionarias	27
2 El agotamiento	31
2.1 Más rápido, más alto, más lejos: ¿adónde va la economía global?	31
2.2 Los ricos y los demás: la cuestión social	38
2.3 Señales de socorro: el reto ecológico	43
2.4 Crisis de la democracia	47
3 ¡Apocalipsis no! Una política de transformación	55
3.1 Freno y erosión	57
3.2 ¿Es ineludible el crecimiento económico?	60
4 ¿Quién debe ocuparse de ello?	67
4.1 Las personas en el foco de la atención: radicales libres	68
4.2 Los partidos... ¡también podemos cambiar!	72
4.3 Compañeros de viaje Los sindicatos: «Zur Sonne, zur Freiheit...» Movimientos sociales: «aceleradores de partículas»	79 79 81
4.4 Cuestiones de Estado	85
4.5 Máquinas	91

5 Aspectos claves	95
5.1 El petróleo ya es pasado: por una transición energética global justa	97
5.2 El dinero y los paraísos fiscales	104
5.3 ¡La globalización debe funcionar... con puestos de trabajo dignos en todo el mundo!	111
5.4 ¿Tiempos de riesgo? La paz es indivisible	119
5.5 Gobernar las ciudades	127
5.6 Tierras malas: por una transición agraria	132
 6 Perspectivas	 141
 Biografías	 147
Luiz Dulci	147
Sigmar Gabriel	148
Risa Hontiveros	149
Pascal Lamy	149
Benjamin William Mkapa	150
Martin Schulz	150
Sergei Stanishev	151
Jochen Steinhilber	151
Konstantin Woinoff	152

Resumen

¿Qué es lo que nos toca hacer?

Muchas de nuestras sociedades han perdido la esperanza en un futuro mejor. Las crisis económicas, los desequilibrios ecológicos, las cuestiones sociales por resolver, el enriquecimiento de pocos a costa de muchos y el retorno de la guerra y el nacionalismo como recurso político son hipotecas asfixiantes para individuos y comunidades. Cada vez más personas tienen la sensación de que han quedado excluidas de los avances sociales; más aún, de que las instituciones y sus responsables a menudo no representan sus temores, sus necesidades y sus trayectorias vitales. Las relaciones culturales y sociales que antaño prometían apoyo y orientación se desvanecen. De igual manera, la gente percibe que las fórmulas tradicionales (más mercado, más beneficios, más egoísmo) ya no pueden ocultar que, tras una larga etapa de neoliberalismo, es necesario poner un punto final: así no se puede seguir. Las ansias de tener una orientación y el deseo de que se produzca un cambio son enormes.

Más allá del planteamiento «más de lo mismo» que sigue prescribiendo el modelo político y económico actual y que se limita únicamente a gestionar las crisis, y a diferencia de las distintas variantes del populismo autoritario, que instrumentalizan los miedos y apuestan por los resentimientos y la exclusión, los partidos

socialdemócratas, socialistas y progresistas deben asumir la lucha por el futuro. Un futuro que empiece hoy. Una lucha con la perspectiva de una transformación socioecológica global, que armonice el derecho a una vida digna para todo el mundo con los límites de explotación de los recursos del planeta, y que en vez de ocuparse de problemas fraccionados vuelva a priorizar los objetivos comunes. Para ello, no solo debemos remitirnos a los acuerdos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, sino también a la noción adquirida por muchas personas según la cual la mayoría solo podrá llevar una vida independiente si el pensamiento social y los intereses comunes vuelven a cobrar más importancia.

¿Qué camino hay que tomar?

Para reforzar la confianza en la capacidad de influencia de los partidos socialdemócratas, socialistas y progresistas, necesitamos dos elementos que van de la mano: por un lado, proyectos concretos que se apliquen a la situación inmediata y actual y que se concentren en las condiciones de vida cotidianas y perentorias con todas sus penalidades y adversidades; por el otro, reflexiones a más largo plazo que ayuden a movilizar a la opinión pública y a los aliados políticos y que expresen la voluntad de cambio y la posibilidad de crear una sociedad mejor. Nuestra meta es que todo el mundo pueda vivir bien. Para ello, es necesario garantizar las condiciones que fomenten la libertad, el reconocimiento, la autonomía y la seguridad. El punto de partida de nuestra acción política es un nuevo humanismo político que se toma en serio a las personas, con sus miedos, pero sobre todo con sus aptitudes para influir activamente en la sociedad. Pensar, plasmar y decidir en común: la política y la renovación de la democracia deben empezar cerca de la gente: en el vecindario, en el lugar de trabajo, en la región. Además, deben hacer partícipes precisamente a las personas que hoy día se ven más afectadas por la crisis y sus

contradicciones sociales. Ante esta situación, nuestra tarea consiste, primero, en ganar el apoyo de más personas y proporcionarles los mecanismos para que puedan modelar su subsistencia discerniendo y actuando en el campo político; y, segundo, en mejorar las aptitudes y posibilidades de cooperación. Y es que esta transformación es impensable si no se difunde el plan de cambio del mundo a todas aquellas personas de los ámbitos más diversos que quieran contribuir a encontrar soluciones y a rediseñar el statu quo. Por supuesto, el requisito básico para ello es el acceso a los medios de comunicación, así como al conocimiento y a la información, todo lo cual debe venir garantizado por un empleo democrático de la tecnología.

Para que esta «mentalidad de taller socioecológico» pueda desplegarse, socialdemócratas y socialistas deben llevar adelante su proyecto tradicional de transformar el capitalismo, teniendo en cuenta las condiciones de la globalización, lo cual también implica que replegarse en lo nacional no aporta solución alguna, ya que el alcance de la política nacional es limitado. En su lugar, debemos perseverar en la fundación y ampliación de instituciones regionales y mundiales sólidas.

¿Quién debe ocuparse de ello?

Ahí es donde nuestros partidos adquieren una relevancia central. Siempre hemos tenido éxito cuando logramos reunir tendencias sociales, económicas y políticas bajo una misma idea de futuro, independientemente de lo contradictorias que parezcan a menudo esas tendencias. Ahora nos toca renovar nuestra habilidad para orientar a los demás, para conjugar ideas y «acciones en común», con vistas a equilibrar las relaciones entre las cuestiones sociales y las ecológicas, los niveles nacional e internacional, las estructuras de poder tradicionales y los planteamientos descentralizados. A tal fin, debemos volver a formular activamente alternativas fundamentales y defenderlas en la lucha política.

Toda alternativa sustancialmente progresista topará con la resistencia de poderosos intereses. Por ello, nuestra exigencia de modelar y utilizar las instituciones del Estado supone una condición básica para que la transformación tenga éxito. Con todo, también se espera de los partidos socialdemócratas, socialistas y progresistas que marquen de manera ideológica, social y cultural las discusiones que se entablan en la sociedad, una tarea que solo puede llevarse a cabo aliándose con otros actores. No obstante, para poder actuar como correa de transmisión, nuestros partidos deben ampliar su arraigo en la sociedad y reforzar el intercambio de ideas y conceptos con la gente, los movimientos y las organizaciones sociales que también trabajen en planteamientos socialdemócratas fuera del partido. Así, nuestra política no está enfocada únicamente en conseguir el poder, sino que, mediante alianzas en el seno de la sociedad, se puedan impulsar cambios concretos más allá de los niveles gubernamentales. Aparte de un Estado con capacidad de acción y de los movimientos sociales, los sindicatos también constituyen aliados importantes en favor de una transformación socioecológica, ya sea en el puesto de trabajo, como movimiento organizado de las personas trabajadoras o en alianzas sociales de más amplio espectro.

Afrontar las tareas pendientes no será posible sin esta interacción. Son muchos los retos, pero socialistas y socialdemócratas tendrán que concentrarse primero en una selección de proyectos en el seno de la Alianza Progresista, entre ellos, la transición energética, los planteamientos políticos por la paz, la calidad del trabajo en todo el mundo, la reforma de los mercados financieros, la política municipal, así como cuestiones de desarrollo rural y de alimentación. En nuestra opinión, los modelos de progreso viables en el futuro deben garantizar la sostenibilidad ecológica y la igualdad entre los sexos y deben ir encaminados a construir confianza, renovar la democracia, implantar justicia y superar contradicciones. Se trata de proyectos inclusivos en todos los niveles políticos, que apuestan tanto por

la creatividad y la voluntad de transformación de las personas como por la capacidad de influencia de gobiernos e instituciones.

Prólogo

De Martin Schulz

Vivimos una época agitada en la que muchas cosas parecen desmoronarse. Precisamente por eso, estoy convencido de que deben ser las fuerzas progresistas las que aporten cohesión en estos tiempos turbulentos. Ese es el núcleo de nuestra política, en todo el mundo y ahora más que nunca.

Este mensaje de cohesión como tarea principal de nuestra política social también es el tema principal del presente informe. Este texto no solo es marcadamente sustancial y diferenciado, sino que debe su contenido, ante todo, al hecho de haber sido redactado en cuatro continentes por personas muy inteligentes y diversas del ámbito político progresista. Mi agradecimiento es pues, en primerísimo lugar, para todos aquellos que han intervenido en este excelente informe.

Como fuerzas progresistas, hoy en día nos vemos enfrentados a grandes desafíos de alcance mundial. Vivimos inmersos en un capitalismo financiero internacional cuyo ímpetu expansionista global pone en cuestión, cada vez más, la primacía de la política. Los graves y múltiples desequilibrios que surgen como consecuencia de ello despiertan dudas sobre la capacidad de las sociedades abiertas y la política democrática. ¿Somos aún capaces de marcar diferencias, de

influir, de resolver problemas? Aquí se nos plantea un problema de legitimación cuya dimensión es casi imposible de calcular.

Y en todo el mundo, diversas fuerzas autoritarias aprovechan este problema de legitimación para imponer un esquema político y social diametralmente opuesto a nuestras convicciones progresistas. Una nueva Internacional chovinista desafía a nuestras democracias liberales. Defiende una agresiva política de regresión en todos los ámbitos, promueve el aislamiento nacionalista y lucha contra una sociedad abierta hacia dentro y hacia fuera. Hay algo que todos nosotros tenemos claro: en la lucha por definir las pautas que marcarán nuestro modelo económico, social y político, estamos en primera línea. Pero, justamente por ello, nuestro programa debe ofrecer también conceptos positivos y progresistas que nos sirvan de orientación intelectual tanto a nosotros como a nuestros socios. Necesitamos un concepto general, tanto para formular la política del futuro como para forjar alianzas de los partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas con otros actores externos.

En este informe, proponemos agrupar las respuestas a los desafíos de nuestra época bajo el título de «transformación socioecológica». De manera espontánea, quizá se tienda a percibir esta expresión como excesivamente amplia. Yo creo, más bien, lo contrario: si pretendemos abogar por una revitalización mundial de la política de izquierda, necesitamos este planteamiento amplio, este concepto general de la «transformación». Con él queremos destacar la necesidad de que surjan e interactúen diversos cambios sociales, económicos y colectivos fundamentales y queremos subrayar la importancia de los agentes y las relaciones de fuerza en el seno de la sociedad. Este concepto no solo debe designar una política medioambiental y climática (un contexto en el que el término «transformación» ya es habitual) sino que debe entenderse, más bien, como multidimensional: nuestro objetivo es remodelar ampliamente las estructuras económicas, la práctica democrática y también la cultura política.

Al mismo tiempo, está claro que solo lograremos esa transformación socioecológica global si nos unimos como partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas y si, además, nuestra unión logra encontrar aliados fuertes dentro de la sociedad. Necesitamos a los sindicatos, necesitamos a los movimientos sociales y necesitamos, sobre todo, a todas las personas con voluntad de hacer cambios, para cuyo compromiso solo nosotros podemos ofrecer una plataforma. Con una Alianza Progresista fuerte, que cuente con una amplia base social y contenidos sólidos, podemos asumir juntos nuestra responsabilidad global. De eso se trata, nada menos. Aprovechemos la oportunidad.



1 ¿Una nueva esperanza de último momento ...?

Todo el mundo está de acuerdo en que dejar «que todo siga igual» ya no es una opción viable. La crisis financiera y económica va acompañada de una tremenda crisis medioambiental y de desigualdades extremas de carácter estructural. Asimismo, la democracia pasa por una crisis cada vez más aguda en muchos países del mundo. La guerra y el nacionalismo vuelven a esgrimirse como recursos políticos en detrimento de la cooperación internacional. Según David Harvey, lo que Marx describió en su día se está cumpliendo delante de nuestros ojos: una gran inestabilidad económica, un capitalismo financiero desvinculado de los procesos industriales, tasas de crecimiento en descenso y dismantelamiento de la protección social, así como el enriquecimiento de unos pocos a costa de muchos, perspectivas pesimistas de futuro y luchas cada vez más despiadadas por la distribución de recursos.

Sin embargo, nunca había sido tan acusada la divergencia entre el reconocimiento teórico de la necesidad de acción y la falta real de voluntad de avance y transformación, tanto en el ámbito político como en el social. No solo el capitalismo realmente existente es objeto de duras críticas, sus detractores habituales tampoco salen demasiado bien parados. Así las cosas, este tendría que ser el momento idóneo para la intervención de los partidos progresistas. Una

época en la que el capitalismo financiero ha tenido su «experiencia cercana a la muerte» (Joseph Stiglitz), en la que numerosas sociedades se encuentran sumidas en una profunda crisis de orientación, en la que el distanciamiento entre élites político-económicas y amplios sectores de la población no deja de aumentar, es una época que brinda una oportunidad a los partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas de todo el mundo. No obstante, hay que admitir que, en los últimos años, estos partidos no han tenido la capacidad suficiente para ocupar el vacío dejado por la desorientación y la ausencia de proyectos de futuro, encaminados a modelar sociedades más justas.

En cuanto a las soluciones para los retos actuales, ya no vale maquillar los problemas. Las crisis del mundo, al igual que las crisis de los partidos, nos obligan a pensar y a actuar yendo a la esencia misma del problema. A tenor del estado actual del mundo, no cabe duda de que la labor resulta ardua hasta para el optimista más convencido. Pero también hay una buena noticia y es que, incluso con una coyuntura proclive a la crisis, en los últimos años han mejorado las condiciones para desarrollar alternativas de progreso.

Hace más de tres décadas, dos frases de Margaret Thatcher dieron el pistoletazo de salida de un proceso de reestructuración que marcaría tanto la economía como el pensamiento político y social del mundo entero en los años posteriores: «No hay alternativa» y «La sociedad no existe. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias». En la actualidad, la primera sigue siendo un práctico eslogan al que recurrir cuando la resistencia es grande y los argumentos, débiles. Pero ambas citas son también fuertemente cuestionadas. En vista de las crisis, la necesidad de planteamientos alternativos es hoy en día más que evidente. Si algo ha quedado claro en los numerosos debates que se han sucedido en los últimos años (ya fuera sobre la política climática, las desigualdades o la reforma del mercado financiero), es que contamos con los recursos intelectuales y materiales necesarios para poner en marcha una política alternativa. Así lo demuestra la

gran variedad de análisis críticos de nuestro tiempo, las propuestas para la elaboración de políticas concretas o los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y hay muchas personas que están hartas de la lógica de una política restringida por las circunstancias, porque tal lógica no da prioridad al proceso de toma de decisiones políticas ni al debate sobre las mejores alternativas, sino que más bien asume que el interés público viene establecido *a priori*.

Durante decenios, el egoísmo y el individualismo se ensalzaron como virtudes, según la opinión generalizada de que para poder vivir bien era necesario llevar un estilo de vida acorde con el mercado. Sin embargo, en la actualidad, son muchas las personas que aspiran a una existencia en la que el sentido de comunidad y el espíritu cívico cobren más importancia. El capitalismo como un modo de vida totalmente supeditado a la economía, en el que el ser humano queda reducido a ser un mero cliente y consumidor ensimismado en su propio beneficio, ya no se percibe como una promesa, sino más bien como una obligación ineludible de optimizar constantemente la propia vida. Al mismo tiempo, muchas sociedades están cada vez más sensibilizadas sobre la necesidad de que, en el futuro, vuelvan a imperar el pensamiento social y solidario, así como los intereses comunes, ya que solo así la mayoría de las personas podrán determinar y conformar su propia vida. En la actualidad, muchas personas tienen la sensación de que se ha llegado a un punto final tras esta larga etapa de neoliberalismo, y de que las cosas no pueden continuar como hasta ahora. Las ansias de tener una orientación y el deseo de que se produzca un cambio son enormes.

Ante la brecha entre política y sociedad, el temor a la exclusión social o la sensación de pérdida de control y de identidad de muchas personas no se hicieron esperar las interpretaciones retrógradas de los «arreglacrisis». En el populismo de derecha, el descrédito de la política (descrédito cuyo germen estaba inoculado ya en el neoliberalismo) desemboca en un desprecio evidente por las instituciones

políticas y la «clase política». El modo de disipar nuestros temores y combatir la destrucción del sentimiento de comunidad consiste en vincular la cuestión social a planteamientos autoritarios y chovinistas, así como al rechazo de la cooperación internacional y una política basada en el resentimiento. A pesar de pretender que el rumbo político se recuperó con la nueva dicotomía de amigo/enemigo y el frente claramente delimitado entre «dentro» y «fuera», las promesas populistas solo aportan una falsa sensación de seguridad.

1.1 Un nuevo humanismo político

En este contexto, no bastará con definir quién es el enemigo político, con apelar al sentido común o a la moral ni con llamar a la calma colectiva diciendo que las cosas no van a ir tan mal. Los partidos socialdemócratas y socialistas deben tomarse muy en serio a sus adversarios. En el pasado, nuestros partidos obtuvieron buenos resultados cuando ocuparon la zona de encuentro y desencuentro de toda clase de razonamientos políticos, sociales y económicos. Ha llegado la hora de renovar esta capacidad de pensar y actuar colectiva y conjuntamente, abordando, por ejemplo, la relación entre problemas sociales y ecológicos, entre objetivos a largo plazo y políticas concretas, entre la jerarquía tradicional del poder y estructuras sociales descentralizadas para la toma de decisiones, así como entre la escala nacional y la global.

Nuestra meta es que todo el mundo pueda vivir bien disfrutando de la libertad, el reconocimiento, la autonomía y la seguridad. El punto de partida es un humanismo político centrado verdaderamente en el ser humano y todo aquello que lo conforma, tomando en serio también sus miedos, pero que se fija sobre todo en su capacidad de colaboración para resolver problemas. La política socialdemócrata y socialista debe dotar al individuo de todas las opciones, plataformas e instrumentos que necesite para tal cometido, ya sea

en el puesto de trabajo, en los municipios o en los órganos políticos. Renovar la democracia también implica volver a darle al individuo las oportunidades de ejercer una influencia real aportando sus propios pensamientos, acciones e intervenciones políticas. En este sentido, deberíamos confiar en que la inmensa mayoría de las personas no quieren ver sus miedos confirmados, sino liberarse de ellos. Mientras que el populismo de derecha fomenta una cultura de dependencia e incompreensión, la política socialdemócrata y socialista debe contribuir a que el individuo, en cooperación con los demás, vuelva a recuperar por sí mismo su mundo, para crear así un sentido vital y comunitario.

Este humanismo político también debe contribuir a romper con el fatalismo, es decir, con la idea de que nada puede cambiarse. Hoy por hoy, socialdemócratas y socialistas a menudo se quedan atrapados en la lucha por rechazar los ataques de otras fuerzas políticas. Pero la tarea que verdaderamente importa es volver a tomar las riendas de la lucha por el futuro. Esto implica transitar por una línea bastante delgada. Por un lado, tenemos que hacer hincapié en la urgencia y la envergadura de los cambios a los que nos enfrentamos. Por el otro, no podemos generar alarmismo y pintar escenarios apocalípticos y, acto seguido, limitarnos a buscar la mejor forma de acomodarnos plácidamente al lado del abismo. Lo único que se consigue así es que la sociedad sienta impotencia y que el miedo por el futuro siga propagándose. Según Alexander Kluge, las sociedades necesitan tener esperanza en un futuro abierto y moldeable a su antojo, que vaya más allá de liquidar las cargas y las deudas heredadas del pasado. No se trata simplemente de manejar lo antiguo, sino de construir lo nuevo.

Muchas sociedades parecen haber perdido esta confianza en un futuro mejor y, justamente por eso, hoy es más necesario que nunca volver a invocar esa esperanza, renovarla e insuflarle nueva savia política. De hecho, el pesimismo ante el progreso y el cambio es fruto de esa supuesta ausencia de alternativas propagada

durante tantos años, y lo único que hace es asentar las relaciones de poder actuales. En definitiva, la política necesita valor intelectual, pero también libertad para perseguir proyectos a largo plazo.

1.2 Con actitud cooperativa e internacional

No es posible lograr una alternativa progresista fundamental sin entrar en debates y conflictos sociales, pero nuestros partidos no pueden ni deben pretender hacerlo todo solos. Necesitan rodearse de aliados, ya sean tradicionales, como los sindicatos, o novedosos, como los movimientos sociales y las ONG que han movilizado a tantas personas en los últimos años. Y aunque no siempre guste este mensaje, los partidos del internacionalismo deben reflexionar acerca de todo esto también en clave global. Ignorar el contexto global nos incapacitará para superar unos desafíos cada vez más diversos y complejos. Asimismo, el repliegue a políticas identitarias y soluciones nacionales solo servirá para exacerbar aún más las crisis, sin que sea posible oponer nada a la economía global. Necesitamos que los partidos socialistas y socialdemócratas hagan oír con fuerza su voz internacionalista, para evitar así la retórica ingenua de la aldea global y resistir la tentación de considerar el repliegue en lo nacional como una solución.

La *Agenda 2030* para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 y de carácter universal, plantea una serie de requisitos muy ambiciosos para propiciar una transformación socioecológica de gran calado. Con esta nueva Agenda, la socialdemocracia internacional ya cuenta con un marco de orientación global claramente definido. La *Agenda 2030* implica un compromiso universal con objetivos de sostenibilidad aplicables para todo el mundo. El concepto de política que se desprende de la Agenda también es nuevo: en lugar de limitarse a combatir los síntomas, apuesta por atacar directamente

las causas y los retos estructurales, junto con sus respectivas condiciones políticas y sociales. En última instancia, la fortaleza y, a la vez, el riesgo de esta utopía eminentemente práctica radican en ser una apuesta valiente (y necesaria) por la movilización social y en permitir a los agentes más diversos que basen su política en los objetivos de sostenibilidad.

1.3 Respuestas realistas y visionarias

Al fin y al cabo, lo que necesitamos son alternativas convincentes, plausibles y atractivas, que vayan acompañadas de una estrategia de acción. Los contenidos de infinidad de expedientes detallados a menudo aparecen excesivamente fragmentados o son demasiado incoherentes e impiden que de ellos salga un proyecto capaz de movilizar al partido, a la opinión pública y a los aliados políticos. Con frecuencia, los grandes objetivos (¡libertad, justicia, solidaridad!) resultan demasiado abstractos y lejanos, no sirven para convencer mediante una línea estratégica ni para concretar las opciones disponibles. El objetivo de los partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas pasa por saber formular respuestas «realistas y visionarias» a los grandes retos que nos plantea la época en que vivimos. Para ello, es imprescindible que las respuestas aborden estas dos cuestiones: por un lado, las estrategias políticas y los proyectos iniciales para el aquí y el ahora; por el otro, las ideas y los planes a largo plazo. Se trata de emplear un discurso que entusiasme, aunque suene demasiado utópico, y que refleje la voluntad de cambio y la posibilidad de vivir en una sociedad alternativa, mejor y más justa. De este modo, la actividad política cotidiana trasciende su coto y queda ligada a una visión mucho más amplia. Los proyectos no pueden estar desvinculados de las experiencias cotidianas. Los partidos socialdemócratas y socialistas deben aspirar a unir todos los elementos que forman parte del conjunto de sus objetivos. Justo eso es a lo que se refiere Didier

Eribon cuando describe las distintas dimensiones de la política de izquierdas. Para el sociólogo francés, se trata de «percibir el horizonte» del mundo como un todo, sin dejar de lado las condiciones de vida cotidianas y perentorias, con todas sus penalidades y adversidades. Dicho de otro modo, significa unir a aquellos que intentan «sobrevivir con dignidad» con los que luchan por los derechos de las minorías y las libertades. Sin duda, no es tarea fácil.

Las alternativas conducen a un terreno desconocido por el que nadie sabe a ciencia cierta por dónde transita. La vulnerabilidad de estas alternativas se debe a que seguimos obcecados en no ver más allá del presente o de la gestión de una crisis aguda. No es momento de amilanarse. La persona realista es aquella que hace de la realidad la medida de sus actos. Cuando las condiciones sociales, económicas, medioambientales y políticas cambian de un modo tan drástico como en los últimos años, el individuo que repiensa y reformula su situación a partir de las circunstancias presentes no se niega a afrontar la nueva realidad. No puede decirse lo mismo de aquellos que opinan que todo tiene que continuar igual que antes, de los acomodados en el *statu quo* o de aquellos que siempre tienen a mano una solución (aparentemente) sencilla para todo.

Hoy por hoy, todavía no tenemos respuesta para muchas de las cuestiones planteadas. La mayor parte de los proyectos, así como el nuevo discurso socialdemócrata, aún están por hacer. Asimismo, la actividad política no se desarrolla en el vacío. A modo de ejemplo, la actividad sindical concreta no tiene las mismas implicaciones en la industria automovilística alemana que en las minas de bauxita de la Amazonia. La política de partidos tampoco puede concebirse del mismo modo en una sociedad civil participativa que en un régimen autoritario. Los requisitos políticos, sociales e ideológicos, así como las habilidades y competencias propias, influyen directamente en la creación de estrategias, los medios de acción y las condiciones para el éxito. Por todo lo dicho, este texto solo puede pretender trazar un par de marcas orientativas en el camino. Cada país y cada región

poseen unas condiciones bien distintas sobre las que encarrilar la transformación progresista.



2 El agotamiento

2.1 Más rápido, más alto, más lejos: ¿adónde va la economía global?

La globalización es la tendencia general de la política internacional y nacional. Como tal, constituye el marco de referencia que determina la relación entre economía, política y sociedad. Los gobiernos, las instituciones mundiales y los foros internacionales se dedicaron durante décadas a alabar las excelencias de la globalización: las innovaciones, la desregulación de los mercados financieros, las fuerzas del mercado desatadas, la interconexión tecnológica y un intercambio de conocimientos más eficaz no solo nos iban a reportar crecimiento, sino que también conseguirían nivelar las diferencias de la economía mundial y reducir las desigualdades. Durante mucho tiempo, las cosas marcharon sobre ruedas para los defensores de este proyecto de globalización. El ideal de prosperidad para todos gracias a la competencia y a la liberación de la tutela del Estado parecía quedar confirmado por una serie de acontecimientos, entre ellos, el final del enfrentamiento entre distintos bloques y la integración de cada vez más países en la economía mundial, el ascenso de pequeños y grandes países emergentes, un impulso tecnológico enorme, una mayor diferenciación de la división internacional del trabajo y un

auge de la clase media en los países emergentes. De ahí que tanto los países claves de la economía internacional como los países del antiguo bloque soviético debieran someterse a los ajustes estructurales establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en su programa obligatorio de política económica: es decir, recortes presupuestarios, desregulación de precios y del mercado (de trabajo), liberalización del comercio y privatización de las empresas estatales.

Pero todavía hay más. Estos planteamientos siguieron su curso hasta dar forma al pensamiento único en política y economía, que se caracterizaba por otorgar la máxima relevancia a los procesos económicos. Los objetivos de carácter social, medioambiental y democrático quedaban supeditados a los procesos de mercado y a la política de estabilidad. Al mismo tiempo, las crecientes desigualdades se debían aceptar como el precio a pagar por la libertad en la era de la globalización. El «no hay alternativa» representaba (y representa) una ideología tecnocrática que intenta desproveer de sentido a la acción política aduciendo que la situación es tan compleja que resulta imposible acceder a la realidad y no queda más remedio que someterse a la razón económica. Cualquier alternativa era tildada de «naïf», «irracional», «ideológica» o «infinanciable». Con el tiempo, se desarrolló un auténtico «mito de la racionalidad» en torno a los mercados y las decisiones de mercado. Las élites político-económicas fueron casi siempre las encargadas de hacer pasar como medidas encaminadas al bien común las decisiones tomadas en beneficio de las empresas y las grandes fortunas. Los planes neoliberales basados en criterios de mercado quedaban asegurados al presentarlos como la solución a los problemas socioeconómicos más acuciantes de la sociedad. Hans Tietmeyer, el ex-presidente del Bundesbank, lo resumía como el «efecto benéfico» de los mercados financieros internacionales. En su opinión, los mercados tendrían capacidad para corregir rápidamente las «decisiones políticas equivocadas», tomadas por los legisladores nacionales.

¿Un «triunfo de las ideas fracasadas»?

Este consenso tácito empieza a desmoronarse. En el momento en que las repercusiones sociales y los beneficios unilaterales derivados de este modelo económico se ponen de manifiesto, empiezan a decaer su prestigio y la confianza depositada en que se vele no solo por la prosperidad del «1 %» de la población. Es decir, la euforia se ha desvanecido. Por otro lado, unas tasas de crecimiento más reducidas restringen los márgenes de distribución. Con todo, a fin de poder proseguir con la vieja política, se ha sustituido el consenso en vías de desaparición por un mecanismo que cada vez ejerce más presión en interés de la conformidad: los mercados financieros internacionales, que junto con sus instituciones vinculadas y sus indicadores fundamentales (por ejemplo, expectativas de beneficios, precios de acciones, tipos de cambio, calificaciones de crédito, etc.) ejercen un efecto disciplinario sobre la actividad estatal y las sociedades. Cuanto más frágil sea el consenso sobre el rumbo que debe tomar la economía, más aguda se vuelve una retórica antidemocrática de fondo.

Este tipo de economía se caracteriza por la visión a corto plazo y por una valoración empresarial centrada meramente en los beneficios, con unas expectativas exageradas de rentabilidad. En opinión del artista y sociólogo estadounidense Randy Martin, la «financiación de la vida cotidiana» ha provocado que un gran número de decisiones privadas (vivienda, consumo, etc.) que afectan al endeudamiento de las economías domésticas y la protección social hayan quedado estrechamente ligadas a los mercados financieros. En los «laboratorios» de los grandes inversores institucionales y de los bancos se iban desarrollando nuevos productos financieros, cada vez más complejos, que prometían beneficios elevados y cuyo efecto sobre la estabilidad de los mercados era difícil de controlar. Tales productos recibieron un respaldo político masivo. Así, en los países anglosajones y, más adelante, también en la eurozona se abrieron muchas barreras que dejaron vía libre a toda una serie de productos

de riesgo. De esta forma, el sector financiero dominante se fue alejando cada vez más de la economía real. Sin embargo, en paralelo a ese distanciamiento, ejercía una presión creciente para que empresas y sistemas económicos se plegaran a sus condiciones.

Precisamente este sistema, sacudido y desacreditado (temporalmente) durante la crisis financiera de 2008, penetró con sus repercusiones hasta lo más profundo de la economía real. Se trata del mismo sistema que posteriormente celebraría un «extraño triunfo de las ideas fracasadas» (Paul Krugman) con la rehabilitación del sistema anterior y sus crisis potenciales: asimilación de las pérdidas por parte del sector público, reapertura del «casino» con dinero público y restauración de los principios anteriores con vistas a la crisis de endeudamiento. Numerosos gobiernos reaccionaron con soluciones a corto plazo, por ejemplo, con la reestructuración de su sistema bancario, el aislamiento de los activos tóxicos en bancos malos y un «keynesianismo agudo» basado en la demanda. En el seno del G-20 se acordó mejorar los mecanismos de control y regular los mercados financieros, así como aplicar una mayor transparencia y modificar los planes de remuneración. Sin embargo, nueve años después de la quiebra de Lehman Brothers, muy pocas cosas han cambiado.

Todavía no se han cumplido las promesas de los gobiernos en tiempo de crisis: principalmente, regular y controlar todos los productos financieros en el futuro. Muchas de las medidas anunciadas o planificadas no se han llegado a implantar o han quedado en agua de borrajas por efecto de los grupos de presión. El análisis de otras causas de fondo tampoco ha suscitado demasiado interés hasta la fecha, entre ellas, las estrategias de las instituciones financieras internacionales, los desequilibrios económicos, las desigualdades sociales y una economía debilitada en su conjunto por la supresión de elementos estabilizadores (por ejemplo, los regímenes de seguridad social y los sistemas fiscales progresivos). Ciertamente es que se formaron diversas comisiones, entre ellas, la Comisión Stiglitz¹, que proponía renovar por

completo el orden financiero mundial bajo coordinación internacional. Sin embargo, ninguna de estas propuestas obtuvo siquiera vestigios de continuación, más bien todo lo contrario: solo dos años después de la crisis, numerosos países (entre ellos, muchos del hemisferio sur) ya habían empezado a reducir de nuevo sus presupuestos públicos, pese a las hambrunas, la pobreza y el desempleo, mediante medidas tales como recortes salariales a los empleados públicos, ahorro en los sistemas de protección social o eliminación de las subvenciones para combustibles, alimentos y electricidad. Muchos de los presupuestos públicos actuales son inferiores a los de antes de la crisis.

¿El fin del crecimiento?

En 2008, muchas personas creyeron que la conmoción sería tan breve como reversible y que le seguiría una pronta recuperación. Sin embargo, parece que la dinámica económica se debilita en su conjunto y las fórmulas habituales (como una política monetaria expansiva o los recortes presupuestarios) no ayudan a estimular la economía. Desde la crisis, la tasa media de crecimiento en los países occidentales (es decir, aquellos que disponen de instrumentos y recursos para gestionar los ciclos económicos) ha disminuido un 54 %, según el informe de Naciones Unidas titulado *World Economic Situation and Prospect 2016*. Si se tiene en cuenta el enorme esfuerzo que Estados Unidos, la eurozona y una serie de países emergentes han realizado para intentar que la economía se recupere, ese débil crecimiento parece aún más insignificante: los tipos de interés se redujeron a prácticamente cero (de hecho, en Japón y Suecia quedaron por debajo de cero) y se compraron bonos estatales a gran escala; por ejemplo, solo el Banco Central Europeo (BCE) lo hizo por valor de 1,7 billones de euros. Así pues, incluso contando con el apoyo masivo de las instituciones encargadas de la política monetaria, no es suficiente para que las economías se recuperen.

¹ Comisión sobre las Reformas del Sistema Financiero y Monetario Internacional de las Naciones Unidas, bajo la dirección de Joseph Stiglitz.

Tras afectar a Estados Unidos y la eurozona, el «gran malestar» (Joseph Stiglitz) se cierne ahora sobre los grandes países emergentes. Precisamente, aquellos países que soportaron la economía mundial a lo largo de la crisis y que, desde 2008, representan cerca de dos tercios del crecimiento económico mundial. La situación no es muy alentadora para un gran número de países emergentes y en vías de desarrollo a causa de la disminución de los precios de las materias primas, el fin de la política de tipos de interés cero de la Reserva Federal de Estados Unidos y la elevada volatilidad que esto implica para entradas de capital, precios y tipos de cambio. Así, Brasil y Rusia se encuentran inmersos en una profunda recesión, Sudáfrica pasa por un proceso de estancamiento, mientras que China reorienta drásticamente su modelo de desarrollo hacia la demanda interior y registra descensos. Únicamente la India permanece (por ahora) estable.

Con todo esto se evidencia que para muchos de estos países nunca existió una perspectiva de crecimiento coherente. Para la mayoría de ellos, la integración en el mercado mundial significaba básicamente un modo de acceso más fácil a los países industrializados consolidados, así como a algunos grandes países emergentes en busca de recursos y mano de obra. Este es el caso de muchos países de África, en los que el *boom* del crecimiento que experimentaron los mercados de materias primas se confundió con una estrategia económica sostenible. Ahora sufren las consecuencias de la caída de los precios y de la menor demanda por parte de China. Un fenómeno muy parecido es el que se está observando en las economías rentistas de Asia Central, Oriente Medio y Latinoamérica. En pocas palabras, las rentas se les están acabando.

Hasta la fecha, la mano de obra barata había sido un catalizador importante para el proceso de recuperación de muchos países en vías de desarrollo. Sin embargo, todo esto podría cambiar por completo dentro de poco: a día de hoy, ya se vislumbra que la progresiva automatización de sectores industriales íntegros no solo

repercute en los mercados de trabajo nacionales, sino que también podría volver a reconfigurar la geografía comercial y económica. Si los salarios tienen un papel menos destacado en el futuro, la proximidad a los mercados volverá a ganar importancia. Por citar un ejemplo, miremos el caso de Adidas. La marca vuelve a fabricar su calzado en Alemania. Eso sí, en instalaciones totalmente automatizadas. En este sentido, los países emergentes y los países en vías de desarrollo podrían verse más afectados por la «industria 4.0» que los países industrializados, según el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)².

Se estima que el crecimiento en los países menos desarrollados llegará, como máximo, a 4,8% en 2016, es decir, muy por debajo del 7% mínimo que marcan los objetivos del desarrollo sostenible para poder alcanzar las metas en materia de pobreza. Según el *Global Economic Prospect* del Banco Mundial, antes de la crisis, un país emergente promedio tenía expectativas de alcanzar el nivel de ingresos actual de los países industrializados dentro de unos 40 años. No obstante, con el reducido crecimiento de los últimos años, esta fase de recuperación se ha alargado a 68 años.

El FMI califica esta situación de «mediocre». El economista estadounidense Larry Summers le da el nombre de «estagnación secular» y en China se conoce como «la nueva normalidad». Estos conceptos describen una nueva «era glaciaria» económica, caracterizada por un crecimiento bajo o reducido, recesiones y rendimientos de capital escasos. Las causas pueden ser muy diversas, desde el desarrollo demográfico o desigualdades más acusadas, pasando por la falta de eficacia o necesidades de capital más bajas para innovaciones, hasta la desconfianza en los bancos o el endeudamiento excesivo del Estado. En cualquier caso, no son buenas noticias para las economías nacionales ni para los paradigmas que defienden que el crecimiento económico constituye el punto crucial para el bienestar social. Con todo, también ponen de manifiesto el agotamiento de un

2 Las estimaciones apuntan que el 70% de los puestos de trabajo en Tailandia y la India podrían automatizarse y, en el caso de Etiopía, esta cifra llegaría incluso a 85%.

modelo económico, cuyos costos resultantes se reflejan en materia social, medioambiental y democrática.

2.2 Los ricos y los demás: la cuestión social

La globalización económica se promovió como el gran elemento igualador para distribuir la prosperidad y las oportunidades comerciales en todo el mundo abriendo nuevos mercados, impulsando reformas y estimulando la innovación. De hecho, los avances en materia de desarrollo que se han producido en las últimas décadas son muy importantes. No solo los grandes países emergentes lograron integrarse con paso cada vez más firme en la economía global y, gracias a su dinamismo, abordar sus propios problemas de desarrollo. A decir verdad, el crecimiento se ralentizó en un gran número de antiguas «panteras y tigres asiáticos». Por otra parte, no todos los N-11 (denominación creada por Goldman Sachs en 2005 para identificar las economías emergentes más dinámicas) se están desarrollando de manera firme. No obstante, muchos países del hemisferio sur están recuperándose de forma espectacular, si se comparan con los países industrializados consolidados.

Solo en los primeros diez años del nuevo milenio, el número de países con bajos ingresos bajó de 60 a 39, según el Banco Mundial. En opinión de François Bourguignon, ex-economista jefe de esta institución, la población y los ingresos de la clase media mundial fueron los dos factores que crecieron más rápidamente. En la actualidad, este colectivo dispone al año de una cantidad que se sitúa por encima de los 3.000 dólares estadounidenses y que puede llegar hasta los 6.000 dólares. El nivel de vida de una serie de países emergentes se va acercando lentamente al de las sociedades industriales, hecho que corrobora el balance final mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 2015: desde 1990, la pobreza en el mundo se ha reducido en más de la mitad, la alfabetización ha experimentado

avances importantes, la discriminación de las niñas en la escuela primaria ha disminuido notablemente, el 90 % de los niños de los países en vías de desarrollo están escolarizados y el número de infectados por malaria o VIH se encuentra en claro retroceso. Dentro de unos años, el teléfono inteligente, con todas sus opciones de participación, comunicación, información y consumo, se habrá convertido en un producto universal para la humanidad, el primero de la industria tecnológica.

Vivir a costa de las posibilidades de los demás

Pese a este panorama, el mundo sigue estando muy lejos de convertirse en una «aldea global». Al contrario: mientras que algunos países se benefician del efecto benéfico de la economía mundial, en otros el aislamiento de regiones enteras supone una seria amenaza. En este sentido, es preciso advertir que son bastantes los indicadores del desarrollo humano que han empeorado en muchos países del África subsahariana, así como en los cada vez más numerosos países en conflicto o asolados por guerras civiles. Los progresos en los ODM también se han truncado de repente por culpa de la crisis financiera. El hambre y la pobreza extrema han vuelto a aumentar. Además, el precio de los alimentos, el combustible y las semillas ha subido de forma considerable. El 80 % de los 55 países en vías de desarrollo analizados destinaron más dinero a alimentos básicos en 2012 que en el periodo 2007–2008. Las consecuencias de la crisis también se aprecian en los mercados laborales mundiales: el número de desempleados en el mundo ascendió hasta los 197 millones (2015), es decir, 27 millones más que antes de la crisis. Las deficiencias permanentes del mercado laboral no han hecho más que empeorar desde 2008. Esto comprende, por ejemplo, la gran proporción de trabajo no declarado (una lacra en el caso de los países en vías de desarrollo), el creciente desempleo de larga duración en los países industrializados o los millones de «trabajadores pobres» que, pese a tener trabajo,

viven en condiciones de pobreza extrema. En todos estos casos son significativas las diferencias entre grupos étnicos, regiones rurales y urbanas, o bien entre hombres y mujeres. Los jóvenes son un colectivo especialmente vulnerable. El 45 % de los jóvenes de todo el mundo en edad de trabajar están desempleados o, pese a tener trabajo, son pobres. Según el Eurobarómetro, más de la mitad de los jóvenes europeos entre los 16 y los 30 años se sienten marginados económica y socialmente. Otros factores que contribuyen a la precariedad del mercado laboral son que tres cuartas partes de la humanidad no poseen protección social de ningún tipo y que los derechos de los trabajadores y de los sindicatos se vulneran masivamente a diario, hasta llegar al punto de amenazar, perseguir y asesinar a los y las sindicalistas.

De todos modos, la desigualdad de ingresos entre países ricos y pobres se ha reducido ligeramente en los últimos años, sobre todo gracias a un crecimiento elevado y al aumento de la renta per cápita en los países emergentes y en vías de desarrollo. Pero nada ha cambiado en el dilema del desarrollo global: por un lado, los problemas mundiales (salud, educación, medioambiente, alimentación o conflictos) no repercuten por igual en todos los sitios. De hecho, se localizan en áreas geográficas muy concretas. Las crisis económicas solo agravan esta problemática, ya que inciden con especial virulencia en los países con menos posibilidades de adaptación. Por otro lado, muchos países desarrollados externalizan la injusticia y la pobreza a otras sociedades en forma de menores salarios, condiciones de producción pésimas, adquisición y expolio de tierras o contaminación ambiental. En opinión del sociólogo Stephan Lessenich, no es que los países ricos vivan por encima de sus posibilidades, sino que lo hacen a costa de las posibilidades de los demás.

La mayoría de los países europeos ven la crisis de los refugiados como un problema de seguridad fronteriza cuando, ante todo, se trata de una crisis de justicia. Aparte de la violencia de las guerras, los motivos que llevan a emprender el camino del éxodo o

la migración son muy diversos: la mayoría de las veces se vinculan a la aplicación de decisiones políticas equivocadas durante muchos años, pero también pueden tener su origen en cambios medioambientales, en un Estado fallido, en la destrucción de las condiciones de producción y de existencia o bien en conflictos.

El éxodo y la migración se cuentan entre las formas más extremas de adaptación a condiciones de vida adversas. Los refugiados que llegan a los países ricos son solo una minoría. La inmensa mayoría permanece en países en vías de desarrollo. Con la llegada de un mayor número de refugiados a Europa, en el continente parece confirmarse la idea de que los efectos de las profundas brechas sociales también podrían desembarcar con ellos en las islas de la prosperidad. Aquí chocan dos dimensiones de justicia porque, en los países más ricos, los refugiados se encuentran con los que quedaron en el «último eslabón de la sociedad»: los miembros de las clases media y baja que más sienten la inseguridad. Los procesos de crecimiento mundial los han convertido en los verdaderos perdedores, sus ingresos están estancados, pero tienen que presenciar como un grupo reducido se llena los bolsillos de forma obscena.

Una economía para el «1 %»

En muchos países, la cuestión social vuelve a estar en el ojo del huracán cuando se abordan los problemas sociales. Esto se debe sobre todo a que las desigualdades en el seno de muchas sociedades se están recrudeciendo de un modo alarmante.

Ocho: según Oxfam, esta es la cifra de las personas más ricas del mundo. Su fortuna equivale a las posesiones de los 3.600 millones más pobres, es decir, la mitad de la humanidad. En 2010, los superricos eran 388 personas, pero en 2015 la lista quedó reducida a 62 nombres. Incluso durante el proceso de gestión de la crisis, entre los años 2010 y 2015, los 62 superricos consiguieron aumentar su fortuna en 542.000 millones, mientras que la mitad más pobre de

la humanidad perdía un billón de dólares estadounidenses. Parece ser que el «efecto derrame» (*«pour up»*) es el lema que hoy reemplaza al «efecto goteo» (*«trickle down»*), tan en boga tiempo atrás. El lema del movimiento *Occupy* estadounidense, aquel «somos el 99%», ya no es ninguna exageración. Desde una perspectiva global, vivimos en una auténtica economía en beneficio del «1%»: el 1% de la población mundial posee más que el 99% restante en su conjunto. Desregulación de los mercados laborales y financieros, concentración de las grandes fortunas y mentalidad acaparadora de riquezas entre los ya de por sí privilegiados, sistemas fiscales amigos del capital que contemplan la evasión y el fraude fiscal (prácticas apenas sancionadas en el pasado), orientación extrema hacia el valor accionario, desvinculación entre crecimiento económico y prosperidad material, dispersión de los ingresos del trabajo, falta de oportunidades educativas... Las tendencias y las estructuras que conducen a una mayor desigualdad son inconfundibles, como también lo son sus consecuencias.

Incluso el Foro Económico Mundial de Davos estima en su informe *Riesgos globales 2014* que la fuerte disparidad de ingresos provocará «daños muy graves» en el mundo en el próximo decenio. Las desigualdades dificultan la lucha contra la pobreza y suelen impedir la creación de órganos eficaces y neutrales. La concentración de la riqueza en solo unas pocas manos provoca que la economía mundial sea más vulnerable a las crisis. Con el afán de buscar un rendimiento de las fortunas cada vez mayor, se intenta probar formas de inversión cada vez más arriesgadas. En conjunto, las desigualdades consolidan las relaciones sociales de poder y de oportunidades, socavan la democracia y la estabilidad política, además de contribuir a aumentar la desafección en la sociedad. Actualmente muchas personas consideran que desigualdades tan grandes son intolerables, injustas y que suponen la vulneración de la «economía moral» (Edward Thompson). Incluso las historias más variadas que describen el fracaso de los Estados coinciden en dos causas

principales: el descrédito del Estado y las desigualdades sociales. Tal como demuestran (unos pocos) países de Latinoamérica y África, las desigualdades pueden reducirse por medio de la acción política. De hecho, todos ellos lograron reducir desigualdades abismales aplicando mejoras en la protección social, un aumento del salario mínimo y transferencias directas de dinero (en concepto de salud y educación) a personas en condiciones de pobreza extrema. Así pues, en la futura Constitución del mundo lo más importante no será determinar si la globalización convierte a los ricos en todavía más ricos, sino si seremos capaces de eliminar las causas estructurales de la desigualdad.

2.3 Señales de socorro: el reto ecológico

Si bien la complejidad de los sistemas climáticos nos reserva una y otra vez sorpresas, actualmente ya casi nadie pone en tela de juicio las consecuencias registradas hasta ahora y las previsiones fundamentales: el calentamiento de la Tierra es real y, en su mayor parte, ha sido provocado por la humanidad a través de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde finales del siglo XIX, el aire superficial se ha calentado una media de un grado en todo el mundo. El recién comenzado siglo XXI cuenta con 13 de los 14 récords de años más calurosos, con 2015 como año más cálido desde que en 1880 comenzaron los registros sistemáticos. Como consecuencia, aumenta el nivel del mar, sube la temperatura de los océanos, se funden los glaciares, el hielo del Ártico merma, el permafrost se descongela y las olas de calor son cada vez más frecuentes (en algunos casos, con serias consecuencias para las condiciones de vida).

Para muchos países en vías de desarrollo, el cambio climático supone, ya en la actualidad, una auténtica catástrofe climática. En 15 o 20 años desaparecerán por completo los primeros atolones de Papúa Nueva Guinea y Tuvalu, en el Pacífico meridional. Para la

mayoría de los cerca de siete millones de habitantes de 22 países del Pacífico, emigrar es la única posibilidad de adaptación. En el Sahel, una región con Estados frágiles, guerras civiles y grandes flujos de refugiados, se produjo un aumento medio de la temperatura de uno a dos grados centígrados en los últimos 35 años, debido al cambio en la temperatura del agua del océano Índico. Los periodos de sequía se ven sucedidos por trágicas inundaciones. El riesgo de hambruna, ya de por sí elevado, crecerá de forma drástica en algunas regiones por efecto de las condiciones climáticas. En todo el mundo, el cambio climático está agravando conflictos existentes y enfrentamientos por el reparto de recursos hídricos, suelo fértil y zonas de pastos.

Resulta más difícil establecer previsiones. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), las emisiones sin control podrían incrementar en cinco grados la temperatura media del aire hasta final de siglo, comparada con los valores del periodo de referencia entre 1985 y 2005. En la Cumbre del Clima de París, los países acordaron limitar el calentamiento de la Tierra, en la medida de lo posible, a 1,5 °C promedio, en comparación con los valores de la era preindustrial. Sin embargo, aun si se implantaran plenamente los planes relativos a la protección del clima presentados por 184 países en París, seguiría suponiendo un calentamiento adicional de 3 °C.

Pero además del cambio climático, hay otras señales que alertan claramente sobre el incremento de la presión sobre el medio ambiente. Entre los problemas más urgentes, se encuentran la escasez y la decreciente calidad de los recursos naturales (suelo, agua potable, madera); la amenaza que pesa, para la generación actual y las futuras, sobre una biodiversidad de inmenso valor; el deterioro de otras zonas de la biosfera, especialmente los océanos y las selvas tropicales, así como la expansión del medio urbano (más de la mitad de la población mundial vive en ciudades). La presión antropogénica sobre los sistemas de la Tierra ha alcanzado en la actualidad una dimensión tal que no se pueden excluir alteraciones repentinas del

medio ambiente en todo el planeta. En adelante, para poder vivir sin riesgos, nuestra civilización tiene que desarrollarse dentro de ciertos límites biofísicos «planetarios» (Johan Rockström). Ya se han sobrepasado cuatro sobre nueve de estos límites de presión: la desaparición de especies, el ciclo del nitrógeno, el cambio climático y los cambios en el aprovechamiento de tierras. Pero también el resto de los límites ecológicos marcan ya un deterioro dramático: por ejemplo, la acidificación de los océanos, el aporte de nitrógeno y fosfatos, el consumo de agua y la contaminación del medio ambiente y del aire.

Desequilibrios ecológicos

Las distintas regiones de la Tierra se ven afectadas en diferente medida: aumenta el abismo entre zonas de países industrializados, con condiciones ambientales relativamente estables, y regiones menos desarrolladas del mundo, con un deterioro del medio ambiente que crece de forma drástica. Las desigualdades que esto acarrea se ven acentuadas mediante tres factores: en primer lugar, las regiones más afectadas son aquellas cuyas sociedades dependen en mayor medida de los recursos naturales. En segundo lugar, las principales regiones afectadas no suelen coincidir con las principales causantes. En tercer lugar, las regiones más afectadas no cuentan, en la mayoría de los casos, con la capacidad necesaria de adaptación y de respuesta. Tanto las políticas y las tecnologías medioambientales como una creciente concienciación ecológica han contribuido, especialmente en Europa, pero también en otros países del hemisferio norte, a la mejora y estabilización del medio ambiente. Sin embargo, esto contrasta fuertemente con la elevada contribución a las emisiones totales, al consumo de recursos y a la producción de desperdicios de los países industrializados: en este sentido, en ellos recae la responsabilidad. Su huella ecológica alcanza de lleno al resto de regiones de la Tierra. Siguen trasladando los crecientes costos ambientales

de su prosperidad directamente a los países del sur, por ejemplo, mediante el desguace de embarcaciones en la India y Bangladesh, el «reciclado» de desechos informáticos en Asia y en África o la apropiación de tierras de utilidad agrícola. Igualmente, la inclusión en el comercio internacional de una serie de países en vías de desarrollo como proveedores de materias primas seguirá comportando una redistribución del impacto medioambiental, a través de procesos contaminantes de extracción y transformación *in situ* (por ejemplo, de recursos minerales).

Entre los grandes retos se encuentran el sector agrario y el desarrollo rural, y no solo en el hemisferio sur, donde la mayor parte de la población se dedica a la agricultura. El IPCC atribuye casi un tercio de las emisiones de gases relacionados con el cambio climático a la agricultura, así como a nuevos usos del suelo (las causas principales son la ganadería intensiva y la deforestación destinada a ganar terrenos para uso agrícola). En su forma actual, la agricultura supone una amenaza para los medios de subsistencia de muchas personas, tanto de forma directa como indirecta, a través de las crecientes estructuras monopolistas y su contribución al cambio climático. A esto hay que añadir que las variaciones extremas de la meteorología ponen en peligro la seguridad del rendimiento, el suelo deja de ser fértil y la pérdida de cosechas provoca subidas en los precios del mercado mundial, lo que principalmente afecta, de nuevo, a los sectores más pobres de la población mundial. Así, la agricultura es un punto de partida crucial en la lucha no solo contra el cambio climático, sino también contra la pobreza y la desigualdad.

El ascenso de países emergentes grandes y el crecimiento en los países en vías de desarrollo ejercen presión sobre modelos de producción y consumo basados en el uso exclusivo que hace una pequeña parte de la humanidad de una gran parte de los recursos del planeta y de la capacidad de resistencia de la Tierra. El desarrollo que una serie de países están alcanzando actualmente muestra que seguir como hasta ahora tanto en países industrializados como

en emergentes conduce inevitablemente al colapso ecológico. El *Informe planeta vivo* del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) llega a la conclusión de que, si se mantiene constante el alto consumo de recursos, en 2030 la humanidad necesitará dos planetas para abastecerse de alimentos, agua y energía, y cerca de tres planetas para 2050. Las estrategias de producción y de consumo expansionistas de los que salen ganando con la globalización ya no se pueden sostener.

2.4 Crisis de la democracia

En las últimas seis décadas, la democracia como idea política y forma de gobierno ha ido adquiriendo importancia en todo el mundo. Si en 1941 solo había 11 democracias y en 1970 solo 35, hoy son democracias electorales dos tercios de todos los Estados, la mitad de los cuales cuenta con amplias libertades. Igualmente, los índices generales de aceptación de la democracia como norma general siguen siendo elevados, si bien no está en modo alguno claro que esto vaya a seguir así. Actualmente se habla en todas partes de la «crisis de la democracia»... y con razón. En muchos países se ha bloqueado el desarrollo de la democracia. Se acepta como régimen permanente la limitación de las libertades ciudadanas o la falta de control del Poder Ejecutivo. La legitimación de nuevas y antiguas democracias se desgasta, ya que no pueden responder a las esperanzas de participación, justicia social y seguridad depositadas en ellas. También se extienden nuevos modelos, por ejemplo, las diferentes variedades de «democracias soberanas», que justifican la concentración de poder y la restricción de las libertades empleando argumentos falsos (la mentalidad local, la lucha contra el terrorismo, la religión o el desarrollo económico). La corrupción y la transparencia de las instituciones democráticas siguen siendo un reto para muchos países. Con la globalización económica, se ha reducido el margen de

protección del ámbito nacional; por otra parte, no se ha conseguido crear sistemas *mundiales* de gobernanza democráticos y eficaces.

A esto hay que añadir una creciente inseguridad social, que en la mayoría de las regiones del mundo se ha convertido ya en una constante del desarrollo humano debido a la amenaza diaria de hambre, enfermedades, represión y guerra. Pero también en otros lugares acapara cada vez más la atención pública y política. Se convierte en tema recurrente, cuyas distintas vertientes (inseguridad interna y externa, colectiva e individual, militar y social) no hacen más que entremezclarse. Son muchas las causas, sobre todo una creciente «vulnerabilidad social» (Manuel Castells), miedo al descenso en la escala social y un marcado sentimiento de injusticia, como en lo referente al pacto, ahora quebradizo, entre democracia y capitalismo. A la inseguridad contribuyen también los atentados terroristas y la delincuencia, la migración y la integración, así como la disolución y la reinterpretación de valores tradicionales relacionados con familia, nación o género. Aunque los riesgos no siempre se evalúan racionalmente, lo cierto es que muchos tienen la impresión de que la promesa de seguridad de la era moderna, basada en un progresivo control de los riesgos y en los constantes avances sociales, ya no se cumple. La consecuencia es una profunda crisis de orientación.

¿Quién gobierna y para quién?

Esto se refleja, por una parte, en el firme convencimiento de que las instituciones democráticas ya no pueden afrontar la crisis y, a su vez, está ligado a que en la actualidad ya no se puede responder claramente a la pregunta: «¿quién gobierna?». A este respecto, apenas se puede negar el desplazamiento de los centros de poder político y de decisión hacia agentes económicos poderosos, el traslado a la economía de funciones políticas directivas esenciales y la orientación por principio hacia los intereses «del mercado». De las 100 mayores

«economías» del mundo, 69 son empresas transnacionales, con Walmart en el puesto 10, por delante de España, Australia y los Países Bajos. La estrecha relación entre la acumulación de poder económico y la influencia política se trasluce en la gran influencia que los grupos de presión ejercen en los procesos legislativos, así como en las despiadadas prácticas comerciales de consorcios transnacionales en muchos países en vías de desarrollo, cuyos gobiernos acaban fomentándolas en no pocas ocasiones. En la «democracia conforme a las exigencias del mercado» ya no es la política la que evalúa y corrige, en su caso, los resultados de los procesos económicos marcados por los mercados, sino que es la comunidad quien se adapta a las necesidades de los mercados. Sin embargo, a medida que se vaya disipando la «magia» de las soluciones económicas, tales necesidades se irán imponiendo con más autoritarismo y menos democracia.

Por otra parte, cada vez más personas tienen la sensación de que han quedado excluidas de los avances sociales y de que las instituciones estatales y sus responsables no representan suficientemente sus temores, sus necesidades y sus vidas. Esto tiene que constituir una señal de alarma para nuestros partidos y movimientos y marcar el punto de partida para la formulación de proyectos de futuro valientes e innovadores. En esta situación, la crisis de la democracia se expresa, en primer término, como una crisis de confianza precisamente en las instituciones centrales de formación de opinión y de mayorías; otras, como los bancos centrales o en parte la policía, gozan del favor de una gran parte de la población. Entre las instituciones menos valoradas en todo el mundo suelen figurar, sobre todo, los partidos políticos. Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, menos de 30 % de los europeos confían en los parlamentos de sus respectivos países.

Todo esto ha obstaculizado en los últimos años la preservación del desarrollo de las instituciones y la cultura democráticas. Más aún, el margen de acción para la democracia se ha reducido, incluso considerablemente, en muchos países. Las estructuras

democráticas se ven progresivamente menoscabadas, los procesos democráticos, reducidos a meros métodos de gobierno, elecciones y relaciones públicas (hasta convertirse en comunicación política como ruido de fondo con poca relación con la verdad, como recientemente lo han demostrado la campaña del Brexit o Donald Trump). Frente a ello, la conciencia enfática de la democracia, es decir, la democracia como «forma de vida» (John Dewey) y campo donde experimentar formas de convivencia, pierde importancia o no llega ni siquiera a desarrollarse en muchos países.

Respuestas conservadoras

Para responder a todo ello, la política progresista se enfrenta a un reto complicado: por un lado, no puede cerrarse a los temores y recelos de la sociedad; por otro, no puede caer en la tentación de buscar su tabla de salvación en «soluciones» fáciles, nacionalistas o retrógradas, sino que debe ofrecer interpretaciones y modelos de actuación alternativos. Y, justamente eso, apenas se está logrando en estos momentos. La izquierda, en buena medida, se ha quedado sin habla, de forma que, en muchos países, dos modelos de interpretación y actuación conservadores dominan el debate: por un lado, un «más de lo mismo», y por otro, las distintas variantes de un «populismo autoritario» (Stuart Hall).

«Más de lo mismo»

El planteamiento «más de lo mismo» (lo tradicional con mínimas modificaciones, a lo sumo) ajusta sencillamente el modelo político y económico en vigor hasta el momento en los países con economías más potentes y mayor capacidad de adaptación a la *Green Economy* (economía verde); en la mayoría de los países, sin embargo, no supone más que un recrudecimiento de los efectos de la crisis. Mientras las situaciones catastróficas se van materializando sobre todo

en el hemisferio sur, con lugares y efectos ya concretos, los países dominantes consiguen ir ganando tiempo. En ellos, el malestar ciudadano todavía no es tan profundo, los efectos no alcanzan aún un nivel de gravedad que justifique abandonar ya mismo las sendas políticas acostumbradas. No obstante, en estas circunstancias, la política se convierte esencialmente en gestión de crisis, a menudo presionada de forma extrema para que actúe. «Resiliencia» se ha tornado un nuevo concepto clave. El mensaje central indica que debemos acostumbrarnos y adaptarnos a la crisis. En el Antropoceno, nuestra tarea principal sería controlar el caos autoinfligido. Sin embargo, solo pueden adaptarse los países (y personas) que cuentan con poder y recursos en abundancia; de esta forma, las desigualdades continuarán agudizándose.

Las crisis son, por tanto, las que dictan nuestra forma de pensar, y no las ideas y los proyectos para un futuro mejor. Nos preparamos para un estado de excepción, en vez de abordar las verdaderas causas de la crisis. Como consecuencia, los intervalos entre adaptación y agravamiento de la crisis se acortan cada vez más, y la sociedad en general y el individuo en particular, como un tentetieso agotado, se quedan sin aliento cada vez más deprisa, porque los viejos instrumentos, jerarquías y estrategias sirven cada vez menos para resolver los problemas. El «ir tirando» (*«muddling through»*) se convierte en «ir a peor» (*«muddling down»*), hasta que resulte imposible adaptarse.

«¡Cerrad las murallas!»

Cuanto mayor es la discrepancia entre la percepción de los problemas y la actuación política, y cuanto menor es la confianza en las élites e instituciones políticas consolidadas, mayor es la probabilidad de que las políticas nacionalistas y los movimientos populistas de derecha aprovechen esta asimetría. Desde Filipinas hasta Polonia, iniciativas impulsadas por el resentimiento y alimentadas por

el distanciamiento entre amplias partes de la población y las élites políticas y económicas reciben un amplio respaldo. Sin embargo, las protestas no se dirigen generalmente contra los fundamentos económicos ni contra los agentes económicos dominantes, sino de manera más bien difusa contra «la política» en general. Años de hastío y escepticismo frente a la política y sus procesos se transforman ahora, en muchos sitios, en un abierto desprecio hacia la «clase política». Al mismo tiempo, esa política vincula las cuestiones sociales con planteamientos autoritarios y con una política revestida de resentimiento, que se dirige contra grupos de población muy diferentes: migrantes, minorías étnicas, homosexuales, desempleados de larga duración. Lo que subyace en este caso es una nostalgia por dicotomías claramente diferenciadas: nuevos esquemas «amigo/enemigo» que reduzcan la complejidad del entorno político. El atractivo de contar con frentes bien delimitados es capaz de movilizar y de proporcionar una orientación aparente, pero raras veces conduce a respuestas adecuadas, sino a un callejón sin salida política. Al estilo político descrito (supuestamente «falta de alternativas», con las manos atadas por las circunstancias y la tecnocracia, y que dejó marchitar la lucha política, la negociación democrática y el pensamiento alternativo), el populismo de derecha responde con una política nacionalista carente de argumentos que instrumentaliza el miedo a costa de las minorías y los migrantes. El resultado son ciudadanos movilizados por el miedo y sin opciones de cambio constructivas. Ha llegado el momento de las vallas cada vez más inexpugnables y de las ilusiones entusiastas sobre la integridad del sistema. «El infierno son los otros» (Jean-Paul Sartre). Se pretende conseguir una paz por separado apartando a los propios vecinos con cortafuegos políticos, económicos, tecnológicos y culturales. «¡Cerrad las murellas!» es el lema que al final solo puede desembocar en acometidas aún más violentas y en más inseguridad.

Esta división tendrá ocupada a la facción conservadora; sin embargo, los partidos socialistas y socialdemócratas no pueden

sacarle ningún provecho. Es aquí donde se necesita un planteamiento propio.



3 ¡Apocalipsis no! Una política de transformación

En los últimos tiempos se perfila, a la luz de las crisis persistentes, una orientación a la hora de actuar que podría abrir nuevas puertas a una renovación estratégica y programática de los partidos y movimientos socialdemócratas, progresistas y socialistas. La «transformación» se convierte en un concepto clave, que cobra importancia en contextos variados, desde ámbitos políticos específicos («Transformación de los sistemas de energía») hasta los grandes temas globales («Transformar nuestro mundo: *la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*»). Como ocurre siempre que términos concretos se cuelan en distintos ámbitos, acaban siendo interpretados y utilizados de muy distintas formas. De cara a los desafíos estructurales de la crisis, resulta más apropiado para la revitalización de la política de izquierda adoptar un sentido más amplio del término «transformación». Este debe concentrarse en la necesidad de combinar cambios fundamentales en aspectos relativos a la sociedad y la economía. También debe resaltar la importancia de los agentes y de las relaciones de fuerza de la sociedad.

De entrada hay que reconocer que la cuestión es compleja: hay más preguntas que respuestas. A pesar de ello, es posible encontrar puntos de partida relevantes para la elaboración de políticas

futuras y para el establecimiento de alianzas entre partidos y movimientos progresistas, socialdemócratas y socialistas. En este sentido, transformación significa comenzar aquí y ahora, en las circunstancias actuales, a abandonar los senderos actuales y a emprender un camino nuevo de desarrollo, pero con el objetivo de cambiar a medio plazo estructuras, instituciones y regímenes completos. Se trata de una transformación multidimensional. Si bien hasta ahora se aplicaba el concepto sobre todo en el contexto de la política medioambiental y de lucha contra el cambio climático y, en parte, del desarrollo social, no hay ninguna duda de que cualquier transformación amplia ha de abarcar también las estructuras económicas, la práctica democrática y la cultura política.

La transformación es compleja y requiere del talento de reconciliar lo que, en apariencia, es dispar: desarrollo social y restricciones ecológicas; política local y condiciones mundiales; instrumentos de mercado y estructuras de economía solidaria; jerarquías políticas tradicionales e innovaciones democráticas desde abajo, así como proyectos a corto plazo y objetivos a largo plazo.

Así entendida, la transformación convierte el proceso mismo en una parte de la alternativa, en la medida en que confronta grandes proyectos políticos con la actitud de explorar y experimentar a pequeña escala, que permite tolerar y manejar errores y pasos en falso. De ahí que vayan a surgir muchas preguntas que no podremos responder al principio del camino, algunas apenas se vislumbrarán, otras perspectivas posiblemente serán equivocadas. Es algo que debemos aceptar. Por esta razón, no habrá ya más planes generales a los que la realidad deba ajustarse, los que tantas veces han supuesto el fracaso de la izquierda. Pero deberíamos marcar pautas y expectativas que sirvan para orientar y movilizar. Los proyectos concretos son de importancia para la transformación, dado que generalmente es el futuro próximo lo que mueve a las personas y es en lo cercano donde vuelcan sus esfuerzos; proyectos que se pongan ahora en marcha y que, al mismo tiempo, permitan mejorar más adelante la

posición de partida para políticas de gran alcance, ya sea logrando más libertad, creando instituciones o, sencillamente, consiguiendo dinero para las arcas públicas. «Utopías prácticas» (Pierre Bourdieu), «utopía real» (Erik Wright), «proyectos visionario-realistas»: justamente en esta combinación de rutilantes objetivos a largo plazo con planes concretos y actuales por los que valga la pena trabajar es donde se sitúa el planteamiento específico, el desafío, pero también la oportunidad de una política de transformación de éxito.

3.1 Freno y erosión

Cualquier alternativa sustancial de izquierda se enfrentará al orden establecido y a sus poderosos intereses. Con su modificación, habrá quienes salgan ganando y quienes salgan perdiendo, ya que una transición energética global supone un cambio en el reparto de las cuotas de mercado y cambia la titularidad de la propiedad. Además, hay que tener en cuenta que si se quiere luchar en serio contra la desigualdad, hay que atacar los fundamentos del capitalismo financiero; que una restricción del acceso de los países del norte a las materias primas, la mano de obra y las tierras de los del sur tendrá consecuencias en los modelos de producción y de consumo de los países industrializados; que el respeto de los derechos laborales desplaza el equilibrio de fuerzas a favor de los trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos, cuyos derechos han sido marginados durante años. Las luchas políticas por el reparto tendrán un peso considerable en la decisión de cuestiones relativas a una transición justa a las estructuras de un nuevo orden. Además, no hay que subestimar la capacidad del sistema actual de resistir y mutar en tiempos de crisis. Por ello, para formular alternativas creíbles, es necesario tener al menos una idea de qué actores participarán en los procesos de transformación y cuáles serán las estrategias según las cuales actuarán.

Los partidos y movimientos progresistas, lo mismo que las personas individuales, disponen de estrategias muy diferentes con las que oponerse a las exigencias exageradas del capitalismo. El sociólogo estadounidense Erik Wright distingue esencialmente cuatro categorías: «*smash*» (destruir) o el planteamiento revolucionario, parte de que es imposible que surja nada nuevo si no se destruyen las viejas estructuras; «*escape*» (escapar) o la evasión individual del capitalismo, el intento de construir alternativas en el entorno cercano a la esfera individual; «*tame*» (domar), la cual pretende poner coto al capitalismo mediante reglamentación y políticas de redistribución; «*erode*» (erosionar), que, a través de la acción cooperativa y nuevos proyectos económicos solidarios en áreas importantes para la sociedad, busca crear, lenta y furtivamente, desde abajo, nuevas estructuras que se opongan a la lógica del mercado.

Con vistas a las estrategias actuales de actuación, estas cuatro opciones tienen diferente peso:

- La ruptura clara y completa con lo vigente y la esperanza de que llegue una tormenta revolucionaria que aclare todo apenas convencen a nadie. A corto plazo, no hay alternativas plausibles de izquierda ni quienes puedan ejecutarlas en la práctica. Además, las revoluciones han tenido hasta el momento un éxito limitado a la hora de realizar cambios emancipadores.
- «Abandonar» el capitalismo a título personal se limita, a menudo, a la esfera privada, no intenta encontrar vías de transformación a través de la implicación política y colectiva. Además, necesita a menudo de una posición social privilegiada como punto de partida. Este planteamiento de evasión y rechazo a duras penas puede contribuir a una alternativa amplia.

- Domesticar el capitalismo: ese fue durante mucho tiempo el proyecto de la socialdemocracia y del socialismo. Gracias a la redistribución, a la regulación de los mercados (en particular, del mercado laboral), a la creación de bienes públicos, a la democratización de la economía y a la cobertura del Estado de Bienestar frente a posibles contingencias, se consiguió que el capitalismo de posguerra mejorase efectivamente las condiciones de vida y de trabajo de muchas personas, sobre todo en los países del hemisferio norte. Para ello, fue esencial aceptar el papel central del Estado en la economía, así como sindicatos fuertes que articularan la presión social e hicieran valer los derechos en el puesto de trabajo. Sin embargo, la victoria del neoliberalismo ha eliminado los instrumentos que habrían permitido domar al capitalismo y ha desmontado a conciencia las estructuras institucionales que habrían facilitado un control democrático de la economía. De hecho, en muchos países en vías de desarrollo ni siquiera se permitió su creación. A pesar de todo ello y con las condiciones que impone la globalización, será imposible llevar a cabo una transformación si no se dispone de un nuevo proyecto para domesticar el capitalismo.
- La política impuesta desde arriba, a menudo centralista, ya no basta. Hay que combinarla con planteamientos desde abajo («*erode*») que intenten renovar la política con el apoyo de una base amplia, para crear alternativas a las estructuras de la economía de mercado en el sistema vigente. En un primer momento, esto debe hacerse en nichos, pero siempre con la intención de que sirvan para desencadenar nuevos modelos de actividad económica, solidarios y democráticos, en áreas de interés para la comunidad (suministro energético, salud, alimentación, información, finanzas).

3.2 ¿Es ineludible el crecimiento económico?

El crecimiento económico se ha convertido en el eje alrededor del cual gravitan muchos de los debates sobre la transformación socioecológica. En nuestra sociedad del crecimiento, los modelos productivos y de consumo, la actuación política, las instituciones y la interpretación de los valores están enfocados en el incremento continuo, independientemente de que sean sociedades con una economía dominada por el sector privado o países socialistas con una economía planificada por el Estado. Aún hoy, la respuesta a problemas como la pobreza, el desempleo, la exclusión social y la deuda soberana sigue siendo un mayor crecimiento económico, aunque empiecen a verse con claridad las limitaciones de tal planteamiento.

El dilema del crecimiento

En los últimos tiempos han surgido múltiples variantes de teorías críticas hacia el crecimiento económico que intentan proponer vías alternativas, si bien sus estimaciones son divergentes en muchos aspectos, sea en lo referente a las causas, a los objetivos, a los actores y a la actuación en los planos político y social. En estos momentos, el planteamiento con más aceptación aboga por desconectar el crecimiento económico del consumo de recursos mediante una ola de innovaciones tecnológicas. Se ha acuñado la etiqueta «*green economy*» (economía verde) para una economía respetuosa del medio ambiente, en la que el crecimiento es cualitativo y no cuantitativo, se recurre a energías renovables y la producción no despilfarra recursos. Su motor principal son los participantes en el mercado que son considerados como suficientemente flexibles para acometer la transición. Aparte de ello, la intervención en el funcionamiento de la actividad económica y los requisitos que se plantean para el cambio en la sociedad son más bien limitados. Por su parte, en el concepto de

Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) se depositan las esperanzas de que se realicen grandes inversiones en infraestructuras ecológicas que sirvan para revitalizar una economía debilitada. Es cierto que no será posible sin inversión ni tecnología, pero hay signos que indican que este planteamiento unidimensional no será suficiente, que no es más que la prolongación en el futuro del modelo actual con ciertos tintes ecologistas (por más que fuese la opción que más acomodase a los viejos países industrializados). La razón está en que, en muchos casos, la mejora en la eficiencia queda contrarrestada por la modificación en los hábitos de consumo.

El «dilema del crecimiento» implica, con todo, que no es posible proponer sin más un crecimiento nulo o negativo debido a las consecuencias sociales que tendría, lo mismo en el hemisferio norte que en el sur, con lo cual es un planteamiento inviable en la práctica. Igualmente, abogar por una postura ascética y de renuncia (con lo que tiene de actitud moralista) pasa por alto que no todos parten de las mismas condiciones para cambiar de modelo productivo y de modo de vida, debido a las grandes desigualdades tanto entre países como en el seno de sus sociedades. Es, en primera línea, la población de los países más desarrollados la que tiene que cuestionarse cómo sería un futuro sin crecimiento, puesto que, si bien son una minoría, es la más rica del planeta y la que se vería más afectada por las limitaciones que supondría un modelo más ecológico. Es evidente que estos países tienen que ser la base de un cambio político que permita sobre todo a los países del sur aprovechar sus opciones de desarrollo, y tienen que apoyarlos para que lo hagan de forma sostenible. Ya en el pasado se ha demostrado que para solucionar los problemas más urgentes que amenazan la existencia de las personas (la pobreza y el hambre) la clave no era el crecimiento, sino que lo decisivo era el acceso a la tierra, a los recursos y al conocimiento. De forma análoga, en las sociedades más ricas, la aceptación de modelos que no estén basados en el crecimiento pasa por la reducción de las desigualdades, algo que en la mayoría de los países no

será posible debido a las estructuras existentes y al actual reparto del poder. Para la mayor parte de los modelos críticos hacia el crecimiento, lo importante no es abogar por la contracción de la economía – como erróneamente se pregonaba a menudo –, sino la cuestión de cómo se pueden cambiar las estructuras económicas y sociales para que dejen de estar sujetas a la presión de tener que crecer constantemente.

El dilema del crecimiento económico solo se puede resolver mediante cambios estructurales. No obstante, no será posible librarse de esa «adicción al crecimiento» sin que surjan conflictos, ya que las cuestiones esenciales no se dejarán en manos de los agentes del mercado, sino que se plantearán como una tarea de planificación social y política por la que habrá que luchar: lo que pueda seguir creciendo, porque contribuye al interés común; lo que deba descartarse, porque es inaceptable desde el punto de vista social y ecológico; el modo de diseñar la transición para que sea justa desde el punto de vista social, y la forma de combinar diferentes propuestas para mejorar la eficiencia, para hacer compatible el respeto a la naturaleza y los modelos de producción y consumo (coherencia), así como para determinar la medida justa (conformarse con lo suficiente).

El trabajo de cuidados: considerar la «totalidad de la economía»

Los planteamientos críticos hacia el crecimiento económico se centran sobre todo en la sobreexplotación de los recursos naturales. Sin embargo, a la desmesura frente a la naturaleza se suma la actitud negligente hacia los recursos sociales del sistema económico, que, al igual que los naturales, parecen considerarse inagotables y disponibles sin costo. Estamos hablando de los cuidados a personas sin los que ninguna comunidad ni ninguna economía son capaces de funcionar y que, a pesar de ello, se dejan fuera de la economía «oficial»

y se restringen al ámbito privado, fuera de la vista de todos. Cuidados tanto a otras personas como a uno mismo y que pueden abarcar áreas tan diferentes como la atención a la dependencia, la crianza de los más pequeños y la educación y formación en todos los niveles, y que en muchas regiones se extienden a la salud, la vivienda, el suministro de agua potable y electricidad, así como la producción de alimentos. Son precisamente los cuidados a las personas los que crean las posibilidades de subsistencia. Toda sociedad, toda persona precisa de cuidados; sin embargo, estos se encomiendan mayoritariamente a las mujeres, quienes además suelen encargarse de prestarlos. Este desequilibrio en la distribución de este trabajo contribuye considerablemente a las desigualdades injustas que pesan sobre las mujeres tanto en el mercado laboral como en la economía. Quien ha de ocuparse del cuidado a otros ve limitadas sus posibilidades de formación y empleo. Además, en situación de crisis (sea por conflictos armados, catástrofes naturales, insuficiencias en las prestaciones del Estado o desequilibrios sociales), a menudo son las mujeres las que cargan con el esfuerzo de adaptación que necesita la sociedad afectada. Si bien es cierto que en muchos países aumenta la tasa de empleo de las mujeres y que se ha reducido la discriminación en la educación y en el puesto de trabajo, esto se consigue a costa de someterlas a una carga excesiva, ya que no se compatibilizan ambos ámbitos de la economía, el trabajo de cuidado de otras personas no está repartido equitativamente y no se considera una tarea social. En las sociedades que envejecen, no se deja de hablar de la «crisis de la atención a la dependencia» y de la organización de los cuidados según las reglas de la economía de mercado. Pero hay también otra faceta global de esta crisis, que es la denominada «*care migration*» (migración de cuidadoras), una variante particular de la distribución internacional del trabajo que tiene como consecuencia una redistribución de las labores de cuidados entre mujeres de diversas regiones del mundo y distinto origen social. La OIT estima que hay en todo el mundo 100 millones de empleadas domésticas que a

menudo se encuentran sometidas a una relación laboral ilegal, reciben un salario insuficiente y se encuentran aisladas socialmente. Un quinto de estas mujeres son migrantes que, con frecuencia, tienen a padres e hijos en sus países de origen.

Es necesario, por tanto, que cualquier modelo de progreso con proyección de futuro no solo sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, sino también desde un punto de vista de género y que tenga como uno de sus pilares el reparto justo entre ambos sexos de las tareas de cuidados a otras personas. Una visión unidimensional de la economía no solo deteriora el medio ambiente, sino que también socava los cimientos de la convivencia en la sociedad. Es preciso no solo concretar la política social, sino también cambiar la perspectiva de forma fundamental. Al igual que en los debates sobre crecimiento ecológico, es necesario que el planteamiento parta de una mayor consideración de la persona y de sus necesidades: ¿cuáles son los requisitos para los cuidados de calidad? ¿Cómo se pueden repartir de forma equitativa y justa? ¿Cómo se podrían organizar mejor, aumentar su reconocimiento y revalorizarlos? ¿Cómo pueden incluirse en los indicadores sociales para que aumente su visibilidad? De esta forma, se contempla la economía «como si contasen todas y cada una de las personas» (Lourdes Benería) y al ocuparse de los cuidados, se pone la primera piedra para una economía que sea sostenible y que no discrimine a las personas en función del género. Conceptos feministas como el de «economía de previsión», que abarca la «totalidad del trabajo» y la «totalidad de la economía» (Adelheid Biesecker) y en la que son esenciales los principios de la previsión, así como la cooperación y la orientación a garantizar la subsistencia, pueden ser la base para un impulso decisivo en dirección a la transformación socioecológica.

Para que un nuevo pensamiento económico sea atractivo tiene que quedar claro que no se trata principalmente de imponer la privación y guiarse por la moral, sino de crear oportunidades para que todo el mundo tenga una mejor calidad de vida; por ejemplo, se

trata de disponer de tiempo suficiente para formación y familia, de realizar un trabajo o tareas para la comunidad que tengan sentido para la persona en cuestión. A diferencia de la crítica conservadora al crecimiento económico, que habla de «la contracción como destino» (Meinhard Miegel), que consolida la desigualdad entre los géneros, pretende desmontar los logros de la emancipación de la mujer y a menudo termina siendo una crítica pesimista de la cultura moderna y pidiendo recortes en la protección social, los partidos progresistas tienen que hacer hincapié en algo muy diferente: esta nueva forma de entender la prosperidad alberga en gran medida lo que el escritor austriaco Robert Musil llamaba «conciencia de lo posible», es decir, aquello que les insufla esperanza a las personas y las mueve a participar e implicarse.



4 ¿Quién debe ocuparse de ello?

El argumento de que «no hay alternativas» no se sustenta, pues a fin de cuentas ya se han planificado transiciones energéticas y se han desarrollado planteamientos alternativos de políticas municipales, se han diseñado planes viables de lucha contra el cambio climático y se han debatido propuestas detalladas para una reforma radical del sistema bancario; asimismo, se han presentado medidas concretas tanto para seguir poniendo coto a los mercados financieros y las grandes empresas multinacionales como para que en todo el mundo se reduzca la desigualdad y se cree empleo de calidad. Desde el punto de vista intelectual, la izquierda gana terreno. Además, la *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* que ha aprobado la comunidad internacional representa un marco global para plantear una transformación socioecológica con objetivos e indicadores concretos.

Ya se dispone de los recursos intelectuales, tecnológicos y en parte también materiales necesarios para poner en marcha una transformación; lo que hace falta ahora es encontrar la voluntad política y las fuerzas sociales que contribuyan a su realización. El núcleo de la política socialdemócrata, socialista y progresista ha de ser el establecimiento de un nuevo humanismo político caracterizado por dos rasgos: el primero es el de ser capaz de ganar a más personas

para su causa, al tiempo que se les ofrecen los mecanismos para que, a través de su actuación directa y su propio discernimiento político, participen en el diseño del sistema que garantice su subsistencia; el segundo es la mejora de la capacidad y de las posibilidades de cooperación, pues según el filósofo social francés André Gorz, las soluciones colectivas son las más eficientes que la sociedad puede generar para resolver problemas colectivos.

Además de esto, son necesarios actores con la fuerza suficiente para asumir los desarrollos sociales, contextualizarlos más ampliamente y conectarlos con el Estado y el gobierno. Esta es especialmente la tarea de partidos y sindicatos independientes. Los movimientos sociales pueden llegar a sectores muy diversos de la sociedad, canalizar la expresión de malestar con soluciones políticas y servir de inspiración y motivación para que las personas se impliquen en política. El Estado asumirá igualmente un papel importante para fomentar acciones cooperativas, debilitar la presión de los mercados y cooperar en el nivel internacional. Y, finalmente, ha de cumplirse un requisito decisivo para que el individuo sea capaz de tomar decisiones y cooperar: disponer de información y conocimientos, así como de vías de comunicación.

4.1 Las personas en el foco de la atención: radicales libres

En muchos lugares, la sociedad está experimentando de forma lenta y muchas veces inadvertida un proceso de repolitización alejado del populismo de derecha y en cuyo núcleo está, precisamente, ese nuevo humanismo político. En muchos países han surgido numerosas iniciativas, a menudo lisa y llanamente como respuesta de supervivencia frente a una emergencia, que se acogen a conceptos como «economía solidaria» y «commons» (bienes comunes) y cuyo objetivo es la protección y el fomento del patrimonio común, tanto natural

como social, que es necesario para la subsistencia de las personas. Entre la gran variedad de planteamientos se encuentran algunos de naturaleza tan diferente como las cooperativas de trabajadores y de productores, las cooperativas de generación energética, los talleres abiertos, las redes de comercio justo, las cooperativas de crédito, las diferentes monedas alternativas, los planes de pensiones, los presupuestos participativos, las bases libres de conocimiento y millones de grupos de ayuda mutua. El abanico abarca desde la gestión ciudadana de servicios públicos de suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales en Colombia hasta modelos solidarios de explotación agrícola en Japón, pasando por entidades cooperativas en Emilia-Romaña, organizaciones de aprovechamiento silvícola en Etiopía e incluso sistemas de gestión comunal de bienes comunes, como por ejemplo Navdanya (un banco de semillas de la India), por no olvidar las licencias tipo «Creative Commons» y el software de código abierto (*open source*). En regiones como Latinoamérica, la economía solidaria surgió como respuesta a las crisis de los años 1980 y es ya parte constituyente de la macroeconomía de los países, en su mayor parte complementando las estructuras existentes y no como competencia de ellas. Incluso en Estados Unidos vemos que alrededor de diez millones de personas trabajan en empresas que son propiedad, ya sea total o parcialmente, de sus empleados y empleadas; tres millones más que los afiliados a sindicatos en el sector privado.

Prácticas de gestión comunitaria

Hay formas de gestión comunitaria que existen ya desde hace mucho tiempo, como es el caso de los sistemas de gestión comunitaria de riego en los Alpes suizos, con 500 años de antigüedad. Otras, como Wikipedia, han conseguido en muy poco tiempo cambiar de forma determinante nuestra cultura del conocimiento haciéndolo más accesible y más democrático. Igual que ocurre con los cuidados,

existen ya planteamientos de economía solidaria que son parte constitutiva de las economías actuales y garantizan el sustento y la atención básica a millones de personas, así como el desarrollo local de múltiples grupos de población en todo el mundo.

Estos pioneros de una sociedad nueva no esperan que un golpe de suerte solucione todos los problemas de un plumazo, sino que prefieren ir experimentando diferentes soluciones a pequeña escala en una enorme variedad de áreas. Las iniciativas más destacadas aúnan valores y estrategias que estimulan el pensamiento transformador y le proporcionan una base social. Se trata, en primera instancia, de dotarse a sí mismos de la capacidad de actuar, de tener la sensación de que es posible, por medios propios, realizarse y vivir una vida plena. Crear alternativas viables en las condiciones existentes puede servir de aliciente y liberar el potencial creativo social y político de las personas que en estos momentos no consiguen salir a la superficie. En lugar de limitarse a batallar a la defensiva (¡Contra el recorte del Estado de Bienestar! ¡Contra la contaminación ambiental! ¡Abajo el poder de los bancos!), hay que recurrir a un pensamiento positivo que cuestione, de forma concreta, cuáles son las bases para un mundo más democrático, sostenible y socialmente justo. Por otro lado, no se puede concebir el bien común sin que las personas cooperen, creen espacios comunes y, de esta forma, demuestren que los intereses colectivos no son incompatibles con los individuales. El ser humano es «mejor que un simple agente racional», como nos dice la ganadora del Premio Nobel Elinor Ostrom, pues a menudo muestra facultades asombrosas a la hora de desarrollar sistemas de organización sólidos, multifacéticos y originales con los que hacer un uso sostenible de los recursos y superar dilemas sociales.

Esta «práctica de gestión comunitaria» contribuye a que la economía se democratice y a que se vuelva a orientar más a las necesidades de la sociedad. Si se toma el bien común como referencia de la producción, distribución, gestión y consumo, dejará de ser tal

referencia la lógica de las estrategias que procuran el beneficio de los accionistas, a menudo irrelevante para la sostenibilidad y las cuestiones sociales. La autogestión democrática y la propiedad compartida por la comunidad pueden ir sustituyendo progresivamente las estructuras de mercado clásicas, orientadas al lucro, para dar paso a planteamientos democráticos y solidarios que den prioridad a la sostenibilidad ambiental y al bienestar de todas las personas. El control de la producción y la distribución, así como las coaliciones y alianzas con movimientos sociales, ayudan a plantear demandas que van más allá de las diferentes iniciativas y a preparar el terreno para ulteriores proyectos solidarios.

Partir de los ámbitos cercanos a las personas

Está claro que no se deben evaluar estos proyectos con demasiado romanticismo. Muchas iniciativas nacen de la necesidad y surgen allí donde fracasan el Estado y los mercados, y donde la presión social y económica empuja a las personas a encontrar soluciones solidarias propias y a crear una infraestructura social o cambiar la existente. Por esta vía se organizan aquellos a quienes las estructuras de la economía de mercado no ofrecen ni protección ni ocupación, como por ejemplo las incontables personas que trabajan en la economía informal, los pueblos indígenas y otros grupos frecuentemente marginalizados por las estrategias nacionales de desarrollo económico. Tales iniciativas son de naturaleza precaria, cuentan frecuentemente con un capital reducido y dependen del compromiso individual de quienes participan y del tiempo que pueden dedicar. Existe además el riesgo de que buenas ideas como la de *sharing economy* (economía colaborativa) sean contaminadas por el interés de lucro y que iniciativas solidarias, que constituyen una interfaz entre las estructuras globales y las de la economía de mercado, se debiliten, como ya hemos visto con algunas cooperativas de comercio justo. Y puede

ocurrir que si es una mayoría la que se implica, el Estado opte por dejar de asumir la responsabilidad de la provisión de bienes básicos.

Hasta la fecha, solo en contadas ocasiones se ha aunado el espíritu pionero con estrategias amplias apoyadas por organismos estatales u organizaciones internacionales. De aquí en adelante tendremos que valorar más estos planteamientos solidarios como estrategias activas de transformación, actuar en el nivel político para mejorar sus posibilidades de éxito y modificar las estructuras vigentes para que fomenten tales planteamientos en vez de entorpecerlos. En este sentido, será importante que los planteamientos alternativos no se queden en una versión más amplia de las actividades de las ONG, en las que solo pueda participar una minoría privilegiada que cuente con el conocimiento, el tiempo y el dinero para ello. Así, la reflexión, la planificación y la toma de decisiones han de suceder en los ámbitos cercanos a las personas: en los vecindarios, en los municipios, en las regiones y en el puesto de trabajo. Alguna de estas nuevas vías terminarán siendo un callejón sin salida; otras propuestas, por el contrario, tendrán la capacidad de salir de su pequeño ecosistema inicial para saltar los límites impuestos por el sistema y convertirse en una alternativa a la vista de todos. Para que estos movimientos y planteamientos socioeconómicos superen el plano defensivo y puedan pasar a una ofensiva transformadora, necesitarán aliados.

4.2 Los partidos... ¡también podemos cambiar!

El tejido de valores de los partidos socialdemócratas y socialistas, a saber, libertad, justicia y solidaridad, es sólido y goza de estima en todo el mundo. Muchas iniciativas sociales se hacen eco de ellos. Los partidos socialdemócratas, socialistas y progresistas defienden estos valores. Aplicarlos a los problemas actuales y extraer

conclusiones prácticas para elaborar estrategias políticas, plantear temas, crear posibilidades de alianzas políticas, diseñar un determinado estilo de hacer política y una determinada imagen propia constituye un reto enorme que nuestros partidos deben afrontar con decisión.

Las razones para esta evolución han sido ya tratadas en múltiples ocasiones. De hecho, se acaba constatando que las respuestas de nuestros partidos al cambio radical producido en los fundamentos culturales, económicos, burocráticos y de organización política son insuficientes. Hablamos de hechos y fenómenos recientes como la desintegración del entorno laboral y profesional y la fragmentación de la identidad social; la transformación de las estructuras económicas y la presión a la que se ven sometidas las propuestas normativas socialdemócratas en el Estado; el desinterés por las cuestiones medioambientales y la pérdida de capacidad de ofrecer una referencia a la sociedad; la pérdida de los antiguos aliados y el distanciamiento de los movimientos sociales; la vuelta del nacionalismo y la carencia de una voz común enérgica en la escena internacional.

A ello se le añade que, en todo el mundo, desde hace años, la valoración ciudadana de los partidos, independientemente de su ideología, es bajísima. Con o sin razón, se desconfía de ellos. Prevalce un resentimiento en su contra que se alimenta de la opinión generalizada de que los partidos no se ocupan de lo que importa, sino de sus propios intereses y su poder; que son soberbios; que representan solo a determinados grupos sociales en detrimento del resto; que ya no tienen nada que aportar a la solución de los problemas del conjunto de la sociedad. La baja valoración general de los partidos, tanto en la sociedad como en los gobiernos, va a menudo de la mano de tendencias antidemocráticas y perfiles autocráticos de algunos gobernantes, quienes acaban exigiendo una comunión entre ellos y «el pueblo» para la cual las instituciones democráticas no son más que un estorbo. Con todo, en muchos países los partidos son lisa

y llanamente demasiado débiles, demasiado personalistas y están demasiado reprimidos para poder contraponer su función democrática esencial y ejercerla. Estas no son en absoluto buenas noticias.

Los partidos son necesarios

Y es que el estado de una democracia está estrechamente ligado al de los partidos. Son las únicas instituciones que funcionan como interconexión inmediata entre el Estado, la sociedad y el Parlamento, al tiempo que disponen de la posibilidad de actuar en todos ellos. Aúnan intereses particulares y locales. Formulan concepciones distintas acerca de la idea de sociedad que deben plantear y dirimir en la pugna por la orientación política. Los partidos son, por tanto, necesarios y esto es algo que debería recalcar con confianza la militancia socialdemócrata y socialista. También tienen que tomar nota de ello aquellos miembros de la sociedad civil que, por pura decepción, anuncian el ocaso de los partidos y los califican de superfluos, pues no será posible una transformación socioecológica sin partidos socialdemócratas y socialistas fuertes que se posicionen de forma clara y que sean capaces de actuar de moderadores, ya sea entre diferentes sociedades, ya en el seno de una sola. Eso sí, para poder cumplir tales tareas, tienen que evolucionar.

Servir de referencia

En el pasado, a menudo se apelaba a los partidos socialdemócratas y socialistas cuando aparecía una confrontación entre diferentes planteamientos políticos, económicos o sociales, cuando había que prestar atención a los puntos en los que podía surgir una fractura social, cuando había que superar contradicciones y moderar entre diferentes intereses y opiniones. Y también se recurría a ellos, como sucede hoy, cuando en amplios sectores de la sociedad se manifestaba la necesidad de encontrar explicaciones a la situación vigente

y dar con una forma alternativa para lidiar con ella. Para servir de referencia, para pensar alternativas y para desarrollar planteamientos de futuro se necesita un nuevo ímpetu intelectual y un «sentido de dirección normativo» (Axel Honneth). Los partidos socialdemócratas y socialistas deben formular objetivos sociales activos porque, en los últimos años, la sociedad se define cada vez más únicamente en función de problemas comunes. Para ello hay que hablar también de principios. No se trata de que se pueda aplicar en la práctica, *ad hoc*, cualquier visión de futuro, sino más bien de que los partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas dispongan de un entorno intelectual articulado en laboratorios de ideas (*think tanks*), en plataformas de internet y a través de publicaciones periódicas, que se encuentre ampliamente interconectado y esté en condiciones de elaborar alternativas sólidas y nuevos conceptos teóricos, que luego sea capaz de transferir a los partidos.

Las sociedades necesitan volver a discutir más. Ello implica que deben dejar de equipararse las controversias a la falta de orientación y cesar de descalificarse como meras «riñas partidistas» los debates políticos sobre alternativas fundamentales. Por el contrario, es precisamente la falta de un discurso polémico y de diferenciación política lo que paraliza la confrontación política en muchos países y fomenta los movimientos populistas de derecha. Los partidos socialdemócratas y socialistas, aun siendo receptivos a diferentes planteamientos de la sociedad, necesitan también fidelidad a los principios de sus respectivas formaciones. A pesar de mostrar múltiples diferencias de un país a otro, han de distinguirse de otros partidos mediante un planteamiento ideológico de base claro y una identidad propia. Sobre la base de ambas cosas, se podrán plantear proyectos conjuntos.

Ser un partido de la sociedad

Los partidos que representan a los trabajadores son precisamente aquellos de los que se espera que marquen de forma ideológica, social y cultural las confrontaciones que se dan en la sociedad. Esto supone al mismo tiempo reconocer que ellos no pueden cumplir por sí solos con esa tarea. Insistir en el monopolio de la política y excluir a otros actores de la sociedad no contribuye a reforzar los partidos, sino que los marginaliza. Asimismo, resulta evidente que los incontables movimientos e iniciativas, muchos minúsculos, surgidos en los últimos años no conseguirán por sí mismos cambiar las cosas. Son muy necesarios, pero lo que se necesita sobre todo son partidos que apoyen a esos movimientos. La militancia socialdemócrata y socialista debe, por lo tanto, conseguir una mejor convergencia entre las nuevas formas de poder y las tradicionales.

Los partidos socialdemócratas y socialistas aspiran a dar forma a las instituciones del Estado y a hacer uso de ellas, lo cual es un requisito fundamental para que la transformación tenga éxito. Por otro lado, para poder funcionar como correa de transmisión, han de evolucionar para convertirse en partidos sociales. Habrán de ampliar el espacio de debate y argumentación fomentando un intercambio más estrecho con personas que, si bien desde fuera del partido, ya están trabajando en soluciones de carácter socialdemócrata. No se trata tanto de tomar toda esa multiplicidad de movimientos como barómetro con el que medir los cambios en la sociedad, sino de plantear un cambio fundamental de perspectiva. La pregunta que se plantea ya no es «¿qué puede hacer el partido por ustedes?», sino más bien «¿qué pueden conseguir juntos partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos?» y «¿cómo pueden los partidos impulsar tales proyectos conjuntos desde su posición política privilegiada?».

Dentro de estas redes, los partidos interpretarán un papel muy importante, si bien no serán los únicos en el reparto.

En muchos países, así como a escala internacional, la masa de agentes progresistas está fragmentada y la relación entre ellos está teñida de desconfianza y marcada por los malentendidos y por concepciones ideológicas y estratégicas esencialmente distintas. Es necesario abordar esas divergencias de una forma productiva. La cooperación con los diferentes agentes progresistas no ha de realizarse a través de su integración en una estructura política general creada por el partido, sino que solo funcionará si esos agentes pueden trabajar en proyectos concretos sin perder su autonomía.

Con ello, la política progresista ya no se limita a la consecución del poder, sino que inicia, a través de cooperaciones y alianzas sociales, cambios concretos más allá del plano de la acción de gobierno. Así, los partidos dejan de ser exclusivamente una herramienta destinada a la construcción de mayorías, para convertirse en «*creative communities with a cause*» (comunidades creativas que persiguen una causa), puntos de cristalización de debates sociales con planteamientos claros. A menudo, es difícil mantener el equilibrio entre la faceta de partido social y la de partido de Estado, es decir, entre la receptividad hacia las diferentes manifestaciones de política social progresista junto con la capacidad de construir alianzas, por un lado, y la conciliación de diferentes intereses en los momentos en los que se ostenta el gobierno, por el otro. A pesar de ello, es necesario conseguir aunar ambas facetas, pues ambas determinan nuestra concepción de la política: solo es posible conseguir un cambio real en los parlamentos, en los gobiernos y en el Estado cuando viene precedido por una politización de la sociedad. A su vez, el poder democrático – y también el contrapoder democrático – podrá desarrollarse a largo plazo solo si cuenta con el apoyo de organizaciones como los partidos políticos y los sindicatos, que pueden actuar en las instituciones claves de la sociedad. A diferencia de los movimientos sociales y las ONG, los partidos tienen que prestar más atención al interés común y tener en cuenta posibles contradicciones. Sin embargo, en el contexto de una transformación, serán los partidos quienes, a fin

de cuentas, tendrán que tomar a menudo decisiones que determinen la dirección que se debe seguir.

«Nadie debe quedarse atrás» («Leave no one behind»)

De ninguna manera es admisible que sean solo los privilegiados de las capas más prósperas de la sociedad los que participen activamente en la transformación. La revitalización de la política socialdemócrata y socialista debe más bien partir de aquellas personas que en la actualidad han de lidiar con las contradicciones más acusadas de la sociedad. Se trata en muchas ocasiones de la mayoría de la población, que no se siente representada por ninguna institución u organización, porque está excluida de la actividad económica y social. Estas personas habrían pertenecido antes a la clase obrera en los países desarrollados, posiblemente con un buen salario y un empleo estable, se mantenían activas en alguna organización, cultivaban intereses políticos y culturales y mostraban un fuerte sentido de pertenencia a su entorno. En cambio, hoy en día se cuentan objetivamente entre los perdedores de los procesos de globalización, se sienten abandonados por «las élites» y sin representación en «política». Con tal inseguridad, perciben como una amenaza todo nuevo cambio estructural, que supondrá irremediabilmente una transformación. «Leave no one behind», nadie debe quedar atrás, fue la consigna de la *Agenda 2030*. Este ha de ser el hilo que guíe a la militancia socialdemócrata y socialista, pues de lo contrario se afianzará lo que hoy empieza a perfilarse: que la derecha se apropie de las cuestiones de clase dándoles un cariz populista y que exija soluciones reaccionarias y nacionalistas. Para conseguirlo, necesitamos la resistencia de un corredor de fondo, pues los cambios imponen paciencia a partidos, aliados y votantes y requieren tiempo. No basta con conjurar nuevas estrategias en los programas, es necesario que con su aplicación práctica terminen de concretarse y demuestren su valía.

4.3 Compañeros de viaje

Los sindicatos: «Zur Sonne, zur Freiheit...»

Después de pasarse años elaborando diagnósticos minuciosos de la crisis y del declive de los movimientos sindicales y de la clase trabajadora, en los últimos tiempos los sindicatos han podido experimentar un resurgimiento. Hoy apenas se habla de panoramas apocalípticos y en muchas regiones los sindicatos vuelven a desempeñar un papel de más importancia en las confrontaciones políticas y sociales. Es cierto que, al igual que en el conjunto de los agentes progresistas, en los sindicatos también existen diferentes ideas sobre lo que todavía se puede recuperar del antiguo sistema y lo que se debe descartar. Sin embargo, no solo serán actores claves en muchos procesos transformadores, en el caso de ámbitos fundamentales de la transformación como la energía, la industria, la agricultura, la construcción, el transporte y los servicios públicos, sino que también serán decisivos para que la transición sea justa, para la renovación y evolución de la democracia y para el diseño de la globalización.

Durante mucho tiempo, se consideraba a los sindicatos instituciones que preferían mantener las estructuras tradicionales, en especial frente a una posible transformación ecológica. Si bien muchos sindicatos siguen teniendo una actitud ambigua en cuestiones medioambientales, lo cierto es que en los últimos años ha habido una serie de organizaciones en todos los niveles, local, regional y global, que han desarrollado una nueva postura acerca del modo en que compatibilizar y coordinar el desarrollo social y el progreso ecológico. Hay muchos planteamientos de política sindical que pueden desmontar la tradicional confrontación entre economía y ecología, desde las alianzas como la denominada «*Teamsters and Turtles*», en la que se coordinaron sindicalistas y ecologistas estadounidenses con motivo de las manifestaciones contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), hasta la implicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en las negociaciones sobre el cambio

climático y en la reflexión conceptual sobre una transición justa a un nuevo modelo económico, por no olvidar las numerosas iniciativas locales para fomentar los llamados «*climate jobs*». Este cambio de percepción y planteamiento se debe sobre todo al hecho evidente de que la lucha contra la crisis ha exigido a muchos sindicatos un cambio en la percepción de su papel e identidad, de su cultura organizativa y de su elección de objetivos para poder seguir desempeñando un papel determinante.

La consigna de la CSI reza «*There are no jobs on a dead planet*» («No hay empleos en un mundo muerto»). Mientras que en 1997 los sindicatos se mostraban escépticos ante la firma del Protocolo de Kioto, ahora se encargan, especialmente a través de sus confederaciones internacionales, de forzar el debate: ¿cómo se puede aprovechar la lucha contra el cambio climático para replantear y consolidar los principios del empleo digno (empleo estable y seguro, seguridad social, respeto a los derechos de los trabajadores y diálogo social)? De hecho, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la *Agenda 2030* contienen objetivos que solo se pueden alcanzar con la colaboración intensa de los sindicatos.

El concepto de transición justa que persiguen los sindicatos recoge el espíritu y la estrategia de una transformación socioecológica tal y como se la plantean los trabajadores. Representa un horizonte común para los sindicatos durante los próximos años, ofrece un espacio de encuentro con otros actores y, en cada proceso individual, cuestiona de forma muy concreta quién carga con el costo de la transformación ecológica. En el fondo, aquí no hay ninguna contradicción entre la política medioambiental y la social, sino que más bien se refuerzan mutuamente; el objetivo de cualquier medida ha de ser reducir emisiones, erradicar desigualdad y pobreza y crear empleo de calidad. Es cierto, con todo, que hay procesos de transformación concretos, en su mayoría locales, en los que hay un conflicto entre objetivos, ya que muchas personas asalariadas han tenido que experimentar y sufrir que en los últimos años se hayan llevado

a cabo diferentes cambios estructurales sin consultarlas y en contra no solo de sus intereses económicos, sino también de sus necesidades de subsistencia. Puede que los puestos de trabajo en sectores que emplean materias primas de origen fósil contribuyan al cambio climático, pero en estos momentos significan el sustento de muchos. Una transición justa ha de conseguir, por lo tanto, garantizar los puestos de trabajo solo en aquellos sectores que contribuyan al paso a un modelo económico con menos emisiones y, *al mismo tiempo*, ofrecer respaldo y ayuda directa a aquellos que se vean afectados de forma concreta por el cambio estructural. Esto incluye el estudio y la evaluación temprana de las consecuencias sociales y laborales de los procesos de transformación, así como la adopción de medidas de educación y formación adecuadas y la ampliación de la cobertura social.

Los sindicatos fuertes cuentan, como ningún otro actor, con los más diversos recursos potenciales susceptibles de ponerse al servicio de la transformación socioecológica, ya sea en el puesto de trabajo, en su calidad de movimiento obrero, ya sea como representantes de los intereses de los trabajadores ante los órganos del Estado, o bien como aliados en coaliciones sociales de amplio espectro.

Movimientos sociales: «aceleradores de partículas»

Los movimientos sociales y de protesta han vuelto a adquirir relevancia en los últimos años. Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, solo entre 2006 y 2013 se registraron más de 800 protestas en casi 90 países. Al hilo del movimiento Occupy surgieron en pocas semanas 1.400 acampadas en las grandes ciudades del mundo. Aparte de la Primavera Árabe y de las acampadas en los parques de Occupy, también hubo numerosas revueltas por la falta de alimentos, huelgas, violentos enfrentamientos por conflictos laborales y disturbios en las ciudades. Los denominados hackers y los denunciantes (*whistleblowers*, en inglés) consiguieron hacerse con grandes

volúmenes de datos y contribuyeron, como en el caso de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) o de los *Panama Papers*, a que hubiese más transparencia acerca de las actuaciones de los gobiernos, las empresas y los mercados financieros.

Por más que los factores concretos que en cada lugar desencadenaron las protestas fuesen muy diferentes, las reivindicaciones de los diferentes movimientos convergían en la justicia económica, en la «democracia real» y en los derechos de las personas. De esta forma se alzaron contra la erosión de las bases sobre las que se asienta la cotidianidad social y contra la desconexión entre la economía y las necesidades de una gran parte de la sociedad. Tanto en Túnez como en Brasil, en España como en Francia, este «levantamiento de la población formada» (Wolfgang Kraushaar), fundamentalmente jóvenes pertenecientes a la clase media, era una protesta contra la falta de perspectivas. En muchos países de África y en numerosas grandes ciudades de todo el mundo son frecuentes las llamadas «*service delivery protests*» (protestas por el acceso a los servicios básicos), que luchan por que tanto la vivienda como el transporte, la electricidad, la energía en general y los alimentos sean asequibles.

Los movimientos feministas han sido igualmente un actor importante en multitud de conflictos locales y nacionales en los últimos años. Hay que hacer constar, eso sí, que la realidad de la vida de las mujeres es tan diversa como los espacios de acción política, económica, social y cultural en los que se dan las actuaciones políticas feministas y que enmarcan la reacción de los movimientos feministas. En los países desarrollados, la política feminista se centra desde hace mucho tiempo en hacer valer los derechos civiles, en desmontar la asignación de roles prefijados a hombres y mujeres, en la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades en la representación dentro del mundo laboral y de la política, así como en la igualdad de oportunidades en el acceso a una profesión y la paridad de salarios por el mismo trabajo. En los países del sur, suelen tener prioridad la lucha por el derecho de las personas a una vida segura,

es decir, liberarse del miedo y la penuria, tener la opción de vivir dignamente. En esencia, se trata de hacer valer los derechos humanos, como el derecho a la educación y al trabajo, el derecho a no ser discriminado, así como el derecho a una vida segura y en libertad. Los movimientos ciudadanos de base (*grass-roots*) y las intelectuales feministas de todo el hemisferio sur fueron los actores que mayormente libraron la batalla por una justicia global y por integrar las posturas feministas en las cuestiones de política económica. Hace ya mucho tiempo que se ocupan del acceso al agua, la salud pública, la educación y la seguridad, así como de la cuestión de la privatización de los bienes de titularidad pública. De esta actividad han surgido muchos planteamientos innovadores en el plano de la organización y la estrategia política. Últimamente, cuestiones como la violencia de género, el machismo y la justicia social cobran también protagonismo para los movimientos feministas de los países desarrollados. En su actividad se sirven de los nuevos medios de comunicación social, al tiempo que están bien interconectados con otros movimientos sociales.

Es posible identificar en todos estos movimientos sociales, aun siendo diversos, un ambiente diferente que se alza por todo el mundo. Al encontrar cerrados otros canales de comunicación, o al no encontrarlos siquiera, las protestas, aun siendo tan diferentes, sirvieron para articular la expresión del malestar. Ya fuesen los indignados del 15-M, los de Occupy, los que ocuparon el parque Gezy, el Y'en a marre de Senegal y muchos otros, todos ellos canalizaron el mensaje de que la política y las instituciones de muchos países se estaban blindando contra las necesidades y los temores de las personas. En las protestas se aunaban la crítica por la degradación de la situación social con las críticas a modos de gobernar cada vez más autoritarios, o bien a modo de regímenes corruptos modernizadores, o bien a través de una gestión de crisis que eludía el control democrático, como en Europa. La implicación y el compromiso que mostraron estas personas, en su mayoría jóvenes, son muy especiales,

pues estamos hablando de una generación cuya situación personal viene marcada por la incertidumbre y que, no obstante, no se conforma con el sarcasmo de la decepción, sino que opta por buscar una vía para poner en práctica sus opciones, por más que sean limitadas. Como indica Claus Leggewie, «no es que se cuestione el fundamento de la democracia, es más bien su aplicación práctica la que decepciona».

Si nos quedamos en una consideración superficial, es cierto que muchas de esas protestas no tuvieron resultados concretos, algo por lo que fueron calificadas como folclore político y recayeron en el romanticismo social, pero lo cierto es que, con más perspectiva temporal, se ve con claridad que tuvieron éxito: esgrimiendo la consigna de que «un mundo diferente es posible», los movimientos sociales y los espacios como el Foro Social Mundial empezaron a socavar el mito de la falta de alternativas, de lo inexorable, según el cual en la actualidad es prácticamente imposible plantear modelos alternativos de sociedad. Muchas de las reglas que se formularon entonces para poner frenos a los mercados financieros internacionales han llegado al día de hoy a los escritorios de los ministros.

Las protestas han conseguido cambiar el discurso político y llevar al debate social temas como la desigualdad. Asimismo, han dado pie a nuevas fuerzas sociales y partidos. Y algo aún más importante: ofrecen un espacio político de referencia a aquellas personas a las que las organizaciones tradicionales ya no consiguen llegar, un espacio político donde lanzan sus preguntas, comprenden los procesos políticos, desarrollan sus propias posiciones y conectan con otras personas. Esto es así porque muchos de estos movimientos sociales y ONG informaron y plantearon debates sobre temas políticos y económicos complejos con una voluntad de explicación casi enciclopédica y superando el formalismo del lenguaje político. Con frecuencia, los grandes movimientos sociales generan el impulso necesario para muchas actividades a nivel municipal y vecinal, pues a diferencia de las grandes protestas durante las cumbres de los años 90 del

siglo pasado dirigidas contra el FMI, la OMC y el Banco Mundial, en la actualidad los movimientos sociales están mucho más implicados en confrontaciones a escala local. En muchos países, las protestas desaparecen del radar de los medios de comunicación pero tienen repercusión en la vida cotidiana de las personas y se crean numerosos «micromovimientos» nuevos. Los movimientos sociales actúan a menudo como «aceleradores de partículas» para el ciudadano de a pie, al generar referencias y motivación para la participación política. Por ello siguen siendo también un aliado importante para la transición socioecológica y la «democratización de la democracia» (Harmut Rosa).

4.4 Cuestiones de Estado

La crítica del Estado y el escepticismo de cara al poder se han convertido prácticamente en elementos integrantes del ideario de muchas iniciativas progresistas actuales; sin embargo, no es posible prescindir del Estado. La transformación socioecológica y una sociedad viva y orientada al bienestar común necesitan al Estado como aliado. En pleno frenesí globalizador de los años 90 del siglo pasado, el Estado fue sistemáticamente desacreditado y de hecho se planteaban los procesos globalizadores como oposición a un Estado todopoderoso y asfixiante. Por el contrario, podemos observar que en los últimos años hay un renacimiento del Estado, si bien no tanto como participante activo en el diseño del contexto estructural de una transformación, sino fundamentalmente como gestor de crisis, estabilizador y garante de última instancia allí donde fracasan los mercados. Por otro lado, se ha redescubierto la política clásica de la soberanía (ya sea respecto a la seguridad y la gestión de las fronteras, a la política económica o a la cooperación con las instituciones internacionales); eso sí, limitándola a la actuación del Estado a escala nacional,

o incluso en el plano nacionalista, dejando de lado las cuestiones de gobernanza global.

El Estado es siempre la concreción de un determinado equilibrio entre las diferentes fuerzas presentes en la sociedad. Con frecuencia aliado de la élite económica y política, reprime movimientos progresistas manteniendo un contexto de explotación de las personas, recortando sus derechos y entorpeciendo la actividad política. En casos extremos, el propio Estado y sus recursos terminan siendo el botín con que se quedan esas élites. A diferencia de lo que ocurría en tiempos del Estado de Bienestar, en la actualidad muchas personas, incluso en países desarrollados, perciben al Estado como una institución desahogada y aun hostil de la que no se puede esperar mejora alguna.

La relación entre el Estado, la sociedad y la economía, en las diferentes configuraciones que ha ido adoptando en cada país y en cada época, ha sido desde siempre una cuestión esencial para los partidos socialdemócratas, progresistas y socialistas. En el pasado, su política no se centró exclusivamente en la democratización del Estado y del poder: tales agentes también asociaban a la idea de un Estado activo la esperanza de poder imponer una democracia social en los diversos ámbitos de la sociedad, incluida la economía. De esta forma, el Estado se convertía en un instrumento reformador que contribuía a reglamentar, redistribuir, generar impulsos e innovación. Sin embargo, el afán reformista de muchos Estados ha flaqueado en las últimas décadas, al tiempo que se ha diluido e incluso abandonado su instrumental regulador en aras de la apertura de los mercados, en particular los financieros, y de la globalización.

El Estado como «facilitador»

Por todo lo dicho, en estos momentos nos tenemos que plantear dos cuestiones. En primer lugar, de qué forma puede el Estado reforzar su papel de «facilitador» (Elinor Ostrom) para que se desarrollen

diferentes formas de autoorganización y autogestión, así como el empoderamiento de las personas para que participen activamente en sus comunidades y para que se refuerce en general la capacidad de la sociedad para apoyar y sacar adelante una transformación socioecológica. Para ello, es necesario diseñar las estructuras y las actividades del Estado de forma que fomenten y protejan las innovaciones sociopolíticas y las enmarquen en el interés común superior. Para, precisamente, favorecer el interés común, las instituciones estatales, en todos sus niveles, deben concentrarse en procurar que los proyectos de interés para la comunidad dispongan de las «herramientas de explotación» necesarias (infraestructura material, tecnología, capital, conocimientos, espacios sociales). Si, por ejemplo, es necesario implantar un gran número de laboratorios socioeconómicos en sectores de importancia para el interés común, donde se puedan experimentar (y descartar) nuevas vías, habrá que eliminar la actitud frecuentemente paternalista de las instituciones del Estado y reemplazarla por otra que contribuya a la cooperación, o que permita que aparezcan soluciones orientadas al bien común y las tolere. En una segunda fase, como en otros procesos de innovación, las instituciones públicas pueden fomentar de forma concreta un cambio estructural de carácter socioecológico dando incentivos (fiscales, por ejemplo) a los proyectos que hayan dado los mejores resultados, al tiempo que retiran aquellas estructuras que resulten obstructoras. De esta forma, impulsarán cierto control y asimismo proporcionarán garantías de continuidad respecto a la dirección adoptada para quienes trabajan por el interés común. Con todo, un Estado que entienda así su papel en el diseño del proceso no solo debe aceptar y amplificar los impulsos que llegan «desde abajo», sino también considerar el conjunto «desde arriba», es decir, con perspectiva sistémica.

Gobernar más allá del Estado nacional

Habida cuenta de lo expuesto, la segunda cuestión que se plantea es la siguiente: ¿cómo deben renovarse las instituciones del Estado para que puedan cumplir con su tarea de controlar y reglamentar? Igualmente, ¿cómo se puede garantizar que el proceso de transformación sea justo y tenga en cuenta a aquellos que salgan perdiendo con él? También, ¿cómo se puede ofrecer un margen suficiente para nuevos planteamientos económicos y reducir la presión proveniente de los mercados globales? Esto no implica que el Estado deba encargarse de todo. No obstante, es imprescindible recuperar el entendimiento de que la tarea central de la acción del Estado debe consistir en orientar la economía a las necesidades de la sociedad y en regular los mercados, en particular los financieros. Por más que en estos momentos sea algo complejo, difícil de comprender y sobre todo difícil de explicar, lo cierto es que gran parte de este trabajo solo puede llevarse a la práctica a escala regional y global. Por ello, la tarea de los partidos socialdemócratas y socialistas consiste, más que nunca, en desarrollar ideas de gobierno y administración más allá del ámbito puramente nacional. Sin pecar de un optimismo naíf sobre el control del proceso, entre socialdemócratas y socialistas predominan las siguientes convicciones: 1º. El marco normativo y regulador mundial vinculante ha contribuido a que las relaciones entre Estados sean civilizadas. 2º. El resultado de la cooperación a escala regional y global no conlleva una mayor complejidad, sino todo lo contrario (porque la confianza mutua generada reduce la incertidumbre y la complejidad, e igualmente permite la recuperación del margen de actuación). 3º. Por todo ello, incluso si la situación es complicada, no hay que desentenderse de las normas internacionales, sino que hay que insistir en ampliar las estructuras de gobernanza global, que en estos momentos siguen siendo muy selectivas. A pesar de la crisis de la UE, a pesar del mal estado en que se encuentran muchas otras agrupaciones regionales de Estados y de los embates que

han sufrido los sistemas internacionales, en estos momentos sigue siendo cierto que la política nacional de Estado es demasiado limitada para poder solucionar de forma efectiva los problemas globales. A diferencia de lo que pasa a escala local o nacional, las propuestas de reforma a nivel internacional son las más difíciles de plantear y ejecutar, incluso en épocas de cooperación internacional. A pesar de ello, y aunque no se pueda contar con un éxito inmediato, la gobernanza global (*global governance*) es la única vía para un «internacionalismo saludable» (Boutros Boutos Ghali). Ese es el camino que ha de adoptar una organización internacional de partidos socialdemócratas y socialistas, pues la historia de la construcción de redes políticas eficientes y susceptibles de implantación regional y global acaba de comenzar. El Consejo de la Agenda Global sobre Gobernanza Global y el Futuro de las Organizaciones Regionales propone, por ejemplo, «modelos de poligobierno» para suplir las lagunas de la «gobernanza a varios niveles». Este tipo de modelos para la asociación y cooperación que incluye a diferentes actores sociales y gubernamentales puede servir para superar el déficit de información, conciliar diferentes intereses y brindar una plataforma cuando exista un vacío de gobernanza o cooperación.

La prosperidad común precisa de instituciones públicas sólidas. El refuerzo adecuado del sector destinado al fomento del bienestar común se diferencia de las estrategias conservadoras de exigir la implicación del ciudadano y ofrecer la retórica como único apoyo a las asociaciones de voluntarios y a las organizaciones caritativas mientras que, en la práctica, desmonta el Estado y, en particular, la asistencia estatal a quienes lo necesitan. Cualquier planteamiento orientado al bienestar común necesita primordialmente que el Estado garantice los principios del Estado de Bienestar, así como los mecanismos que pongan en práctica la solidaridad, la igualdad de oportunidades en la educación y una vida cultural pública.

El Estado y los miembros de la sociedad, en cuanto a nueva «fuerza social», han de asociarse para la creación de alternativas;

y para que tal asociación tenga éxito, la relación entre las instituciones del Estado y la ciudadanía activa, con sus iniciativas, ha de ser flexible y ofrecer un espacio donde los unos aprendan de los otros, donde se puedan hacer correcciones y donde sea posible aprovechar cualquier impulso. Para ello es imprescindible que el Estado entienda que los miembros de la ciudadanía no son simples receptores pasivos de servicios, sino miembros «productivos» de la sociedad. Por su parte, el Estado ha de volverse más transparente y, más allá de elecciones y plebiscitos, debe crear instituciones participativas que sirvan no solo para fomentar el diálogo sobre planteamientos para la transformación, sino también para impulsar el entusiasmo democrático de proyectos e iniciativas y, en general, reforzar la democracia.

En la actualidad contamos con muchos ejemplos de cómo los «mini-publics», miniconsejos ciudadanos, pueden servir para dar orientación sobre decisiones políticas a escala local y nacional. Van desde los «consejos consultivos» (Claus Leggewie) sobre la transición energética y sobre el transporte público, a los «presupuestos participativos», pasando por los denominados «town meetings» y los jurados ciudadanos, por no olvidar los famosos «hormigueros» de Islandia, que aparecieron como consecuencia de la pérdida de confianza en la política tras la crisis financiera, y en los que se eligió aleatoriamente a unas mil personas entre la ciudadanía a fin de redactar propuestas para una nueva Constitución, propuestas que luego eran sometidas al escrutinio y comentario de una mayoría de la población haciendo un uso sistemático de las redes sociales de comunicación. Estos órganos no son una competencia para instituciones como el Parlamento o la magistratura, se trata más bien de que estas, a escala local, sepan aprovechar esa «sabiduría de la multitud» y fomenten el diálogo argumentado no solo para encontrar soluciones bien fundamentadas y viables, sino también para crear un sentimiento de participación política en un marco vecinal o municipal y con ello de pertenencia a un colectivo político, a diferencia de

la política identitaria de la derecha. En muchos lugares del mundo ya existen numerosos experimentos democráticos de este tipo, si bien hasta ahora no se los ha tomado suficientemente en serio.

4.5 Máquinas

La información y la comunicación son decisivas para una transformación y por ello se tiene que garantizar el acceso generalizado a ellas, también allí donde las barreras técnicas, sociales o culturales todavía lo dificultan. El plan maestro de la construcción del mundo debe estar accesible para todos los que quieran contribuir. El desarrollo técnico nos brinda una oportunidad para volver a tomar las riendas de muchas cosas. Es verdad que la innovación tecnológica es una moneda con dos caras y todos sabemos cuál es la menos atractiva del progreso hacia una «segunda revolución industrial» (Erik Brynjolfsson/Andrew McAfee): automatización de tareas repetitivas, acentuación de la desigualdad, vigilancia omnipresente, violación de la esfera privada y falta de garantías en la evaluación de las consecuencias de los avances tecnológicos. Por lo tanto, no se puede tener una confianza ciega en la innovación tecnológica, si bien tampoco hay que imponerse limitaciones de planteamiento. Más bien se trata de que se pueda desplegar el potencial social y democrático de la tecnología y entender cuáles son las condiciones necesarias para ello.

El desarrollo continuo de las tecnologías de la información y su amplia difusión despiertan muchas esperanzas. Ya hay un gran seguimiento de instrumentos que funcionan por internet y que despiertan un gran interés incluso fuera de los círculos de expertos: la impresión tridimensional, que en el futuro podría facilitar la producción local de bienes en cualquier punto de la tierra, o los MOOC (*massive open online courses*), los cursos a distancia por internet abiertos a todo el mundo con los que se amplía el acceso libre a un amplio

espacio formativo y que podrían facilitar el acceso universal a la educación. La tecnología, si se adapta a las necesidades locales y si se generaliza el acceso a ella, puede aportar mucho a la solución de los problemas de desarrollo del hemisferio sur en particular. Ha de ofrecer sistemas adaptados que no desperdicien recursos, que sean duraderos y versátiles, y cuyo control y mantenimiento se pueda hacer localmente. Por otra parte, se necesita no solo que el mayor número posible de personas pueda tener acceso a la tecnología y en particular a la de la información, sino también que esta se emplee para favorecer nuevos planteamientos socioeconómicos que beneficien a todo el mundo.

El *Informe sobre el desarrollo mundial* del Banco Mundial ofrece conclusiones cuando menos ambiguas sobre el beneficio que aportan las tecnologías digitales para el desarrollo. Si bien tres cuartas partes de la población del mundo tienen a día de hoy acceso a tecnologías modernas de comunicación y hay más hogares con teléfono móvil que con agua potable y electricidad; los beneficios digitales, es decir, la contribución de las tecnologías digitales para el avance en el desarrollo, siguen siendo modestos. La razón es que el éxito de su aplicación depende también de las condiciones en que se produzcan, es decir, si hay ayudas para la descentralización de la investigación, si se dispone de un capital de inversión mínimo, si se genera conocimiento práctico para la producción y la organización y, en resumidas cuentas, si mejora la educación básica en todo el mundo (hay 800 millones de personas no alfabetizadas, de las cuales dos tercios son mujeres). El acceso y las condiciones generales determinan igualmente que muchas de las «tecnologías de base» ya desarrolladas y aplicadas puedan seguir usándose con éxito.

Por lo tanto, la izquierda política debería tener menos reparos ante la tecnología y reflexionar más sobre su dimensión social. A fin de cuentas, la tecnología no es una fuerza que actúe por sí misma, sino que son las personas quienes la desarrollan y utilizan. Como en otras áreas, estamos ante las mismas preguntas: ¿quién tiene acceso

a la tecnología? ¿Qué necesidades satisface, precisamente también desde la perspectiva de género? ¿Y para quién? ¿Quién puede decidir al respecto? Con la tecnología pueden consolidarse el poder y la optimización del beneficio económico, o se puede facilitar la vida de las personas, así como su trabajo y su participación en la sociedad. En conclusión: que el «capitalismo industrial» (Dieter Dath) no esté en boga en estos momentos no se debe a las máquinas. Por lo tanto, este debate debe salir de los círculos cerrados del gobierno y las empresas para desarrollarse en la sociedad: ese es su lugar. Para ello, es necesario crear más espacios de base en los que se den cita pensadores sociopolíticos y expertos en tecnología, espacios que sirvan para que las tecnologías se orienten a satisfacer las necesidades de las personas, donde se dé valor a la utilidad de las cosas, donde se pueda captar (y remunerar) a ingenieros y diseñadores, a fin de que desarrollen proyectos tecnológicos de significado profundo, donde se elaboren nuevos modelos de producción.



5 Aspectos claves

Afrontar las tareas pendientes no será posible sin esta interacción entre personas que puedan desarrollarse libremente, agentes fuertes como partidos, sindicatos y movimientos sociales, (nuevas) empresas dirigidas por personas que apoyen la transformación, tecnologías socialmente relevantes y un Estado que cree los estímulos e impulsos reguladores correctos. La variedad de desafíos es amplia e incluye desde la seguridad alimentaria, la inclusión social, el futuro del trabajo, la salud, la migración y la igualdad de derechos entre ambos sexos, pasando por el cambio de infraestructuras, la protección del medio ambiente y los océanos, la lucha contra el cambio climático y la regulación de los mercados financieros, el comercio internacional y las inversiones, hasta la creación de instituciones locales y nacionales eficientes y estructuras de gobernanza y seguridad regionales y mundiales. A ello se suma el hecho de que casi cualquier cambio afecta a poderosos intereses económicos o geopolíticos, se topa con sistemas culturales consolidados e implica riesgos sociales. Y ningún aspecto se puede contemplar aisladamente. Con los 17 objetivos y las 169 metas de la *Agenda 2030*, la gran tarea global está bien delimitada.

Sin duda, todo es importante. Pero el conjunto de socialistas y socialdemócratas de la Alianza Progresista tendrá que unir sus fuerzas y concentrarse primero en proyectos determinados. Estos proyectos claves se deben seleccionar conforme a los siguientes

criterios: 1º. Deben ser especialmente importantes y urgentes para la transformación, además de ofrecer espacio para desarrollos posteriores. 2º. Deben contribuir a la renovación de la democracia. 3º. Deben «impulsar» a nuestras sociedades y partidos. 4º. Deben contribuir a crear una imagen de confianza entre las sociedades y dentro de ellas. 5º. Deben recalcar los valores socialdemócratas y socialistas fundamentales. 6º. Para su puesta en práctica, debe ser decisivo el acuerdo internacional.

En estos proyectos, las cuatro bases de una política verdaderamente socialdemócrata, socialista y progresista son las siguientes:

- **Implantar justicia:** en lugar de afrontar la cuestión social de forma meramente parcial y moral, como hacen los planteamientos conservadores, los partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas buscan construir una «solidaridad orgánica», es decir, fijar la justicia social como núcleo de todas sus políticas: económicas, de seguridad, climáticas y medioambientales, tecnológicas, educativas y de salud.
- **Construir confianza:** los socialdemócratas y socialistas asumen, por difícil y laboriosa que parezca, la tarea de construir confianza, tanto entre las sociedades como dentro de ellas, y tanto en el ámbito municipal como en el nacional. Eso significa crear y reforzar un clima de confianza política y social y evitar su erosión. Lo hacemos promoviendo el bien común, sin servir a intereses particulares, sean estos de índole religiosa, étnica o económica. Y además, apostamos por la democracia social, el discurso político y la solución civil de los conflictos: con nosotros no existen el aislamiento político ni las soluciones autoritarias. La confianza es la base de cualquier actuación política y social, es el «acuerdo de seguridad» verdadero y recíproco, y el requisito de toda cooperación.

- **Renovar la democracia:** para socialistas y socialdemócratas, la democracia no solo es una forma de representación, sino también un recurso para innovar y revalorizar la política, la economía y la sociedad. En esta «democracia productiva» (Joel Rogers), lo principal son las personas y sus aptitudes. El Estado y las empresas deben asumir un papel configurador, ofreciendo la posibilidad de participar y codiseñar.
- **Superar contradicciones:** socialdemócratas y socialistas abandonan la costumbre de pensar en compartimentos estancos y de velar solamente por el ámbito propio, el éxito propio y la defensa del coto propio. Las sociedades modernas y la política internacional son complejas. Las contradicciones no se resuelven ignorándolas, sino afrontándolas. Analizamos y buscamos puntos de encuentro entre las contradicciones e intentamos reducirlas, o incluso eliminarlas, tanto con pragmatismo como con una idea de futuro. La facultad de cooperación sigue siendo el recurso imprescindible para ejercer el poder y configurar la sociedad en los tiempos de hoy (a pesar de los empeños nacionalistas). Esto es aplicable tanto a la formación de alianzas y la actuación cooperativa dentro de una sociedad como a la política internacional y la interacción entre los diferentes niveles políticos. Por eso nos concentramos en crear y fortalecer instituciones cooperativas e inclusivas.

5.1 El petróleo ya es pasado: por una transición energética global justa

La política energética revela como casi ningún otro ámbito la complejidad y la necesidad de una transformación y lo que esta debe lograr. Su consecución solo será posible con la concurrencia de muchos agentes y niveles políticos. No obstante, las condiciones de

partida para impulsar una transformación energética global y justa son ahora más favorables que nunca gracias al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y a la *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.

Sin un abastecimiento energético seguro y fiable a un precio asequible, la vida moderna es impensable. Muchas condiciones imprescindibles para el desarrollo humano – como la alimentación, la salud, la educación, el transporte, la producción y la comunicación – dependen de un suministro suficiente de energía. Así, hoy día, sobre todo en zonas rurales, 1.100 millones de personas siguen sin recibir un abastecimiento eléctrico básico y 2.900 millones continúan dependiendo de la biomasa tradicional (sobre todo, de la madera). El acceso a la energía continúa siendo un requisito básico para superar la pobreza extrema y lograr la justicia global.

Al mismo tiempo, los sistemas de energía son uno de los tres campos globales de transformación (junto con la urbanización y la utilización de la tierra) en los que se puede combatir eficazmente el cambio climático. Y esto se debe a que el sector energético es el causante de aproximadamente dos tercios del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos actuar con rapidez si queremos que el calentamiento global no supere el límite de los 2 °C, ya que el potencial de liberación de CO₂ de los yacimientos de combustibles fósiles aún disponibles es cinco veces superior a lo que deberíamos consumir. Por eso, en todo el mundo, la lucha contra el cambio climático es el «factor definitorio» de los futuros sistemas de energía. Sin embargo, la economía energética tradicional es uno de los sectores de la economía mundial que más beneficios arrojan, y por eso están en juego activos de capital considerables. Así pues, este sector tan concentrado ofrecerá una tenaz resistencia: sus grandes compañías privadas y públicas ejercen gran influencia económica y política y, además, son importantes creadores de empleo. Igual de difícil, o más, será cambiar el modo de vida de muchos países desarrollados, que está ligado a un uso intensivo de energía. Los estilos de

consumo de estas naciones, con un alto gasto energético que en ocasiones constituye un auténtico derroche, contrastan fuertemente con la pobreza energética de algunos países en vías de desarrollo. Así, los 20 millones de habitantes de Nueva York consumieron en 2010 tanta electricidad como los 790 millones de personas que pueblan el África subsahariana. Al mismo tiempo, la voracidad energética de los países industrializados destruye importantes medios de subsistencia en los países en vías de desarrollo, que sufren las consecuencias sociales y ecológicas de la explotación de sus fuentes de energía.

Por eso, para ser transformadoras, las soluciones deben perseguir simultáneamente objetivos muy diversos que, a primera vista, parecen incluso contradictorios: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar el abastecimiento de energía, luchar contra la pobreza energética y aportar soluciones de transición justas e inclusivas a las personas trabajadoras que resulten afectadas por el cambio.

Ya se ha dado el primer paso

Hay una buena noticia: el fin de la era de los combustibles fósiles ya está anunciado. Prueba de ello es el éxito de la Conferencia de París sobre Cambio Climático y la cumbre del G7 en el palacio de Elmau, con la decisión de los grandes países industrializados de lograr economías nacionales libres de carbono antes de 2100. También los objetivos de la *Agenda 2030* presuponen una eficaz transformación energética de escala mundial. De hecho, la transición energética ya es una realidad en muchos países: tomando como criterio de medición las capacidades generadas y las inversiones totales, en 2013 se construyeron por primera vez en todo el mundo más centrales energéticas basadas en fuentes renovables que en carbón, gas o energía nuclear. Incluso en China el consumo de carbón está descendiendo. Los costos de generación de la energía solar han

bajado mucho, y en algunas regiones los paneles fotovoltaicos son ya la forma más ventajosa de producir electricidad. En los últimos diez años, la generación de energía fotovoltaica se ha multiplicado por más de 50 en todo el mundo. La importancia de las energías renovables también está creciendo en los ámbitos de la calefacción y la movilidad. Además, muchos mercados de energías renovables han dejado de ser oligopolios de grandes grupos empresariales y se han abierto a múltiples productores pequeños, tales como municipios, agricultores y hogares privados. Otras ventajas de las energías renovables y de su posibilidad de consumo descentralizado son una mayor autonomía, un suministro energético más estable y la participación social. Si los costos de producción continúan bajando y las condiciones técnicas para un suministro energético descentralizado siguen mejorando, ello podría contribuir decisivamente a terminar con la pobreza energética de muchas regiones de la Tierra donde el sol es abundante. Los grandes inversores institucionales – aseguradoras, fondos estatales de inversión, cajas de pensiones, fundaciones – ya han reaccionado ante el cambio en las condiciones de partida y algunos han retirado por completo sus inversiones de las grandes empresas productoras de carbón, gas y petróleo. Numerosos países, ciudades y comunidades, apoyados por empresas, movimientos sociales y ONG, han formulado ya su futuro «100 % renovable» y algunos lo han alcanzado. En los últimos años ha surgido un movimiento desde abajo que tiene la posibilidad de cambiar las estructuras económicas de forma duradera.

Según los cálculos de diversas asociaciones internacionales de protección del medio ambiente, si las condiciones son favorables, los sistemas energéticos mundiales podrían cambiar a las energías renovables antes de 2050 sin incurrir en costo alguno. Pero para llegar ahí debemos aún recorrer un largo camino. La transición solo será posible con sistemas de energía renovables, eficientes, descentralizados, digitalizados, organizados de manera participativa y universalmente aplicables. En otras palabras: es preciso adaptar los

sistemas de producción, adoptar grandes medidas en el plano de la infraestructura, seguir innovando los productos, cambiar las relaciones laborales y el comportamiento de los consumidores e intensificar la cooperación mundial. Así pues, no bastará simplemente con cambiar de un recurso energético a otro. La transición energética exigirá cambiar las relaciones de poder existentes y las costumbres sociales; solo así podremos formular respuestas con futuro a las preguntas de cómo se produce la energía, quién la posee, cómo se distribuye y cómo se usa. Necesitamos:

- **Un marco regulador estable:** sin duda, es necesario invertir masivamente en energías renovables, en eficiencia energética y en la digitalización de los sistemas de energía. Pero la fuerte demanda de financiación inicial para impulsar la construcción de las nuevas infraestructuras no se podrá costear sin participación de la economía privada. Este impulso inversor debe llegar de forma rápida y amplia sobre todo en los países industrializados, pero también las naciones en vías de desarrollo deben fijarse objetivos ambiciosos y formular estrategias energéticas sostenibles a largo plazo. Precisamente para estas naciones – donde a menudo el suministro de energía está exclusivamente en manos del Estado – la falta de inversiones es una de las barreras que más dificultan la transición energética integral. No obstante, las inversiones, especialmente las extranjeras, presuponen confianza en condiciones de base estables. El Estado debe, por tanto, aportar un marco político sólido para la construcción de nuevos sistemas de energía: creando los correspondientes estímulos, garantizando la seguridad jurídica, minimizando los riesgos de inversión, promulgando leyes de abastecimiento energético y fomentando las cooperativas de energía.

- **Justicia energética:** el cambio a sistemas descentralizados basados en energías renovables beneficiará a muchos. Sin embargo, el suministro debe ser seguro y su precio, asequible. Precisamente en los países en vías de desarrollo, la energía (proveniente de combustibles fósiles) se abarata mediante subvenciones que favorecen sobre todo a las empresas y a las personas acomodadas. No obstante, es más sensato suavizar la repercusión social de una eventual subida de los precios de la energía mediante un apoyo directo. Al mismo tiempo, cabe señalar el fuerte potencial económico del cambio, que reside por ejemplo en la creación de nuevos puestos de trabajo para la producción de energía o en la implantación de cadenas sucesivas de valor agregado gracias a la electrificación de las áreas rurales. Para configurar una política energética socialmente aceptable, se requieren estrategias convincentes que protejan económica y profesionalmente a los trabajadores afectados del sector energético tradicional. Por tanto, los objetivos climáticos y energéticos a largo plazo se deben combinar siempre con una política de empleo guiada por el principio del trabajo de calidad.
- **Una «carrera hasta lo más alto»:** los países en vías de desarrollo emprenderán por sí mismos su transición energética, pero deben recibir apoyo a través de la cooperación internacional y contar con la ayuda de los países ricos. En concreto, se requieren compromisos de financiación internacional que mitiguen el cambio climático y promuevan el desarrollo; se precisa el fomento de las inversiones directas y la participación de la economía privada, y se necesita apoyo tecnológico y ayuda para la creación de capacidades estratégicas. La cooperación entre empresas y las alianzas transformadoras entre países con distintos niveles de desarrollo pueden impulsar y encauzar la transición energética. La colaboración internacional

para el desarrollo debe enfocarse decididamente en fomentar un suministro energético descentralizado y renovable. De cara a la financiación de nuevas estructuras, corresponde a los bancos de desarrollo multilaterales, así como a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) un papel esencial en lo referido a cuestiones comerciales, derechos de propiedad y régimen de inversión. Los planes regionales ambiciosos, como la Iniciativa Africana por la Energía Renovable, muestran que la cooperación regional es un componente importante para una transición energética mundial. En los foros internacionales, como la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así como en las demás entidades que asesoran sobre la consecución de los objetivos de sostenibilidad, debe intercambiarse información sobre el mejor modo de realizar la transición energética y debe ofrecerse orientación sobre cómo plantear las políticas energéticas nacionales.

- **Energía desde abajo:** las transiciones energéticas no se producen por sí solas. Para una transformación energética eficaz, es decisiva la presión social por el cambio, la disposición de la población a cambiar y el conocimiento de sistemas de energía alternativos. Las ciudades y los municipios son los escenarios concretos de esta transformación. Las distintas condiciones de partida sin duda darán lugar a soluciones locales muy diversas. En los sistemas de energía descentralizados, las personas son al mismo tiempo consumidoras y productoras: eso permite planteamientos energéticos locales que integran estrechamente a la ciudadanía en los procesos de planificación, decisión y realización. La participación no solo es necesaria para recabar la «creatividad de muchos», sino también

para resolver disputas y equilibrar intereses, ya que este tipo de transformaciones complejas conlleva muchos motivos de discordia. En el futuro, mediante campañas de desinversión en combustibles fósiles, como la Fossil Free Campaign, que ya está activa en 60 países, también se puede trabajar desde abajo para hacer menos lucrativas las políticas empresariales que agravan el cambio climático o, por lo menos, para reducir o desprestigiar las inversiones en tales políticas.

5.2 El dinero y los paraísos fiscales

Los paraísos fiscales se llenan de dinero

Si el objetivo marcado es modelar el desarrollo económico de forma más sostenible, reforzar la confianza en la política y en el seno de la sociedad, limar las desigualdades y volver a priorizar las necesidades de la gente en lo relativo a los procesos económicos, entonces el primer punto de nuestra lista de tareas debe ser indiscutiblemente el control político de los mercados financieros.

Los daños económicos, políticos y psicológicos de la crisis del año 2008 fueron extremos. Hasta el año 2010, el costo del rescate del sector bancario solo para los gobiernos europeos ascendió a 1,6 billones de euros. A fin de mitigar la caída drástica de la economía, los Estados gastaron 2 billones de dólares en programas coyunturales. Se desplomaron economías nacionales completas y reaparecieron la pobreza y el hambre. Lo que la crisis puso de manifiesto fue que la política no puede (y en parte, tampoco quiere) intervenir en los modelos comerciales de riesgo del sector financiero, que se han vuelto cada vez más opacos y complejos. Se ha perdido la confianza en la capacidad de influencia de la política. Asimismo, la mentalidad de enriquecimiento de muchas de las élites económicas responsables vulneró el sentido de justicia de otros estratos de la sociedad, ya que el rescate de sus instituciones se financió a través de fondos

públicos, lo que desvirtúa el principio de responsabilidad, uno de los pilares sobre los que se apoya la economía de mercado. Raras veces se manifestó de forma tan evidente la estrategia de privatización de los beneficios y nacionalización de las pérdidas como en la crisis financiera. E, igualmente, raras veces el funcionamiento y el carácter de un sistema esencial para el desarrollo de una sociedad se dirigió tan manifiestamente en contra de los intereses de la abrumadora mayoría de tales sociedades como lo hicieron los dictámenes de los mercados financieros.

Los sectores financiero y bancario son los puntales de la evasión internacional de impuestos. La reducción de ingresos por evasión de impuestos empresariales asciende, según estimaciones conservadoras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a 240.000 millones de euros. Esto afecta con especial acritud a los países del hemisferio sur, que en general tienen un producto social bruto muy bajo; es más: puesto que carecen de otras fuentes impositivas, dependen mucho más que los países del norte de la tributación de los beneficios de los consorcios corporativos. Así, según las estimaciones, los efectos sobre el erario público en los países en desarrollo son de dos a tres veces superiores a los de los Estados de la OCDE. A todo ello hay que añadir las sumas considerables que los países del hemisferio sur dejan de recaudar por evasión fiscal offshore por parte de sus élites políticas y que, por cierto, suelen fluir en dirección norte. Casi un tercio del patrimonio de los africanos ricos, unos 500.000 millones de dólares, se encuentra en paraísos fiscales. Según la Comisión Mbeki de la Unión Africana, por cada dólar que reciben de ayuda pública al desarrollo, inversiones o transferencias de personas migrantes, los países del hemisferio sur pierden casi un dólar a causa de la evasión fiscal. Las causas son muy diversas: estos países suelen carecer de sistemas fiscales eficaces, sus administraciones fiscales cuentan con equipamientos deficientes, las élites corruptas desvían caudales públicos malversados a instituciones financieras «en la sombra» que operan en el exterior,

los inversores extranjeros obtienen ventajas fiscales durante años o evitan las contribuciones al fisco con una gran diversidad de trucos para desviar los beneficios a países de baja fiscalización. Asimismo, los países en desarrollo, por lo general, no tienen acceso a los datos bancarios de sus ciudadanos en los países de la OCDE.

Ni siquiera las discusiones acerca de las prácticas empresariales en los llamados «paraísos fiscales del capital» han podido invertir esta tendencia. En el año 2014, las inversiones de las empresas en paraísos fiscales fueron casi cuatro veces superiores a las del año 2001. Nueve de los diez consorcios empresariales que operan en todo el mundo cuentan al menos con una filial en paraísos fiscales.

Las reformas son insuficientes

Desde la crisis financiera del año 2008 se efectuaron una serie de reformas correctas, que en un principio dieron cabida a la esperanza, en especial los acuerdos del G20 de los años 2008 y 2009, según los cuales se postulaba que ningún actor, producto o mercado deberían seguir operando sin regulación o supervisión. La UE también adoptó pasos para regular los mercados financieros con medidas como la revisión del reglamento para la calificación de crédito y la Directiva sobre Transparencia, las pruebas de resistencia bancaria y la aplicación de los Acuerdos de Basilea III. No obstante, tales medidas no han llegado a desplegar efecto político alguno, de modo que no ha surgido una nueva cultura bancaria orientada a la sostenibilidad y al apoyo de la economía real. Tras diez años de crisis, rescates financieros y reformas, el sistema financiero internacional sigue siendo disfuncional y peligroso y sigue caracterizándose por su afán de maximizar la rentabilidad a corto plazo y por su empeñamiento en ignorar los riesgos. Los bancos no han dejado de financiar sus actividades comerciales de largo plazo con créditos a corto plazo. Solo el 26% de ellos están al servicio del sector crediticio clásico; las posiciones más relevantes de sus balances continúan

siendo los derivados financieros. Incluso tras los Acuerdos de Basilea III, la suma prescrita de capital propio sigue siendo demasiado baja para que los bancos puedan asumir la responsabilidad debida y evitar que vuelvan a ser los contribuyentes quienes respondan por ellos. Hay dos vacíos en las reformas de los mercados financieros que persisten como fuente de riesgo: se trata del sector de la banca en la sombra y los bancos «*too big to fail*» (demasiado grandes para quebrar), bancos sistémicos sin regulación hasta la fecha que pueden chantajear a los Estados.

La mayoría de las prácticas de riesgo que llevaron a la crisis financiera eran legales. Pero incluso tras las reformas el margen de acción sigue siendo excesivo. Por este motivo, en los próximos años el objetivo de la política socialdemócrata, socialista y progresista debe ser la democratización del sector financiero, para forzarlo a regresar a su papel de prestador de servicios, y la regulación y el desarrollo del sector bancario, de modo que deje de suponer un riesgo sistémico permanente para economías y sociedades enteras.

- **Control y reestructuración de los mercados financieros:** que no haya un «segundo Lehman»: el conjunto de los grandes países estaba de acuerdo con esta divisa. Sin embargo, a medida que se desvanece el recuerdo de la crisis y sus causas, no solo desaparece con gran celeridad la voluntad de control, sino que, además, aumenta de nuevo la resistencia de los actores de los mercados financieros, así como la disposición de la política a ceder a sus presiones. Por lo tanto, socialdemócratas y socialistas deben fijarse como objetivo el control consecuente de los mercados financieros. Entre otras medidas, se requiere regular estrictamente la banca en la sombra para evitar que se desvíen negocios bancarios a ámbitos sin regulación, retirar la responsabilidad del Estado, establecer un sistema bancario dual que sea eficaz, prohibir operaciones de riesgo y la especulación con productos agrarios y materias

primas energéticas, reglamentar la negociación de alta frecuencia, reformar los modelos comerciales de las agencias de calificación de crédito, así como ampliar vastamente los mecanismos de supervisión. Lo que debe quedar claro es que todo aquel que ayude a lavar dinero o a evadir impuestos debe esperar consecuencias penales. Sobre todo en lo que respecta a las instituciones financieras, las cuales en caso de crisis pueden poner en aprietos a economías enteras, es preciso que se incrementen las exigencias de capital propio tanto en cantidad como en calidad. Igualmente, debe aplicarse de una vez por todas el impuesto a las transacciones financieras, ya acordado políticamente tantas veces, al menos en la eurozona.

- **Establecer un sistema fiscal eficiente:** una política fiscal influyente y un sistema fiscal eficaz son, desde diversos puntos de vista, esenciales para conseguir una transformación, ya que permiten movilizar los medios de financiación necesarios y gracias al sistema fiscal es posible repartir los ingresos y la riqueza de manera socialmente más justa. Los impuestos permiten financiar los proyectos políticos deseados, encarecer las actividades indeseadas e influir en las decisiones de consumo y de producción. Finalmente, es posible diseñar los sistemas fiscales de modo que favorezcan un mayor control democrático y fortalezcan el Estado de derecho, porque los contribuyentes pueden pedir cuentas sobre el empleo que se hace de su dinero. Por ello, la construcción de sistemas fiscales nacionales – sobre todo en los países en vías de desarrollo – y el apoyo mutuo son fundamentales. Aunque no del todo suficiente: debemos seguir mejorando la cooperación internacional en cuestiones fiscales, pues, a fin de cuentas, la economía hace ya tiempo que se ha internacionalizado.

Los cambios en un contexto internacional también son posibles; así lo muestran los pasos acordados por el G20, la UE y la OCDE para contener la evasión fiscal ilegal y la elusión fiscal formalmente legal, como el intercambio automático de información entre Estados acerca de cuentas financieras, el plan de acción del G20 para combatir la reducción y desviación de beneficios de empresas o los requisitos de transparencia en el ámbito de la Directiva sobre Requisitos de Capital de la UE. Aún así, es preciso adoptar más medidas. Socialdemócratas y socialistas abogan por acabar con la ruinosa competencia por ofrecer las tasas impositivas más bajas promoviendo la transparencia en lo referente a los incentivos fiscales para empresas multinacionales y vigilando las prácticas fiscales dañinas; también defienden introducir para los impuestos a las empresas tasas mínimas sin exenciones que sean efectivas a largo plazo y estén reconocidas internacionalmente; asimismo, plantean obligar a las empresas a que informen de manera pública de sus operaciones por país de actividad, para que todos puedan entender los pagos de impuestos efectuados por los consorcios empresariales; igualmente, proponen cerrar el grifo de manera consecuente a los paraísos fiscales, por ejemplo, llenando los vacíos legales penales que favorecen especialmente a los bancos y aislando del sistema financiero internacional a todo paraíso fiscal. Lo importante aquí es incluir a los países del hemisferio sur en este proceso regulatorio. Lo ideal sería que esto ocurriese en el seno de un organismo interestatal perteneciente a la ONU. También es posible valerse de acuerdos modernos de libre comercio para establecer reglas comunes y vinculantes sobre impuestos a las empresas.

- **Banca desde abajo:** las sociedades no deben tolerar que se desarrollen sistemas precarios en contra de los intereses de

las grandes mayorías. Sin duda, es tarea del Estado imponer normas estrictas, pero también es preciso incrementar el número de personas que sean capaces de entender los misterios de los mercados financieros y que sepan cómo actuar para contrarrestarlos. Mucho de lo que se ha sabido acerca de las prácticas comerciales de los bancos y de otros operadores financieros ha salido a la luz gracias a «alertadores», por ello, hay que mejorar su protección. Es más, necesitamos educar a la sociedad y lanzar campañas de alfabetización político-financiera, quizá a través de ONG, pues tenemos que avivar la discusión en torno a cuestiones decisivas, tales como:

¿Qué lugar ocupan las finanzas y los bancos en nuestras vidas? ¿Cómo pueden las personas ganar seguridad en su interacción con el sector financiero? ¿Cuáles son las alternativas?

Entre las alternativas encontramos, sin duda, la banca corporativa, aunque también nuevas tendencias que experimentan con las tecnologías más diversas (fintech). Algunas albergan el potencial de afianzar un sistema bancario y financiero, por ejemplo, por tecnologías de cadenas de bloques, que en casi todos los ámbitos bancarios pueden garantizar la seguridad de las transacciones y son, además, más transparentes, descentralizadas y eficientes. La «internet de las finanzas» puede impulsar los créditos *peer-to-peer* (la concesión de créditos entre particulares sin la intermediación de bancos), la construcción de mercados de crédito alternativos o la difusión de criptomonedas. Se trata de generar alternativas que vuelvan a encasillar al sistema financiero en sus funciones de servicios, esto es, facilitar la asignación de fondos, gestionar riesgos, financiar empresas y hacer posibles el ahorro y la inversión.

5.3 ¡La globalización debe funcionar... con puestos de trabajo dignos en todo el mundo!

Promover puestos de trabajo dignos en todo el mundo es una de las tareas centrales de los partidos socialdemócratas, socialistas y progresistas. El trabajo es fundamental para el desarrollo humano, es algo que une a todas las personas. Un trabajo de calidad garantiza el sustento, reduce la desigualdad, promueve la igualdad entre los sexos y refuerza a las comunidades, además de reconocer el trabajo doméstico, los cuidados y el compromiso del voluntariado. Promueve la creatividad de las personas, les permite participar en la sociedad y mejora su autoestima. Un trabajo se considera digno, según el índice de trabajo digno de la Federación Alemana de Sindicatos (*DGB-Index Gute Arbeit*), cuando satisface las expectativas de las personas empleadas. Con ello, el trabajo digno se convierte en un lugar concreto de transformación. No obstante, el trabajo también puede implicar presión y estrés, vulnerar los derechos humanos, ser indigno, explotador y peligroso, contribuir a las desigualdades y desestabilizar a familias y comunidades. Por lo tanto, el trabajo debe modelarse de manera que impulse el desarrollo humano y la transformación socioecológica.

Un mundo laboral precario

Desde la crisis financiera y económica se ha debilitado el desarrollo del empleo, que antaño era positivo, y no se ha podido facilitar nuevo empleo a alrededor de 30 millones de personas que perdieron su trabajo como consecuencia de la crisis. Las estadísticas oficiales del mercado laboral indican que actualmente hay en el mundo unos 200 millones de personas sin trabajo. Según las tendencias demográficas actuales, cada año otros 40 millones de personas intentarán

ingresar en el mercado laboral, lo cual implica que hasta el año 2030 tendrán que generarse en todo el mundo unos 420 millones de empleos nuevos, que se concentrarán aún más que ahora en el sector de servicios. Aun así, en muchas partes del mundo no se aprovecha el pleno potencial, ya que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los mercados laborales, la juventud se ve afectada por el desempleo de manera desproporcionada y, a pesar de los grandes avances, un alto porcentaje de la población infantil y juvenil carece de posibilidades de formación elementales.

Desde la perspectiva de la calidad, es evidente que muchas personas están muy lejos de poder aspirar a un puesto de trabajo digno. Con ello, no solo nos referimos a los 21 millones de personas sometidas a trabajos forzados. Unos 830 millones de personas son pobres con trabajo, que deben subsistir con menos de dos dólares al día. Las mujeres reciben peor remuneración y están peor aseguradas, además desempeñan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado. En especial en los países en vías de desarrollo, la mayoría de la gente trabaja en la economía informal, en la que la productividad es mínima, imperan malas condiciones de trabajo, se pagan salarios injustos y no se paga ninguna de las prestaciones sociales. Solo una cuarta parte de la población mundial dispone de protección social. Cada año, 2,3 millones de personas pierden la vida en accidentes laborales y en muchos países desarrollados el número de personas que ya no pueden trabajar a causa del deterioro de su salud supera al número de desempleados. Las posibilidades de los sindicatos de intervenir y luchar contra esta situación son muy limitadas, en vista de que la mitad de los empleados trabaja en países que no han ratificado el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización C087 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los migrantes ilegales y las trabajadoras sexuales y domésticas son las personas que más están expuestas a la discriminación, la explotación y la violencia.

¿Un nuevo mundo laboral hermoso?

En los próximos años, la internacionalización y la digitalización de la economía seguirán siendo las tendencias decisivas que marcarán los mercados laborales y la naturaleza del trabajo, en una evolución ambivalente. La construcción de cadenas de valor agregado, las decisiones sobre comercio e inversiones que tienen un efecto global y la migración han contribuido igualmente a la globalización del trabajo, mientras que la regulación del trabajo y su protección, cuando existen, se organizan en el ámbito del Estado nacional. Unos 500.000 millones de personas se encuentran ya trabajando en las cadenas de valor agregado internacionales, las cuales también han contribuido al empleo en muchos países en vías de desarrollo. Una serie de países emergentes ha conseguido en los últimos años despojarse de la etiqueta de países de mano de obra barata y competir con países industrializados desarrollados con trabajo de alta calidad. Al mismo tiempo, a menudo se ha trasladado la presión de los mercados a las personas trabajadoras, a costa de los salarios, la protección laboral o la seguridad legal y social. En el transcurso de la globalización de los mercados de bienes y capitales, los salarios y las normas laborales se han convertido en herramientas de la competencia global, en la que países y regiones enteras compiten entre sí por ofrecer las «mejores condiciones locales» en forma de salarios más bajos y menores requisitos. Esto produce una «carrera hacia abajo», con dramáticas consecuencias sociales y económicas para sus economías.

Ya en las últimas décadas, la digitalización de la economía ha sido un factor clave para la división internacional del trabajo. Hay indicios de que en los próximos años esta tendencia va a profundizarse y que la división del trabajo va a seguir aumentando gracias a la incorporación de distintas tecnologías, como la inteligencia artificial, la impresión tridimensional, la robótica o la biotecnología. La internet de las cosas modificará sistemas enteros de valor agregado

y disolverá los límites locales y temporales de los mercados laborales. El trabajo se volverá aún más móvil y multilocal.

No obstante, hay controversia en torno a cómo será el balance político-laboral de esta revolución digital, que además es imprevisible. En el haber, se abriga la esperanza de que surjan nuevos modelos y sectores comerciales que generen empleo, mejoren la productividad en favor de todos, ofrezcan lugares de trabajo mejores y más saludables y formas más flexibles de trabajo para las personas trabajadoras, incrementen la autonomía en la gestión del tiempo laboral, proporcionen más posibilidades para fundar una empresa propia y apoyen planteamientos de economía solidaria.

Sin embargo, el escepticismo también está justificado, puesto que el desarrollo económico de los últimos 30 años ha traído consigo ambas cosas: por un lado, un enorme impulso tecnológico y, por el otro, una desigualdad extrema. Así, podría ocurrir que las revoluciones tecnológicas posteriores agravasen tales desigualdades. El libro *El auge de los robots*, de Martin Ford, inspira verdadero miedo y es que, de hecho, debido a una nueva oleada de automatización, podrían desaparecer puestos de trabajo rutinarios, en especial en niveles intermedios del empleo asalariado, y no solo en los sectores de la producción, sino también en los de servicios y del conocimiento. Determinadas calificaciones se devalúan, mientras que otras son objeto de una fuerte demanda; unas profesiones desaparecerán y nacerán otras nuevas. La consecuencia podría ser una mayor polarización de los mercados laborales y con ello, de la distribución de los ingresos, por ejemplo, con una mayor demanda de altas calificaciones (anunciada en los mercados laborales internacionales) y empleos mal pagados en el sector de servicios (ocupados a través de los mercados laborales nacionales o la migración). Al día de hoy ya se entrevé que en el flexible mundo laboral del *crowdsourcing* (externalización abierta de tareas), los *clickworkers* (personas trabajadoras en línea) y la «*human cloud*» (plataformas de subcontratación de trabajo en línea a demanda), en las que el asalariado se convierte

en «empresario», las personas trabajadoras solo lo son a demanda, con contratos irregulares, relaciones laborales a corto plazo y una protección social y sindical precaria.

Pero las tecnologías digitales también ofrecen un potencial de transformación del trabajo de calidad, de ahí que aún no esté claro quién recibe los mayores «beneficios digitales». Si bien todavía no sabemos exactamente lo que va a pasar, podemos contribuir a planificarlo. Por ello, los partidos socialdemócratas, socialistas y progresistas deben continuar marcándose el objetivo de conseguir «trabajo digno en todo el mundo» y de participar en su configuración, de manera no solo puntual, sino también amplia, de acuerdo con las pautas establecidas en la Agenda por el Trabajo Decente de la OIT. A tal fin, lo que las personas trabajadoras necesitan es lo siguiente:

- **Empleo sostenible:** se necesitan personas que pongan su fuerza de trabajo al servicio de una transformación socioecológica global. El empleo sostenible exige involucrarse en una actividad que dé sentido a la existencia, una actividad que sea segura, que permita llevar una vida digna y que se enmarque en procesos de valor añadido sostenibles tanto en la economía como en la sociedad. Determinar su emplazamiento, o bien qué es lo que los países, las regiones, los municipios y las empresas pueden hacer para crear trabajo de calidad en beneficio de (y a través de) la transformación son cuestiones con respuestas muy diversas. Veamos los puntos claves de una estrategia de empleo: formular objetivos de ocupación; disponer de un entorno macroeconómico estable; crecimiento en sectores sostenibles que se traduzca en puestos de trabajo; campañas innovadoras en materia de formación, aprendizaje y calificación que concurren con el cambio y la digitalización del mundo laboral; nuevos marcos reglamentarios que contemplen a las personas que trabajan en la economía informal, así como las formas y plataformas de trabajo

basadas en internet; una política fiscal adaptada al mundo laboral real; mayor facilidad para que la pequeña y la mediana empresa acceda al crédito; especial atención a los sectores en los que viven y trabajan personas pobres (por ejemplo, en la agricultura). Por otro lado, el progreso digital también debería aprovecharse para esbozar nuevos modelos de (jornadas de) trabajo, pero no para convertir a las personas en «empresarios de su propia fuerza de trabajo», es decir, que asuman todos los riesgos y estén obligadas a ir optimizando su vida como si fuera solamente una empresa. Más bien se trata de idear un modelo que contemple el empleo en su totalidad y en el que el trabajo se valore por su utilidad social. En el informe titulado *El dilema del empleo. El futuro del trabajo*, el Club de Roma propone un sistema de trabajo multiestratificado que englobe el trabajo remunerado clásico, el cuidado de los demás, el trabajo voluntario y comunitario, así como el autoabastecimiento. Por consiguiente, el objetivo primordial es un reparto más equitativo de las tareas domésticas y las labores asistenciales entre los sexos. Esto se conseguiría, por ejemplo, facilitando que las mujeres accedan a un empleo de calidad y bien remunerado; con un mejor abastecimiento básico de agua, electricidad y alimentos; con cambios en las normas sociales y con el reconocimiento del trabajo dedicado a cuidar a las personas. Para ello será necesario superar la visión única del trabajo asalariado tradicional y pensar en nuevas formas alternativas que garanticen ingresos a todos los grupos de la población.

- **Derechos:** el trabajo digno no puede depender de los intereses de turno de empresas y gobiernos. Así pues, es indispensable que se fundamente sólidamente en derechos. La libertad de asociación, el derecho a convenios colectivos y la libertad de negociación colectiva, la abolición del trabajo

forzoso e infantil, la prohibición de la discriminación laboral o la igualdad de retribución por el mismo trabajo son las normas laborales básicas que defiende la OIT. Socialdemócratas y socialistas deben insistir en sus países y en todo el mundo para que se adopten estas normas, así como otras convenciones encaminadas a proteger los derechos de los trabajadores. Entre ellas también se incluyen la ampliación de la responsabilidad corporativa para una diligencia debida jurídicamente vinculante en materia de derechos humanos, obligación de transparencia e imputabilidad vinculantes para las empresas a lo largo de toda la cadena de suministro, así como el desarrollo del sistema normativo internacional, por ejemplo, con el objetivo de fortalecer las directrices de la OCDE para empresas multilaterales y los principios rectores de las Naciones Unidas para la economía y los derechos humanos. El cumplimiento de las normas laborales básicas debe ser parte integrante de los acuerdos comerciales. Para poder implantar los derechos humanos sociales de forma generalizada, se necesitan políticas en materia de salario mínimo, así como implementar sueldos dignos y la protección social universal. Solo así pueden mitigarse mejor los efectos de las crisis personales y económicas. En este sentido, los Pisos de Protección Social (*SPF*, por sus siglas en inglés), un concepto presentado por la OIT, permiten dotar de una protección social básica incluso a los miembros más vulnerables en las sociedades de los países del hemisferio sur. Finalmente, debemos abogar por la regulación, la seguridad y la responsabilidad en la migración y la movilidad de las personas, a la vista de la globalización del trabajo a escala internacional y regional.

- **Participación:** 1º. Si de veras tenemos la intención de capacitar a las personas para que puedan contribuir a la configuración de ámbitos importantes de la vida; 2º. si constatamos que

la economía se está transformando y alejándose cada vez más de la sociedad y que los principios democráticos y orientados al bien común o los intereses de la sociedad ya apenas juegan un papel; 3º. si damos por sentado que la democratización de la economía es indispensable para que la transformación socioecológica tenga éxito; en definitiva, si secundamos todos estos puntos, en los próximos años va a ser determinante fortalecer la democracia y la participación, incluso en el propio puesto de trabajo.

En todo el mundo, el movimiento obrero cuenta con amplia experiencia en las formas de participación más diversas. Ha llegado la hora de renovar el derecho a la participación y la coestión en la empresa, así como a la organización y el aprovechamiento del proceso de producción. Entender esto no solo es importante en parámetros de cambio digital e implantación de un empleo de calidad. En realidad, resulta decisivo para la transformación socioecológica en su conjunto. En otras palabras, la transformación solo tendrá éxito si las personas afectadas logran convertirse en parte interesada e implicada, es decir, si el potencial de participación de las personas trabajadoras se aprovecha de forma sistemática y si el cambio se efectúa desde abajo. Tras décadas bajo el yugo del neoliberalismo, este tipo de actuaciones parecen quedar muy lejos, por lo que no debe sorprendernos que cuenten con una oposición frontal.

La panacea universal no existe. La solución más inmediata pasa por recuperar la autonomía a través de las distintas modalidades de economía solidaria, las empresas autogestionadas y las cooperativas de producción. En otro tipo de empresas, la coestión debe ampliarse a otras cuestiones relevantes en la organización del trabajo, como el control del tiempo. En muchos casos, contar con sindicatos fuertes y libres va a ser fundamental para poder avanzar en este campo.

Los socialdemócratas y los socialistas tienen el deber de apoyar y facilitar su labor, en especial, en lugares en los que los sindicatos no sean tan fuertes y en los que cueste más integrar a determinados colectivos, como por ejemplo los clickworkers, pero sin olvidar al campesinado sin tierra, los trabajadores domésticos, los vendedores ambulantes y los trabajadores migrantes.

En vista de una economía globalizada, los sindicatos y sus aliados también deben ocuparse de algo muy simple pero, a la vez, muy difícil de conseguir. Nos referimos a un nuevo concepto de solidaridad que ya no se base en una ubicación geográfica concreta ni en comunidades homogéneas. En resumen, un concepto de solidaridad que refleje los mil rostros heterogéneos del empleo a lo largo de las cadenas de valor agregado y las redes de migración. Por todo lo dicho, ya no es posible mantener una representación efectiva de los intereses y la participación de las personas trabajadoras dentro de las fronteras nacionales. Las redes comerciales y empresariales transnacionales, los acuerdos marco internacionales con empresas transnacionales y distintas formas de diálogo social son solo algunas de las estrategias con las que los sindicatos ya están contraatacando. Es nuestro deber seguir pres-tándoles todo nuestro apoyo.

5.4 ¿Tiempos de riesgo? La paz es indivisible

Vivimos un periodo de transición: los profundos cambios políticos y sociales ya han liquidado las viejas estructuras y modelos de actuación política sin que en medio de la crisis se vislumbre lo nuevo. En muchos lugares, se cuestiona la legitimidad de los órdenes políticos existentes y, con ello, la promesa original del Estado de organizar

y garantizar la seguridad. Los periodos de transición son ambivalentes: ofrecen espacios abiertos para reconfigurar la política, pero también generan inseguridad.

Inseguridad creciente

La inseguridad es una sensación básica determinante en muchas de nuestras sociedades. Según las encuestas, «seguridad» ocupa un lugar alto en la escala de conceptos positivos, junto con «libertad» y «justicia». Y lo hace en un triple sentido: como seguridad social y existencial, como seguridad de la integridad personal (comparable con las dos dimensiones de la seguridad humana: «ausencia de necesidad» y «ausencia de temor») y, por último, como fiabilidad de las normas y continuidad social. Y es que a la seguridad se asocian también las instituciones y los acuerdos, cuya tarea es superar las crisis constructivamente, evitar la violencia y proteger al individuo y el orden social y político de las amenazas internas y externas.

Hoy día son muchas las causas de la inseguridad, ya sea manifiesta o percibida subjetivamente. Estas son algunas de las tendencias mundiales, nacionales e individuales:

- **La erosión del orden internacional:** las instituciones multilaterales, como la ONU, no han podido consolidarse suficientemente como pilares de un orden robusto de paz mundial. Antes bien, se hace patente el renacimiento de la política de grandes potencias, el regreso de la guerra como medio político y la creciente inclinación a desligarse unilateralmente de las normas colectivas. Esto conlleva el peligro de una nueva carrera armamentista mundial. Por otro lado, en los últimos años también ha habido éxitos de la diplomacia internacional, por ejemplo el Acuerdo sobre el Cambio Climático, la *Agenda 2030* o el acuerdo nuclear con Irán.

- **Crisis agudas:** los límites entre la seguridad externa e interna se están desdibujando. Ello se debe, entre otras causas, a las persistentes guerras y a las economías de la violencia, a los ataques dirigidos contra las poblaciones civiles, al creciente número de personas expulsadas por la fuerza, a la geopolítica y las guerras subsidiarias, a las guerras por los recursos y los conflictos de carácter étnico, a los conflictos medioambientales y por el agua, al terrorismo y al crimen organizado, y también a las «autoamenazas civilizatorias» (Ulrich Beck) y al cambio climático.
- **Presión sobre los monopolios estatales del uso de la violencia:** por un lado, los Estados soberanos y su monopolio del uso de la violencia son elementos centrales del orden internacional. Por otro lado, la disolución de este monopolio y su falta de legitimación (en el caso de las estructuras represivas) son importantes causas de conflictos violentos. A ello se suman otros fenómenos, por ejemplo los debates en torno a conceptos de seguridad más amplios o la privatización de la seguridad ante amenazas nuevas como el terrorismo transnacional. También la automatización bélica plantea cuestiones inmediatas sobre una futura estructura de los monopolios del uso de la violencia en que estén sometidos a control democrático.
- **Pérdida de control individual:** el modo de vida individual de muchas personas es cada vez más complejo, intrincado y precario. Los sistemas culturales y sociales, con cuya ayuda muchos ciudadanos se abrían paso en la vida, se están desintegrando. El futuro personal ya no se puede planificar, la confianza en las instituciones, que antaño prometían apoyo y orientación, está desapareciendo. La violencia contra las mujeres es a menudo el resultado de la desigualdad estructural de género. Los hombres son una de las causas principales

de muertes prematuras de mujeres en el mundo. Muchas personas tienen la sensación de que al mundo circundante parecen haberle «quitado el seguro» y la capacidad de tolerar riesgos disminuye. Por el contrario, las «sociedades (occidentales) del riesgo» (Ulrich Beck) albergan ciudadanos inseguros que ansían cada vez más una seguridad lo más amplia posible.

La seguridad en un mundo sin fronteras: ¿para quién y a cargo de quién?

El tema de la seguridad, ya sea fronteras adentro o afuera, siempre ha sido competencia del Estado. En un primer momento, el concepto de «seguridad» se nos antoja neutro, pero también posee una connotación política y social en numerosos países. Cuando se aborda el tema de la seguridad, debemos plantearnos exactamente de la seguridad de quién estamos hablando. ¿A quién debe protegerse y con qué medios? ¿Y frente a qué peligros? A menudo, entre todos estos interrogantes, la cuestión que aborda las causas y la responsabilidad política es una incógnita. En los próximos años, la inseguridad social supondrá un auténtico desafío para la política; por tanto, el espacio político no puede hacer oídos sordos a los temores de la sociedad. Es conveniente tratar estos miedos con prudencia y, siempre que sea posible, abordar sus causas. Por otro lado, el anhelo de seguridad no debe ser tan intenso ni la respuesta del Estado tan unilateral que el individuo sienta que una sociedad fuertemente controlada y en la que cada vez se coartan más libertades es un refugio.

Si bien la seguridad y la libertad comparten una misma zona de equilibrio tenso, sus cimientos descansan en niveles muy distintos. En el Estado de derecho, la seguridad sirve para proteger los derechos humanos y las libertades individuales de todas las personas que viven en él. Es decir, todas las medidas para garantizar la seguridad se contrastan detenidamente. En cambio, en los sistemas

autoritarios, la seguridad de las personas no suele ocupar una posición central, porque ese puesto está reservado a la seguridad del Estado o de los dirigentes. Sin embargo, en los sistemas democráticos, la adopción de leyes más duras no suele ir acompañada de más seguridad, sino de libertades individuales más restringidas. Ante la demanda de seguridad por parte de la sociedad, la respuesta más frecuente suele ser el llamamiento a una supuesta «protección», es decir, más medidas de seguridad, abandono de las libertades (ahora consideradas) «de riesgo» y más control social. Por el contrario, los verdaderos riesgos y amenazas solo pueden reducirse «abordando la problemática desde el multilateralismo». Este enfoque aboga por la seguridad colectiva, los elementos cooperativos, la transparencia, las posibilidades de influir democráticamente y la apertura. La seguridad de lo uno no puede garantizarse sin la seguridad de lo otro.

Por eso, los socialdemócratas y socialistas combinan el esfuerzo por combatir los efectos inmediatos de las crisis con el trabajo a medio y largo plazo en busca de soluciones duraderas. De hecho, defienden una política que reemplace la ley del más fuerte por la fuerza de la ley y que destierre la violencia de las relaciones internacionales. La concepción socialdemócrata de la paz fronteras adentro y afuera aspira a consolidar una paz positiva y duradera, que signifique algo más que la simple ausencia de guerra y violencia. En este sentido, implica una gran variedad de instrumentos civiles, pone de relieve la solidaridad mundial, así como el papel de los parlamentos, y exige la interacción con otros ámbitos políticos. En cualquier caso, la prioridad máxima es la seguridad de las personas. Veamos algunos proyectos que la Alianza Progresista debería seguir para tal fin:

- **Fortalecimiento de las Naciones Unidas:** es la hora de establecer una nueva agenda en favor de la paz. Su inicio y desarrollo son puntos presentes en la tradición política de paz de los partidos socialdemócratas y socialistas desde hace tiempo. Es preciso que confluyan las primeras respuestas

a todo tipo de cuestiones políticas vinculadas a la paz, por ejemplo, cómo dar forma a una nueva política de distensión y a medidas basadas en la confianza en la política; cómo reformar y fortalecer a la ONU como el actor principal de la política de paz en el siglo XXI; cuáles son los instrumentos prácticos que necesitamos en la política de paz (misiones de paz, apoyo civil a la paz, mediación, reconciliación) y cómo podemos seguir desarrollándolos o bien cómo llegar a un renacimiento mundial del desarme.

En concreto, socialdemócratas y socialistas deberían apoyar básicamente a las instituciones que garantizan la seguridad común y, a la cabeza de todas ellas, las Naciones Unidas. Por la posición que ocupan, solo las Naciones Unidas pueden dar forma a una política mundial de paz. Eso hace más preocupante su estado actual, ya que las cargas a las que deben hacer frente las Naciones Unidas, en comparación con cualquier otra institución, son abrumadoras. Sin embargo, sin las Naciones Unidas, no es posible concebir una solución para los desafíos políticos en favor de la paz. A menudo, las Naciones Unidas ocupan una posición central solo en teoría. En cualquier caso, lo importante aquí es fortalecer esa posición de forma real y efectiva, con el fin de que esta organización esté preparada para hacer frente a los retos del futuro. Así pues, los partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas deberían dar apoyo político, financiero y personal al nuevo Secretario General de las Naciones Unidas para que imponga las reformas de la agenda a favor de una «paz sostenible». Ese apoyo pasa por aumentar el presupuesto ordinario, reformar el funcionamiento del Consejo de Seguridad, así como incrementar y ampliar la transparencia y la participación democrática en los procesos de la organización. Sin embargo, tomarse en serio a las Naciones Unidas significa, sobre todo, implicarse en iniciativas concretas dentro y fuera de la institución, ya sea

como fuerza innovadora política, teniendo un papel clave a la hora de marcar la agenda, como aliado político activo de la organización o como constructor de puentes entre distintas posiciones. Esto significa, entre otras cosas, apoyar las reivindicaciones de la Comisión Horta para reforzar el mantenimiento de la paz por parte de las Naciones Unidas como respuesta a nuevas clases de conflictos y violencia o bien defender las demandas de la Comisión Töpfer en materia de organización institucional del sistema de las Naciones Unidas de cara a la *Agenda 2030*, igual que seguir las recomendaciones de la Revisión de Alto Nivel de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la cual se hizo un llamamiento a las partes en conflicto de proteger los derechos de la mujer e incluir las mujeres en condiciones de igualdad en las negociaciones de paz, la mediación de conflictos y la reconstrucción. En definitiva, se trata de consolidar los elementos cruciales sobre los que construir una arquitectura mundial de paz y de seguridad. Con ellos se fortalecerá la capacidad de acción de las Naciones Unidas para los desafíos futuros, sobre todo, en materia de prevención civil de crisis y transformación de conflictos.

- **Lo civil en primer plano:** socialdemócratas y socialistas coinciden en que la prevención y los instrumentos civiles deben tener mayor prioridad para resolver conflictos que los medios militares. Aunque las operaciones militares pueden ser legítimas como «último recurso» en el marco estricto del derecho internacional, para evitar que se produzcan crímenes terribles contra la humanidad, es preciso continuar con una política interior global basada en la paz y en la lógica de acción de lo civil. Para ello es necesaria una política de prevención de crisis, con consenso internacional, que aborde las causas de la violencia. Esta política debe concebirse a largo plazo, estar

sujeta a controles democráticos y basarse en los principios de la solidaridad y la responsabilidad de protección. Su adopción es aún más urgente si se tiene en cuenta que, en muchos países, ganan terreno las tendencias basadas en políticas a corto plazo y solo con el interés propio como objetivo. Sin embargo, las estrategias nacionalistas no consiguen que sea más fácil enfrentarse a los difíciles retos del presente ni contribuyen a superarlos de forma duradera. Entretanto, los resultados de las negociaciones (como las del programa nuclear iraní) demuestran que la diplomacia también puede llegar a buen puerto, incluso en situaciones graves de crisis. Por desgracia, después de años en que los gastos militares se redujeron en todo el mundo, la carrera armamentista vuelve a ser una amenaza en la actualidad, lo que puede causar que la brecha entre los instrumentos de la prevención civil de crisis y la política de seguridad militar siga haciéndose más grande. Esto debe evitarse a toda costa. Por este motivo, socialdemócratas y socialistas defenderán el desarrollo de los recursos civiles. También deben adoptar una posición fuerte, apelando a medidas de seguridad colectivas, a favor de un control más estricto de las transferencias de armas y del apoyo a las negociaciones encaminadas a renovar los acuerdos de control del armamento convencional (y nuclear).

- **Monopolio legítimo del uso de la fuerza y control democrático del sector de la seguridad:** en numerosos países, las fuerzas progresistas – en muchos casos, por motivos comprensibles – guardan distancia con los actores estatales del sector de la seguridad y, por extensión, con cualquier tema político de seguridad. Sin embargo, es necesario que los partidos socialdemócratas y socialistas dediquen mucha más atención a la seguridad interior para evitar que esta quede totalmente en manos de las fuerzas conservadoras y represivas. Únicamente

así podrán erigirse como alternativa al paradigma (normalmente fallido) de la «mano dura» y oponer resistencia al poderoso mito según el cual es preciso limitar los derechos de los ciudadanos y reducir la democracia y la transparencia para conseguir más seguridad. Por este motivo, la política socialdemócrata apuesta por un monopolio estatal y legítimo de la fuerza, sujeto a controles 100 % democráticos, en el que el sector de la seguridad arraigue en la sociedad misma. En tal caso, la formulación de estrategias y objetivos políticos de seguridad, así como los mandatos y los mecanismos de control claros para los actores en el terreno de la seguridad, deben formar parte del debate público y democrático, así como del proceso de toma de decisiones. Además, es necesario seguir trabajando en la prevención de la violencia y el extremismo. El fortalecimiento de la confianza en la sociedad, así como entre los ciudadanos y el Estado, debe entenderse como una labor continua.

5.5 Gobernar las ciudades

Todos los desafíos de la sociedad, así como las oportunidades y las perspectivas, se ven representados en nuestras ciudades. Desde el año 2006, y por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50 % de la población mundial vive de forma oficial en las ciudades, porcentaje que alcanzará el 60 % en el año 2020. Casi todo el aumento demográfico global de los próximos años se producirá en las ciudades. Hasta 3.000 millones de personas en todo el mundo se trasladarán a núcleos de población urbanos en el transcurso de pocos decenios. Se trata del mayor flujo migratorio de nuestra época. La urbanización avanzará particularmente deprisa en los países del hemisferio sur. Las grandes ciudades se erigirán, más aún si cabe, en los núcleos fundamentales del crecimiento económico y

de la generación de cultura y conocimiento. En la actualidad constituyen centros neurálgicos de intercambios financieros y comerciales y, cual ciudades Estado modernas, seguirán ganando influencia en los procesos (económicos) de la globalización.

En muchos lugares, la ciudad representa a un tiempo oportunidad y área donde se concentran los problemas, enclave de prosperidad y zona de barrios precarios. Para muchos significa, en un primer momento, una mejora relativa de sus condiciones de vida; para la población rural empobrecida de una gran parte de los países en vías de desarrollo se convierte en un refugio. Al mismo tiempo, la selva urbana está plagada de riesgos que suponen grandes desafíos para los sistemas municipales de infraestructura, sociales, educativos, sanitarios y de movilidad. Opulencia y miseria se ven confrontados en los espacios más reducidos, donde se hace más patente la dramática agudización de la desigualdad y donde se plantean de forma más inmediata cuestiones sobre pertenencia, participación y diversidad de las comunidades.

Igualmente resulta considerable la presión que sufren los recursos locales, como el suelo y el agua. Las ciudades contribuyen de forma desproporcionada a las emisiones de gases de efecto invernadero: más de dos tercios en todo el mundo. Según el Consejo Asesor sobre el Cambio Climático (WBGU) del gobierno alemán, si las ciudades se siguiesen construyendo como hasta ahora, con cemento y acero, la producción de materiales de construcción consumiría ella sola el margen de emisiones disponibles para todo el mundo de cara a conseguir el objetivo establecido de 1,5 °C. Sin objetivos de desarrollo sostenibles en las políticas municipales, no se podrán cumplir los objetivos marcados para la lucha contra el cambio climático.

Hay quienes siguen de cerca el día a día de muchas metrópolis del mundo a la espera de que puedan producirse enfrentamientos sociales, segregación de comunidades, fracaso en la integración, privatización de la seguridad y anarquía violenta. Sin embargo, las ciudades también pueden ser lugares de democracia y comunidad

donde, en el mejor de los casos, personas de diversidad de orígenes, géneros, clases sociales, edades y orientaciones sexuales conviven y trabajan conjuntamente, y conforman sus condiciones de vida. Las ciudades ya son grandes «máquinas de transformación», y el futuro de sociedades más sociales, sostenibles y democráticas depende, en buena medida, de la evolución de las ciudades.

Las ciudades siempre han sido baluartes de los partidos socialdemócratas, progresistas y socialistas. Junto con sindicatos y movimientos sociales deben participar en la nueva organización de las ciudades en el siglo XXI. Muchos modelos de ciudad, ya sean las «ciudades inteligentes» (*smart cities*), que se basan en las tecnologías de la información y comunicación; las «ciudades resilientes» (*resilient cities*), que ponen el foco en la adaptación, o la ciudad como «marca cosmopolita», ponen el acento en un aspecto del desarrollo urbano y descuidan a menudo los desafíos sociales y democráticos. Socialdemócratas y socialistas contemplan la ciudad como lugar en el que viven personas diferentes y configuran su agenda urbana apostando por vías de desarrollo de emisiones reducidas, por los derechos humanos, por la inclusión social y por la participación democrática. Para ello necesitamos, entre otras cosas:

- **Servicios públicos e infraestructuras consistentes:** los servicios públicos y las infraestructuras tienen que ser operativos, accesibles y asequibles, ya que suponen un requisito indispensable para una buena convivencia y para la prosperidad económica. En particular, se incluyen en este grupo el suministro de energía y agua, la prevención y la eliminación de residuos, la disponibilidad de transporte, sanidad, educación, vivienda adecuada, seguridad pública, cultura y espacios públicos, sobre todo en los distritos más pobres. Dedicar terrenos públicos a una explotación agraria comunal puede, en muchas ciudades, facilitar el acceso a los alimentos de la población urbana. En el pasado, los sistemas públicos han demostrado

ser a menudo más eficientes, universales y tener menos costos sociales. En muchos de estos aspectos, de lo que se trata es de establecer una noción de infraestructura municipal que sirva al bien común, en contraposición a intereses particulares que consideran la ciudad como botín y objeto de especulación, y que buscan seguir comercializando espacios públicos.

Los empleados públicos (y los sindicatos del sector servicios) desempeñan un papel fundamental en la calidad de los servicios. Deben tener la formación adecuada para garantizar esa calidad y deben recibir una buena remuneración para poder igualmente vivir en «su» ciudad y tener derecho a organizarse. La ciudad debe emplear su poder en el mercado para que los procesos de licitaciones públicas exijan el cumplimiento de determinados criterios laborales, sociales y ecológicos. Igualmente, la consecución de buenos puestos de trabajo en la ciudad es fundamental en la reducción de la desigualdad, así como una gestión de las superficies orientada al bien común. Estas iniciativas precisan del margen operativo financiero necesario, para lo cual muchas ciudades deben mejorar sus aptitudes y competencias para recaudar impuestos, pero también deben recibir un aporte justo de los ingresos fiscales, por ejemplo, de empresas internacionales, así como adquirir capacidad de participación en la toma de decisiones nacionales en materia tributaria.

- **Una transición ecológica:** la basura, la escasez de agua y la contaminación del aire, del agua y del suelo repercuten en la calidad de vida de las ciudades. Sin embargo, las ciudades no solo deben ofrecer un entorno saludable para sus habitantes, sino que tienen que contribuir sustancialmente a que el desarrollo de la humanidad pueda realizarse dentro de los límites del planeta. Por esta razón, el desarrollo urbano debe integrar la ecología y la lucha contra el cambio climático. Son muchos

los puntos de partida para un cambio ecológico que reduzca la presión sobre el medio ambiente, entre ellos: medidas para la eficiencia y el ahorro de la energía; construcción de instalaciones solares descentralizadas, por ejemplo, en asentamientos informales; ampliación de las economías circulares; combinación de zonas residenciales con centros de trabajo; transporte libre de emisiones en centros urbanos; medidas concretas que favorezcan los sistemas de construcción de bajo consumo energético, o la construcción de un transporte de cercanías de emisiones reducidas. Para que una política municipal sea ampliamente aceptada, debe tener en cuenta el conjunto de los diferentes aspectos sociales y ecológicos.

- **Confianza:** la confianza (en la conciudadanía, el gobierno local, los servicios públicos) es la condición previa determinante para que exista un buen clima urbano. Para ello son necesarios mecanismos y procesos que refuercen las relaciones de confianza y disminuyan su desgaste. De lo que se trata aquí, en un principio, es de gobiernos municipales que se consideren mediadores y organizadores del cambio, que tomen decisiones lógicas y que tengan recursos y capacidad para concebir proyectos y para ponerlos en práctica. Un paso importante hacia una mayor confianza lo constituye la lucha contra la corrupción (también la corrupción a pequeña escala), por ejemplo, mediante la transparencia en los contratos de adjudicaciones públicas o directivas anticorrupción en la administración pública.

Al mismo tiempo existe en las sociedades urbanas un gran potencial de personas, por un lado, que quieren contribuir a dar forma a la convivencia en los barrios, y de movimientos, por otro, que reivindican sus propias demandas sobre el desarrollo de la ciudad y que aportan nuevas ideas. Aquí es donde son necesarias posibilidades de participación

democrática (por ejemplo, mediante procedimientos de participación en los procesos de planificación urbana, presupuestos participativos, mesas redondas o gestión de los barrios), pero también mecanismos civiles para solventar conflictos que, por ejemplo, medien entre quienes ya están allí y quienes llegan en gran número. La participación solo puede funcionar si administraciones y gobiernos locales autorizan la influencia pública y la toman en serio, y si la ciudadanía reconoce la obligación de los compromisos. Por lo que respecta a la participación democrática en la política municipal, hay que prestar atención para que la participación no se convierta en un privilegio y hay que adoptar medidas para que puedan participar quienes menos voz tienen, que son precisamente las personas de quienes la ciudad social debe ocuparse con mayor empeño. Además, dada la gran fuerza de atracción que ejercen las ciudades sobre quienes emigran, la «condición de ciudadano», así como el acceso a determinados derechos que tiene asociada, debe basarse en criterios distintos al de nacionalidad, como puede ser el lugar de residencia o la participación en la comunidad. Las «ciudades refugio», como Nueva York o San Francisco, donde las personas, independientemente de su estatuto de residencia, disfrutan de protección y tienen acceso a trabajo, a vivienda y a servicios sociales, ya han comenzado a caminar en esta dirección.

5.6 Tierras malas: por una transición agraria

Para lograr una transformación socioecológica eficaz, pocos factores son tan importantes como nuestros métodos de producción agrícola y nuestra forma de alimentarnos. La agricultura es la base productiva y existencial de más de un tercio de la humanidad: alimenta a las

personas y es una de las más importantes causas humanas del cambio climático, ya que emite algo más de un 40 % del total de gases de efecto invernadero. Las estructuras agrícolas existentes continúan dañando el medio ambiente y agravando la desigualdad sin dar una solución sostenible al problema del hambre.

Es cierto que los actuales sistemas agrarios de alimentación y producción suministran al mercado una gran cantidad de alimentos. Y también que las cosechas récord y los bajísimos precios de los cereales han convertido en episodios de corta duración las revueltas causadas por el hambre en 2008 y 2011. Sin embargo, el sistema de alimentación mundial sigue siendo propenso a las crisis y, en su actual estado, tiene unos enormes costos sociales y ecológicos. Estos son algunos de ellos: sobreexplotación y degradación de superficies agrícolas; enormes emisiones de CO₂ resultantes de la ganadería y de la tala de árboles; derroche y contaminación de las aguas; riesgos para la salud por el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas; reducción de la diversidad de especies de plantas útiles, con el riesgo de que las generaciones venideras se adapten peor a los cambios medioambientales; mayor propensión de las plantas a las enfermedades y resistencias debido al uso de pesticidas sintéticos; y una mayor dedicación a las exportaciones que, si bien crea puestos de trabajo y genera ingresos, también está sujeta a las fluctuaciones de precios y a las disposiciones comerciales, lo que genera inseguridad alimentaria en el ámbito local debido al cambio de cultivo de las superficies.

El hambre ha disminuido mucho en todo el mundo durante las últimas décadas, pero casi 800 millones de personas la siguen sufriendo y 2.000 millones padecen malnutrición. Y la competencia por las superficies de cultivo ha vuelto a aumentar en los últimos años. Solo el 43 % de los cereales cultivados sirven como alimento: el resto se procesa para obtener piensos, combustibles verdes y materias primas industriales destinadas sobre todo a los países desarrollados. También en la agricultura se da el fenómeno de que no solo es

uno de los principales causantes del cambio climático, sino también una de sus víctimas. En los próximos años, se perderá mucha superficie agrícola cultivable a causa de las sequías, las inundaciones y la salinización de los suelos causada por el aumento del nivel del mar.

Agricultura sometida a la presión de los mercados

Muchos de los problemas expuestos provienen sobre todo de una agricultura industrializada que, en todo el mundo, representa solo una parte pequeña, si bien creciente, de la producción alimentaria, y aun así influye decisivamente en todo el sistema. Para poder rentabilizar las enormes inversiones que recibe, esta agricultura debe apostar por los monocultivos extensivos, la explotación intensiva y los intereses de aquellos consumidores que tienen poder adquisitivo. En ella no importan las necesidades sociales y ecológicas ni la implantación de un desarrollo agrícola sostenible. Además, el sistema agrario industrializado multiplica los problemas, pues en él podemos observar bajo lupa una concentración de fenómenos diversos que también se aprecian en el resto de la economía mundial.

En los últimos años, la economía agraria ha presenciado maniobras de fusión y concentración con un impacto mayor que en ningún otro sector. Según el informe *Konzernatlas 2017* (un mapamundi de los grupos empresariales que se reparten el sector alimentario), tan solo cuatro grandes grupos controlan el 70 % del comercio mundial de productos agrícolas, tres dominan el 50 % del mercado mundial de tecnología agraria y, con la adquisición de Monsanto, Bayer tiene ahora un tercio del mercado mundial de semillas comerciales y un cuarto del mercado de pesticidas. En algunos sectores, la cuota de mercado es aún mayor. Así, por ejemplo, cuatro quintos del mercado mundial del té están en manos de tan solo tres grupos. A ello se suma el hecho de que los grandes grupos están cada vez más interconectados a lo largo de la cadena de suministro.

Con frecuencia, detrás de un conjunto de fusiones, operan sociedades de inversión que penetran en este rentable negocio y someten a la lógica de los mercados financieros uno de los sistemas cruciales para el desarrollo humano. Los fondos de alto riesgo y los bancos dominan además el comercio del trigo; ha aumentado considerablemente el porcentaje del comercio total sometido a especulación; se han fundado sociedades de inversión especializadas en economía agraria y se han emitido fondos de superficie agrícola. Esta evolución ha favorecido aún más el acopio de grandes superficies agrarias y derechos de regadío desde la crisis alimentaria de 2008, sobre todo por parte de inversores y empresas agrícolas privadas, pero también estatales, que trabajan mano a mano con los gobiernos locales. En África, el acaparamiento de tierras se concentra sobre todo en países que adolecen de relaciones jurídicas inseguras y albergan un gran porcentaje de personas hambrientas.

En última instancia, estos fenómenos generan grandes dependencias respecto a compradores y proveedores individuales y fomentan la privatización del conocimiento, la pérdida de métodos de cultivo alternativos y una gran presión sobre los precios en toda la cadena de suministro que, al final, es la (cor)responsable de los bajos ingresos, los malos salarios y las deficientes condiciones de trabajo existentes. La agricultura minifundista y descentralizada – imprescindible para un abastecimiento alimentario constante – debe competir a menudo en condiciones desiguales con empresas multinacionales y termina siendo desbancada, lo que repercute en el suministro alimentario local y regional.

La construcción de sistemas de alimentación locales y regionales

Sin embargo, en muchos lugares se ha emprendido un cambio de rumbo hacia sistemas agrícolas ecológicos diversificados que, además de sustituir la agricultura industrial, fomentan la economía

campesina de subsistencia. El concepto de ecologismo agrícola, que ya hoy practican millones de pequeños agricultores, ofrece una alternativa para reorientar la agricultura hacia metas sociales y ecológicas. Su objetivo es mejorar la fertilidad del suelo con métodos de cultivo muy diversos y una gran diversidad de especies, reemplazar las sustancias químicas, lograr una oferta alimentaria más equilibrada y una agricultura en general más resistente, y conseguir que quienes viven de la agricultura obtengan ingresos estables. Los primeros análisis muestran que estos planteamientos resultan muy productivos precisamente allí donde la necesidad de alimentos es más acuciante. Además, con frecuencia requieren mucho trabajo y crean más empleo precisamente en las zonas agrícolamente pobres. Y, a diferencia de la agricultura industrial, que la mayoría de las veces persigue un objetivo a costa de otros factores, los sistemas agrarios ecológicos tienen la capacidad de conciliar metas tan distintas como la productividad, la protección del medio ambiente, la resiliencia y la calidad de la alimentación. La creación de sistemas de alimentación locales es fundamental para el desarrollo urbano, sobre todo si tenemos en cuenta la rápida urbanización de los suelos. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos, incluso de países donantes, sigue favoreciendo estrategias industriales. El sistema actual está favorecido por diversos factores, por ejemplo las subvenciones a determinadas plantas útiles y a la energía, la intensa dedicación de la investigación a la agricultura industrializada o el poder de presión de los grandes grupos empresariales, pero también la expectativa de obtener alimentos y tipos de alimentación baratos.

Ante todo ello, los partidos socialdemócratas, socialistas y progresistas también deben ocuparse, y con más brío que hasta ahora, de las cuestiones relacionadas con la agricultura y la alimentación. Entre estas cuestiones están:

- **Apoyar y fomentar sistemas agrarios ecológicos:** el hambre solo se puede remediar in situ, mediante la soberanía

alimentaria y la producción local. El autoabastecimiento alimentario regional constituye, allí donde es posible, la columna vertebral del desarrollo agrícola. En este sentido, la creación y la conservación de mercados de alimentos locales y de canales de distribución regionales es tan importante como el acceso a la tierra y al agua. A su vez, para alcanzar estos objetivos hacen falta relaciones seguras de arrendamiento y propiedad, sobre todo en forma de propiedad colectiva, además de los correspondientes derechos de uso del agua. Las legislaciones sobre semillas y los bancos públicos de semillas pueden fomentar la variedad de plantas útiles cultivadas y facilitar la adaptación a los cambios medioambientales. Para contribuir al desarrollo y la difusión de estos planteamientos, se deben investigar de forma integrada y específica los problemas que plantean las estrategias agrarias ecológicas y la alimentación regional, incorporando la experiencia acumulada por las personas que trabajan la tierra. Por su parte, los gobiernos nacionales y locales pueden incentivar los métodos de cultivo ecológicos y las cooperativas agrarias, ofreciendo subvenciones o facilitando el acceso a la tierra. Las administraciones pueden, además, aportar una base de subsistencia a este tipo de explotaciones agrícolas incorporando de manera fiable los alimentos regionales de cultivo ecológico a, por ejemplo, los programas de lucha contra el hambre (como el Programa Fome Zero en Brasil), las cocinas comunitarias, los hospitales y los menús escolares.

- **Un marco regulador para la industria agraria:** la transición agraria no tendrá lugar de hoy para mañana. Socialdemócratas y socialistas deben esforzarse, como mínimo, por atenuar los efectos negativos del modelo de negocio de muchos grandes grupos y limitar su poder de bloqueo. Para ello es preciso ejercer un mayor control de las fusiones, tomar medidas para

reducir los abusos de poder en el mercado, hacer públicas las compras de tierras por parte de grupos e inversores y prohibir la especulación con los alimentos. La agricultura es también una actividad cuyas condiciones laborales son peores que las de casi cualquier otro sector económico, asimilables a veces a las de la esclavitud. Precisamente en este contexto, tienen especial importancia la lucha por unos salarios que aseguren el sustento, el derecho a organizarse y la obligación de proteger con la debida diligencia los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de suministro. Y una estrategia para defender todo ello consiste en firmar acuerdos básicos internacionales con las federaciones sindicales globales. En conjunto, también es necesario un nuevo marco global para el comercio y la inversión agrarios. El sistema de comercio mundial y los acuerdos regionales y bilaterales deben velar aún más por los intereses de los países pobres, por ejemplo en lo relativo a la apertura de mercados, los derechos de propiedad, las normas excepcionales para subvenciones, la seguridad alimentaria, las restricciones temporales a la importación o, algo que parece casi utópico, el fomento de procedimientos de cultivo ecológicos.

- **Un sistema de alimentación democrático:** según Olivier de Schutter, quien fuera Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, una de las causas de que los métodos agrícolas ecológicos no estén más extendidos es que los procesos políticos de decisión no prestan oído a las personas que trabajan la tierra. Es necesario, por tanto, reforzar los derechos de participación. Los consejos alimentarios – como los que hay por ejemplo en muchos países de Latinoamérica y reúnen en torno a una misma mesa a productores, consumidores, instituciones locales y regionales, científicos y comerciantes – pueden ser una forma de recobrar el control

de los sistemas de alimentación locales y regionales, de formular estrategias para crear circuitos alimentarios, de aplicar conjuntamente ideas para reorganizar la agricultura y de ejercer una supervisión adecuada. Por último, también debe tenerse en cuenta la influencia del consumo en el problema alimentario, y se debe crear conciencia en el público de que cambiando nuestros hábitos de alimentación (por ejemplo, comiendo menos carne), gastando menos combustibles agrícolas y combatiendo el enorme derroche de alimentos también contribuiremos a hacer social y ecológicamente más sostenible nuestro sistema de alimentación.



6 Perspectivas

Cuando el 1° de mayo se declaró «Día Mundial de la Lucha Obrera» en el I Congreso de la Internacional Socialista reunido en 1889 en París, los principios que regían eran los siguientes: «la organización del capitalismo es de carácter nacional. El único medio de oposición pasa por la solidaridad internacional del movimiento obrero». Hoy, casi 130 años después, constatamos que lo verdaderamente internacional es el capitalismo.

Su apariencia externa puede haber cambiado pero, por lo demás, las antiguas cuestiones sociales reaparecen en el capitalismo globalizado actual simplemente en una nueva presentación. Tanto en el pasado como en el presente, la lucha consiste en implantar normas sociales para los mercados e impedir la brutalidad de la explotación y la crueldad. En todos los casos, se trata de conquistar y defender el carácter democrático de nuestras sociedades. Sin embargo, es mucho más difícil liderar ambas luchas (la social y la democrática) bajo las condiciones de la globalización. Las conquistas de la globalización son incontestables. Son muchos los países que han conseguido reducir el número de personas que vivían en la pobreza. Aun así, tales éxitos no son más que una parte de la historia, tal como puede leerse en el presente informe. ¿El precio de los éxitos del capitalismo globalizado pasa por renunciar a las reglas civilizadoras que protegen espacios naturales y sociales frente a los excesos de la explotación económica? ¿Por renunciar a las reglas de control de las

tecnologías que entrañan riesgos? ¿O por prescindir de aquellas que facilitan la solidaridad colectiva y la participación de quienes son económicamente más débiles? ¿O bien por suprimir las reglas que priorizan las instituciones y las decisiones democráticas por encima de las fuerzas del mercado, guiadas por un ánimo de lucro descontrolado? En definitiva, si el precio que debe pagarse incluye tamaño sacrificio, entonces es un precio demasiado alto.

A pesar de todo, en las últimas décadas, la economía globalizada y todas las convulsiones derivadas se han aceptado casi siempre sin rechistar. Las únicas voces independientes fueron las que se pronunciaron en contra del recorte del gasto público y de la privatización de las empresas públicas. El imperativo categórico del discurso globalizador rezaba «¡adáptate!», una expresión difundida con ligeras variaciones por todo el mundo. No son pocas las personas que, a día de hoy, creen que los mercados desvinculados de cualquier regla social son una ley natural.

En cierto sentido, el capitalismo financiero globalizado de nuestros días se beneficia de las declaraciones de independencia de las grandes revoluciones democráticas. Pasa por alto las declaraciones de derechos humanos y civiles e ignora las conquistas del movimiento obrero. También pone en riesgo la cohesión social de las sociedades. La orden «¡adáptate!» no representa ninguna promesa. De hecho, supone una amenaza porque, desde una perspectiva social, implica una involución hacia la heteronomía. Este imperativo sacude hasta lo más esencial de nuestro desarrollo como civilización, desde tiempos de la Ilustración: la libertad de poder elegir una vida independiente. El mensaje de este imperativo no es que vivamos como queramos, sino como se supone que debemos hacerlo. Llevado hasta sus últimas consecuencias, este mensaje es igual de antiliberal, antidemocrático y antisocial que los postulados nacionalistas o populistas de la derecha.

En este punto, nos gustaría dejar muy claro que cuando hablamos de tomar las riendas del capitalismo no nos referimos

únicamente al aspecto económico. Más bien se trata de establecer un nuevo orden que permita que todas las personas tengan la posibilidad de llevar una vida mejor. Cuando la riqueza está en manos de unos pocos o de grandes empresas internacionales, el objetivo es incidir en las condiciones de vida de aquellos que no participan en esa riqueza, o que solo lo hacen de forma escasa. En definitiva, estamos hablando de condiciones de trabajo humanas, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y, en efecto, también de la guerra y la paz.

Desde siempre se ha querido convencer a las fuerzas progresistas y socialdemócratas de que no es posible cambiar las circunstancias imperantes. Sin embargo, siempre nos hemos mantenido firmes y fieles a nuestro sentido de la justicia. Nunca nos hemos conformado con estructuras encorsetadas y siempre hemos luchado por una convivencia social y justa, a pesar de todas las adversidades. En las épocas de incertidumbre del pasado siempre se confió en las fuerzas políticas progresistas para inocular la idea de un futuro mejor y para ponerse manos a la obra y conseguirlo. Tenemos que volver a recuperar esa fortaleza para encontrar las respuestas a los desafíos que tenemos ante nosotros.

Sin duda, una persona sola no puede conseguir nada. En solitario, nadie puede conseguir condiciones de trabajo seguras o salarios justos y dignos en todo el planeta. Las fuerzas progresistas lo saben muy bien. En solitario, nadie puede proporcionar seguridad, salud pública, una educación de calidad o la paz. En solitario, nadie puede imponer límites a los bancos ni a los fondos de inversión. Por este motivo, los problemas surgidos a raíz de la globalización económica solo pueden tener una solución política adecuada a escala global. La creación de un orden justo global requiere que las fuerzas progresistas colaboren en el nivel internacional. La premisa aplicable es muy simple: los cambios solo pueden conseguirse en común y la solidaridad genera poder para estos cambios. Al fin y al cabo, la

solidaridad es una fuerza muy poderosa que también mantiene unidas a nuestras sociedades en todo el mundo.

Una alianza efectiva de las fuerzas progresistas a escala internacional solo puede conseguirse si no nos espantamos frente a nuevas vías organizativas. En este contexto, Willy Brandt manifestó lo siguiente: «Nada viene por sí solo y muy pocas cosas duran para siempre. Por eso, recuerden su fuerza y que cada época requiere sus propias respuestas y que debemos estar a su altura si queremos lograr algo positivo». Hagamos nuestras estas palabras para transitar con espíritu crítico por nuevas vías.

El presente informe pretende impulsar este objetivo y servir de base para su consecución. Este texto incita a pensar de forma visionaria en un nuevo orden global en favor de la justicia y la solidaridad internacionales, a la vez que aporta recomendaciones prácticas de acción.

La Alianza Progresista está destinada a convertirse en una plataforma desde la que continuar e intensificar el debate sobre los factores claves para conseguir una sociedad más justa. En su seno, acoge a los principales actores socialdemócratas, socialistas y progresistas, por lo que ocupa una posición privilegiada para propiciar el intercambio de ideas.

Asimismo, los partidos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil de esta red deben crear nuevas alianzas aprovechando su importante bagaje y experiencia, su extensa red de socios y su campo de actuación. También deben ser capaces de dedicarse a largo plazo a los temas tratados en la Alianza Progresista y de situarlos en el centro de su actividad política.

La globalización no es un destino que el individuo deba aceptar con impotencia. Podemos diseñar la interacción entre política, economía y sociedad pensando en el interés de las personas, siempre que la transformación se sustente en los pilares de un movimiento firme.



Biografías



Luiz Dulci

Director del Instituto Lula, trabajó como Secretario General de la Presidencia de Brasil donde ocupó el cargo de Ministro desde 2003 hasta 2010.

Nació en 1956 en Santos Dumont, Minas Gerais. Dulci se graduó en la Universidad Federal de Rio de Janeiro en lenguas clásicas y literatura. Trabajó como profesor de la enseñanza media y secundaria, impartió cursos en la educación de adultos en la Amazonía y trabajó como profesor universitario. Fue el primer presidente del sindicato de los trabajadores de la educación Sind-UTE en Minas Gerais y fue uno de los líderes del llamado “nuevo sindicalismo” en Brasil. Fue un miembro fundador del Partido de los Trabajadores en 1980 y fue elegido como primer secretario de organización del partido. Fue elegido diputado federal en 1982. Entre 1993 y 1997 trabajó como Secretario de Gobierno y luego como Secretario de Cultura en el gobierno municipal de Belo Horizonte, MG. Fue el Secretario General del Partido de los Trabajadores desde 1996 hasta 2002. Es autor y coautor de varios libros con un enfoque en temas de política, educación y cultura.



Sigmar Gabriel

desde 2017, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania. En el periodo comprendido entre 2013 y 2017 fue Ministro de Economía y Energía. Entre 2009 y 2017 ocupó la Presidencia del Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD).

Nació en 1959 en la población de Goslar. Es licenciado en Magisterio en las especializaciones de Política, Sociología y Filología Germánica. De 1990 a 2005 fue miembro del Parlamento (Landtag) de Baja Sajonia y, de 1999 a 2003, Presidente del estado federado de Baja Sajonia. Desde 2005 es miembro de la Dieta Federal (Bundestag) alemana. Entre 2005 y 2009 ocupó la cartera del Ministerio Federal de Medio Ambiente.



Risa Hontiveros

desde 2016, miembro del Senado de las Filipinas por Akbayan (Partido de Acción Ciudadana), cuya Presidencia ostenta desde 2012.

Nació en 1966 en Manila. Es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Ateneo de Manila. Inició su carrera profesional como periodista y presentadora. De 2004 a 2010 fue miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas. Además de su carrera política, desde muy pronto mostró su compromiso con iniciativas surgidas en la sociedad civil a favor de los derechos sociales y de la mujer.



Pascal Lamy

Entre 2005 y 2013 fue el Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Previamente, entre 1999 y 2004, fue el Comisario de Comercio de la UE.

Nació en 1947, cerca de París. Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Administrativas, entre otras, por la École Nationale d'Administration (ENA). En 1969 ingresó en el Partido Socialista (Parti Socialiste). Ocupó distintos cargos en la política francesa, entre ellos, el de consejero del entonces Ministro de Economía y Finanzas Jaques Delors (1981) y el de Director Adjunto en el gabinete del Primer Ministro Pierre Mauroy (1983–1984). Lamy es Presidente Adjunto de la Foundation for European Progressive Studies.



Benjamin William Mkapa

De 1995 a 2005 fue Presidente de Tanzania.

Nació en 1938 en Masasi. Es licenciado en Filología Inglesa y Política Internacional por la Universidad Makerere de Uganda y la Universidad de Columbia de Nueva York. Tras iniciarse profesionalmente en el periodismo, más adelante dio el salto a la política. De 1977 a 1980 y de 1984 a 1990 fue Ministro de Asuntos Exteriores de su país. Entre 1996 y 2005 fue el Presidente del partido en el poder, el Chama Cha Mapinduzi (CCM).



Sergei Stanishev

desde 2011, presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) y, entre 2005 y 2009, Primer Ministro de Bulgaria. Durante su mandato, Bulgaria ingresó en la UE.

Nació en 1966 en la población ucraniana de Jersón. Es doctor en Historia por la Universidad Estatal de Moscú. De 2001 a 2005 y de 2009 a 2014 fue diputado del Parlamento búlgaro. Entre 2001 y 2014 fue el Presidente del Partido Socialista Búlgaro. Desde 2014 es miembro del Parlamento Europeo.



Martin Schulz

Presidente electo del Partido Socialdemócrata de Alemania. Entre 2012 y 2017 ocupó el cargo de Presidente del Parlamento Europeo.

Nació en 1955, cerca de Aquisgrán. Se formó como librero. De 1987 a 1998 fue alcalde de Würselen, una pequeña ciudad renana. De 1994 a 2017 fue miembro del Parlamento Europeo, donde entre 2000 y 2004 fue Presidente del Grupo del SPD. Asimismo, entre 2004 y 2012, fue Presidente del Grupo Socialista Europeo. En 2014 se presentó como candidato principal común de los socialdemócratas europeos para ocupar la Presidencia de la Comisión de la UE. De 2013 a 2017 fue el representante de la UE del Comité Ejecutivo del SPD.



Jochen Steinhilber

Desde 2010 dirige la Unidad de Política Global y Desarrollo de la Fundación Friedrich Ebert y es el interlocutor para cuestiones fundamentales en materia de política internacional. Previamente ya había dirigido la oficina de la Fundación en São Paulo.

Nació en 1970, cerca de Stuttgart. Es licenciado en Ciencias Políticas y Economía Nacional por la Universidad de Marburgo.



Konstantin Woinoff

Coordinador de la Alianza Progresista. Desde 1999 trabaja para el comité ejecutivo del SPD, entre otros, en calidad de director de la oficina de la vicepresidenta Heidemarie Wieczorek-Zeul y, en la actualidad, como vicesecretario internacional.

Nació en 1971 en Múnich. Licenciado en Sociología, estudios que cursó en Berlín, Múnich y Nairobi.



ALIANZA
PROGRESISTA